



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSGRADO**



MAESTRÍA EN DERECHO

**ESTRATEGIAS JURÍDICAS SOCIALES PARA
DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL DELITO
FEMINICIDIO EN EL PERÚ – 2017**

TESIS

**PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO
EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTORA:

ABG. LORA DE LA CRUZ DE RUBIO VIOLETA

ASESOR:

DR. RICARDO PONTE DURANGO

Lambayeque - Perú

2017

Estrategias jurídicas sociales para disminuir el crecimiento del delito Feminicidio en el Perú - 2017

Abg. Lora De La Cruz De Rubio Violeta I.

Autora

Dr. Ricardo Ponte Durango

Asesor

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado de: MAESTRO en Derecho con Mención en Ciencias Penales.

APROBADO POR:

Dr. Amador Mondoñedo Valle

Presidente del Jurado

Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo

Secretario del Jurado

Mg. Oscar Vílchez Vélez

Vocal del Jurado

Agosto, 2017

DEDICATORIA

A mis padres, esposo y hermanos por ser la fuerza y la razón de mi existencia.

AGRADECIMIENTO

Agradecer a Dios por darme la vida, a mis padres por hacer de mí una persona de bien y ser parte en mi formación profesional, a mi esposo y hermanos por su apoyo incondicional, a mi asesor de tesis y los docentes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo por los conocimientos y experiencias transmitidos durante la Maestría.

ÍNDICE

DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
ÍNDICE	5
ÍNDICE DE TABLAS	7
ÍNDICE DE FIGURAS	8
RESUMEN	9
ABSTRACT	10
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	24
1.1 Ubicación	25
1.2 Cómo surge el problema.	34
1.3 Cómo se declara y qué características tiene	41
1.4 Descripción detallada la metodología empleada.	60
1.4.1. Método	61
1.4.2. Tipo de Investigación:	61
1.4.3. Diseño de investigación:	61
1.4.4. Tipo de análisis:	62
1.4.5. Forma de tratamiento de los Datos:	62
1.5. Hipótesis y Análisis de las variables.	62
1.6. Diseño de contrastación de la hipótesis.	63
1.6.1. Área de estudio-ubicación	63
1.6.2. Población y muestra:	64
1.7. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.	65
1.7.1. Materiales	65
1.7. 2. Técnica-Instrumento.	65
1.8. Métodos Y Procedimientos Para La Recolección De Datos.	66
1.9. Análisis Estadísticos de los Datos.	68
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	70
PARTE I	71
CAPÍTULO I: ESTRATEGIAS JURÍDICO SOCIALES.	71
1.1 Estrategias Jurídico Sociales	72
1.2. Caso Dar es Salaam	74
1.3. Caso Filipinas	82
1.4. Conclusiones:	92
PARTE II	96
CAPÍTULO II: FEMINICIDIO	96
2.1. Definición de Femicidio.	96
2.2. Clases de femicidio/feminicidio: tipologías existentes	98
2.3.1. Bien jurídico protegido.	99
2.4. Estadísticas de sobre el feminicidio en el Perú.	103

2.4.1.	Relación del agresor con la víctima	104
2.4.2.	Características de la agresión	106
2.5.	El feminicidio en Perú aumentaron del 2015 al 2016.	113
2.6.	Conclusiones de la PARTE II Feminicio	117
CAPÍTULO III: RESULTADOS		120
3.1.	Resultados	121
3.2.	Discusión y Contrastación de resultados con respecto a los objetivos	132
3.3	Contrastación de la hipótesis	138
3.4.	Discusión de los resultados	139
CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA		140
4.1	Título	141
4.2	Introducción	141
4.3	Objetivos	143
4.4	Desarrollo de estrategias	143
4.6	Consideraciones finales	154
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		156
5.1.	Conclusiones	157
5.2	Recomendaciones	158
REFERENCIAS		159
Anexos		163

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Víctimas de feminicidio y tentativa junio del 2017 y 2016	16
Tabla 2. Tasa de Feminicidios en América Latina y el Caribe en comparación con Perú . . .	19
Tabla 3. Operacionalización de variables	63
Tabla 4. Distribución de la muestra	64
Tabla 5. Considera que las estrategias jurídicas del Poder Judicial dan resultados en la lucha contra el delito de feminicidio.	121
Tabla 6. Considera que se deben tener en cuenta estrategias sociales para ayudar a disminuir el crecimiento del feminicidio.	122
Tabla 7. Actualmente las normas jurídicas están frenando el delito de feminicidio	123
Tabla 8. Está de acuerdo que las leyes penales recientemente dictadas contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país	124
Tabla 9. Considera que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio	125
Tabla 10. Está de acuerdo que los criminales de feminicidio han perdido el sentido de humanidad	126
Tabla 11. Percibe Ud. Que el feminicidio íntimo sigue aumentando en el país	127
Tabla 12. Percibe Ud. Que el feminicidio íntimo familiar sigue aumentando en el país	128
Tabla 13. Percibe Ud. Que el feminicidio infantil sigue aumentando en el país	129
Tabla 14. Percibe Ud. Que el Feminicidio sexual sistémico sigue aumentando en el país .	130
Tabla 15. Percibe Ud. Que el Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas sigue aumentando en el país	131
Tabla 16. Actividades del Programa de sensibilización	146

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Talleres de sensibilización	77
Figura 2. Los cinco pilares del sistema de justicia penal	85
Figura 3. Resolución de problemas Fuente: (Shaw & Travers, 2005, p.90).	88
Figura 4. Sociedad Ciudadana	89
Figura 5. Estructura de la Unidad Policial	90
Figura 6. Edad de las víctimas	103
Figura 7. Relación de agresor con la víctima - 2003	104
Figura 8. Relación de agresor con la víctima - 2003	104
Figura 9. Relación de agresor con la víctima - 2005	105
Figura 10. Ámbito de la agresión - 2003	106
Figura 11. Ámbito de la agresión - 2004	107
Figura 12. Ámbito de la agresión - 2005	107
Figura 13. Modalidades de inhabilitación a la víctima - 2003	109
Figura 14. Modalidades de inhabilitación a la víctima - 2004	109
Figura 15. Inhabilitación a la víctima - 2005	110
Figura 16. Medio que utilizó el agresor para asesinar a la víctima - 2003	111
Figura 17. Medio que utilizó el agresor para asesinar a la víctima - 2004	111
Figura 18. Medio que utilizó el agresor para asesinar a la víctima - 2005	112
Figura 19. Resultados de las estrategias jurídicas del Poder Judicial	121
Figura 20. Estrategias sociales	122
Figura 21. Las normas frenan el Feminicidio	123
Figura 22. Las nuevas leyes contribuyen a disminuir el feminicidio	124
Figura 23. Estrategias basadas en valores	125
Figura 24. Los criminales del feminicidio han perdido el sentido de humanidad	126
Figura 25. El feminicidio sigue aumentado	127
Figura 26. El feminicidio íntimo familiar sigue aumentado	128
Figura 27. El feminicidio infantil sigue aumentado	129
Figura 28. El feminicidio sexual sistémico sigue aumentado	130
Figura 29. El feminicidio por ocupaciones estigmáticas	131
Figura 30. Denuncias por violencia familiar	132
Figura 31. Sentencia condenatoria por cometer delitos en la modalidad de feminicidio	133
Figura 32. Población penitenciaria interna por cometer feminicidio	134
Figura 33. Población reclusa por cometer feminicidio, según departamento	135
Figura 34. Diagrama de Flujo Mujeres Unidas	145
Figura 35. Policía Auxiliar del Ministerio Público	147

Resumen

La presente investigación tiene como finalidad Proponer Estrategias jurídico sociales para disminuir el crecimiento del feminicidio en el Perú, para ello se formula la siguiente interrogante: ¿Qué estrategias permitirán disminuir el crecimiento de feminicidio en el Perú?

El planteamiento hipotético es: “La propuesta de Estrategias jurídico sociales, permitirá disminuir el crecimiento del feminicidio en el Perú”, el enfoque metodológico es cuantitativo con un diseño no experimental, usando como técnica la encuesta y el instrumento como cuestionario, asimismo se aplicó el análisis documental, el método histórico jurídico.

Entre las conclusiones tenemos: Se ha podido demostrar que las estrategias jurídicas sociales han permitido disminuir los delitos como es el caso de las ciudades de Dar Es Salaam y Filipinas, consideradas unas de las más seguras del mundo, en ese sentido bajo este antecedente exitoso se ha creado mediante un Proyecto de Ley tres estrategias jurídico sociales como son: Estrategias jurídicas sociales integradoras, Servicio de vigilancia integrada y Participación ciudadana. Estas tres herramientas trabajan de forma integral y coordinadamente entre el Ministerio Público y la comunidad o colectividad, logando de forma más eficiente y eficaz la Prevención, disuasión y disminución de los delitos de feminicidio.

Palabras clave: Estrategias jurídicas, estrategias sociales, delito y feminicidio.

Abstract

The purpose of this research is to propose legal and social strategies to reduce the growth of femicide in Peru, for which the following question is formulated: What strategies will reduce the growth of femicide in Peru?

The hypothetical approach is: "The proposal of legal social strategies will reduce the growth of femicide in Peru," the methodological approach is quantitative with a non-experimental design, using as a technique the survey and the instrument as a questionnaire, Documentary analysis, the legal historical method.

Among the conclusions we have: It was possible to demonstrate that social legal strategies have allowed to reduce the crimes as it is the case of the city Dar Es Salaam and Philippines, considered one of the safest in the world, in that sense under this successful antecedent has been created Through a Bill three legal social strategies such as: Awareness workshops at institutional level, Integrated Surveillance Service and Citizen Participation. These three tools work in a comprehensive and coordinated way between the Public Ministry and the community or community, achieving a more efficient and effective prevention, deterrence and reduction of crimes of femicide.

Key words: Legal strategies, social strategies, crime and femicide.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se intitula: “Estrategias jurídicas sociales para disminuir el crecimiento del delito feminicidio en el Perú - 2017”, para efectos de esta investigación se procederá a describir trabajos previos o antecedentes de estudio relacionados a la problemática que se está desarrollando:

Pues, a nivel internacional se tiene el aporte de Pacheco Arévalo (2013), Colombia, en su tesis titulada “El feminicidio y la violencia de género en la provincia de Ocaña, norte de Santander, entre los años 2004 – 2011. El autor concluye: “El Sistema Penal Colombiano ha hecho varios cambios a lo largo de la historia, incluyendo la especial protección a las mujeres por su situación de vulnerabilidad, el sentido de no querellable de la violencia intrafamiliar, que se ha visto afectado por unas leyes, como lo fue la Ley de Seguridad Ciudadana, pero de nuevo se toma de oficio y no desistible con la Ley 1542 de 2012”. (...) “Se han presentado avances tales como entenderse agotado el requisito de la conciliación con el agresor con el simple hecho de que la mujer manifieste no querer conciliar con la persona, aparte desconocido por muchos funcionarios, pero igualmente incluidos en la legislación”(…). “Las medidas de seguridad en busca de protección, y la carga probatoria por parte de la Fiscalía en delitos como la violencia verbal y psicológica, quitándole a la mujer la necesidad de tener que probar los hechos para que se den por ciertos” (Pacheco Arevalo, 2013, p. 4).

Finalmente Pacheco propone mejoras en el Código Penal de Colombia, recomendado eliminar el requisito de procedibilidad de la Conciliación en el delito de Violencia Intrafamiliar.

Asimismo, Ramos de Mello (2015), Barcelona. En su tesis titulada “Feminicidio: un análisis criminológico – jurídico de la violencia contra las mujeres “En su objetivo de esta investigación que lleva parte de un examen de los diferentes conceptos de feminicidio, de sus orígenes, de sus diferencias connotaciones, así como de si subdivisión y marcos normativos internacionales en orden a realizar un análisis del panorama de la tipificación del feminicidio llevado a cabo, hasta la actualidad en los países latinoamericanos. Para definir los objetos de la investigación, utilizaremos tres clasificaciones diferentes, a saber; países que

han adoptado leyes autónomas (es decir; fuera del Código Penal) como Costa Rica y Guatemala; países que han promulgado legislaciones internan que contemplan el tipo penal autónomo de feminicidio, pero incluyéndolo en el Código Penal, como es el caso de México; y, por último, las iniciativas de leyes que han adoptado el feminicidio como calificador y perjudicial del delito de homicidio en los Códigos Penales, como se han hecho en Chile y en Perú. En conclusión las investigaciones realizada pone de manifiesto que el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer son fenómenos globales y que mantiene las viejas dicotomías de género, lo que nos lleva a concluir que todavía las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho ni tan siquiera en las sociedades democráticas y en la reciente tipificación del feminicidio en varios países ha hecho que se intensifique el debate sobre la persistencia de estructuras patriarcales en el Derecho, tanto en lo referente a las propias normas como en su diligencia por los operadores jurídicos (Ramos de Mello, 2015, p. 5).

Continuando con la descripción de los trabajos previos se presentan en el ámbito nacional, el aporte de Jimena Sánchez (2011), en su tesis. “Si me dejas, te mato” El feminicidio uxoricida en lima “en su objetivo tenemos que el feminicidio uxoricida o asesinato de mujeres por sus parejas o exparejas sentimentales, no es un fenómeno reciente. Sin embargo, hoy en día aparecen frecuentemente como noticias en los diferentes medios de comunicación y han tomado la atención de diversas instituciones de defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país. Hay que recordar no se trata de una muerte aislada, sino que son decenas de mujeres que mueren cada año en manos de sus parejas o ex parejas sentimentales, celos, infidelidad, abandono o negativa para (re)iniciar la relación amorosa por parte de la mujer, aparecen como sus principales causas. Además, sabemos aproximadamente cuántas mujeres mueren; el lugar y la forma como fueron asesinadas; sus edades; su vínculo con el feminicida; y los hechos acontecidos. Sin embargo, no se sabe mucho más de este fenómeno. Son los materiales escritos al respecto que intenten dar una explicación más allá de presentar estadísticas, las cuales generalmente se obtienen de fuentes no oficiales o no interconectadas entre sí. En conclusión, tenemos En los cuestionamientos presentados en esta investigación a partir de expedientes judiciales y entrevistas a profundidad de Lima metropolitana, se han conocido a los protagonistas, sus

sistemas de representaciones sociales, la dinámica de la relación afectiva, y los hechos que han ocasionado los feminicidios cuando la masculinidad de estos hombres ha sido herida. A continuación, presentamos las conclusiones a las que se hemos llegado en este estudio. El feminicidio uxoricida involucra tanto agentes como instituciones. Los agentes serían las propias personas, como los hombres victimarios, o viables victimarios, y las mujeres en general. Está presente también la familia como centro de la socialización primaria y transmisora de la cultura, de normas, y formas de comportamiento, es el lugar donde se toman los primeros modelos de masculinidad y femineidad que serán determinantes en la constitución de las personas. Están también involucradas las instituciones de la Iglesia y la Escuela, y los grupos de pares que cumplen esa misma función en la socialización secundaria; los medios de comunicación al abordar el tema y la forma como lo tratan; el Poder Judicial y la Policía en general, que son los encargados de fiscalizar y poner orden en la sociedad, y son ellos y sus discursos, los que juzgan a la misma; el Estado como representante de un tipo de sociedad; y dentro de este al Poder Legislativo que es el encargado de dar las normas y leyes que rigen nuestro país; entre otros. Todos ellos, construyen y dan cuenta de un “deber ser” como comportamiento humano (Jimena Sanchez, 2011, p. 5).

Por último, en el ámbito local: Karla Vílchez (2015) Chiclayo, en su tesis titulada “estrategias de afrontamiento al estrés en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que asisten a un hospital de Ferreñafe, 2014” En su objetivo tenemos que las estrategias de afrontamiento al estrés son la forma en que las personas responden ante situaciones de estrés, empleadas para reducir la tensión y restablecer el equilibrio. Las estrategias de afrontamiento al estrés más utilizadas por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que asisten a un hospital de Ferreñafe según las edades de 18-20 y de 21-40 son uso de la religión y reinterpretación positiva y crecimiento; según las edades de 41-50 son uso de la religión, reinterpretación positiva y crecimiento búsqueda de apoyo social por razones emocionales. (Karla Vilchez, 2015, p. 5).

Expuestos los trabajos previos, veamos ahora la situación problemática que presenta la siguiente investigación: En el ámbito internacional la palabra el Feminicidio ha ido incrementando en cifras escalofrantes en ese sentido el

concepto o definición de este término Lo define A. Garita (2013, p. 16): “femicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de mujeres. Señalando además que las autoras Diana Russell y Jane Caputi definen al femicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios” Se aprecia entonces que la palabra Femicidio hace referencia al asesinato de mujeres con referencia para todas las legislaciones y países del mundo.

En cuanto a la problemática tenemos las siguientes manifestaciones: el Femicidio en el ámbito internacional, en la ciudad de México, como muchos países del mundo, no cuenta con un sistema de estadísticas fiable que permita conocer con exactitud el número de Femicidio cometidos. Sin embargo, según fuentes oficiales citadas por el portal femicidio, en los últimos 25 años se han producido más de 34.000 muertes violentas de mujeres (una media de 20 mujeres asesinadas por día) (Martinez Alarcón, 2015, p. 10).

En un reporte realizado por EFE (2016, párr. 6) declara que:

La dependencia económica y las uniones tempranas son las principales causas para que las mujeres caigan en situaciones de violencia y muchas de ellas no terminan "sus estudios y comienzan su vida reproductiva a edad muy temprana". Brasil, según la organización mundial de la salud, tiene la quinta mayor tasa de femicidio del mundo, con 4.8 cuestiones por cada 100 mil mujeres. Argentina tiene una medida de uno cada 30 horas con 271 asesinatos en lo que va de 2016, además el 97% de las argentinas admite haber sufrido acoso en espacios públicos y privados. En México un promedio de 7 mujeres fueron asesinadas a diario entre 2013 y 2015, cifra que en el periodo de 2001 a 2006 fue 3.5.

Se puede observar que una de las debilidades de las mujeres para que caigan en las garras de los asesinos de femicidio es la dependencia económica, mujeres indefensas y poco autosuficientes que no tienen los recursos económicos para auto sostenerse y mucho menos si estas tienen hijos en estado de abandono por sus padres biológicos.

Otras cifras que indican problema sobre femicidio es el reportaje de la BBC (2016, párr. 6) en su portal web el cual informa lo siguiente:

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de las Naciones Unidas, en 2014, en 25 países de la región, un total de 2.089 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Honduras es el país de la región con el mayor número total de feminicidios (531 en 2014), lo cual representa 13,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres. "Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República Dominicana. En términos de números absolutos, Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer lugar, con más de 200 feminicidios cada uno en 2014".

Se puede apreciar como el delito de asesinato de mujeres crece a nivel latinoamericano, cifras que realmente vale la pena ponerle atención y pensar inmediatamente en estrategias que permitan disminuir el incremento de estos feminicidios que no hacen más que generar zozobra en las mujeres, dejar niños huérfanos, familias destruidas entre otros.

Hoy en día la mortandad y el maltrato de mujeres es cada vez más cotidiano no solo en Perú sino en todo el mundo y ante esa situación el estado debe velar mediante estrategias jurídicas sociales para la protección de los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que se haya en situación de vulnerabilidad (poblaciones vulnerables).

En el ámbito nacional el feminicidio ha ido creciendo en cifras alarmantes, en ese sentido tenemos un reporte del Programa Nacional contra la violencia y salud, 2017) del MIMP.

Tabla 1. Víctimas de feminicidio y tentativa junio del 2017 y 2016

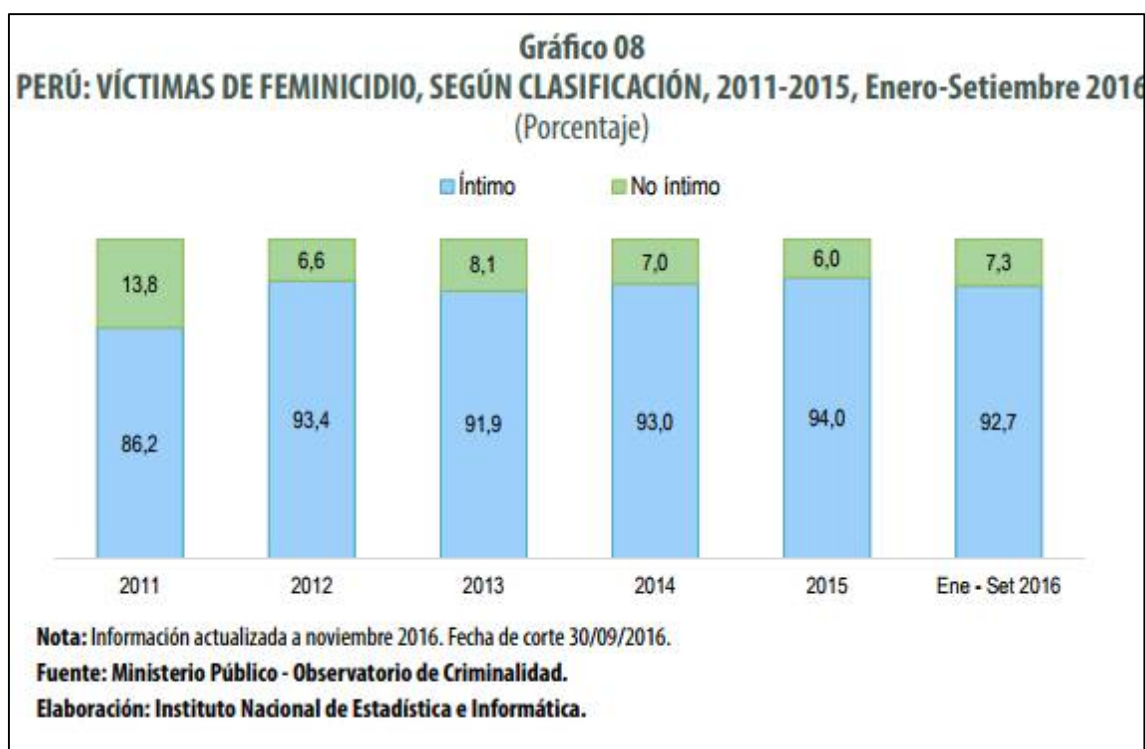
Región	Junio 2017			2016			Total General 2009-2017		
	Feminicidio	Tentativa 1/	Total	Feminicidio	Tentativa	Total	Feminicidio	Tentativa	Total
Amazonas	0	5	5	0	7	7	7	33	40
Ancash	5	11	16	5	10	15	40	54	94
Apurimac	1	1	2	3	0	3	9	10	19
Arequipa	9	20	29	6	17	23	72	89	161
Ayacucho	5	6	11	5	9	14	50	49	99
Cajamarca	2	5	7	2	7	9	22	34	56
Callao	1	4	5	4	2	6	26	38	64
Cusco	5	10	15	6	17	23	43	61	104
Huancavelica	2	3	5	2	8	10	12	31	43
Huánuco	3	5	8	2	23	25	26	53	79
Ica	3	6	9	1	12	13	19	45	64
Junín	7	12	19	6	13	19	58	72	130
La Libertad	5	10	15	14	10	24	38	55	93
Lambayeque	4	0	4	0	1	1	28	8	36
Lima Metropolitana	26	67	93	39	70	109	315	361	676
Lima Provincia	2	5	7	5	4	9	36	26	62
Loreto	3	4	7	1	5	6	12	30	42
Madre de Dios	1	5	6	2	2	4	9	15	24
Moquegua	1	0	1	3	1	4	8	4	12
Pasco	2	2	4	1	5	6	15	27	42
Piura	1	6	7	4	4	8	26	36	62
Puno	7	4	11	3	5	8	50	44	94
San Martín	2	3	5	2	4	6	15	34	49
Tacna	1	5	6	4	6	10	26	19	45
Tumbes	1	1	2	2	9	11	7	15	22
Ucayali	0	4	4	2	7	9	12	22	34
Total	99	204	303	124	258	382	981	1,265	2,246

Fuente: (MIMP, Programa Nacional contra la violencia y salud, 2017)

Según los indicadores de la tabla 1 el Feminicidio en la Región Lambayeque se ha incrementado, al igual que otras regiones como Puno y Arequipa. Se aprecia entonces como el problema de Feminicidio es a nivel nacional en todos los departamentos o regiones del Perú, en ese sentido Tristan (2016, p. 1), indica: El feminicidio es un crimen que afecta únicamente la vida de las mujeres de todo el mundo; nuevo término que está buscando un lugar en el discurso criminalístico y busca a su vez

visualizar una situación de violencia sistemática y silenciada por muchos siglos por la indiferencia y tolerancia social.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre programas para erradicar la violencia, la tendencia según las estadísticas brindados por INEI sigue, y el detalle es que cada vez los asesinatos se hacen con mayor ferocidad e inhumanidad. Veamos la siguiente figura:



Fuente: INEI (2016)

Una recomendación muy importante que realiza Aníbal Sánchez Aguilar, Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, después de haber elaborado un trabajo conjunto con el área de Criminalidad del Ministerio Público aconseja lo siguiente: (resaltado y subrayado nuestro)

Las estadísticas de violencia contra la mujer y el asesinato por su condición de mujer reflejan la importancia del tema y la **“necesidad de mejorar las políticas sociales de promoción y protección de la mujer y de la familia”**. La mujer constituye un grupo de interés central en la implementación de políticas públicas eficaces de parte del Estado peruano. La Ley N° 30068, de julio del 2013, incorpora modificaciones importantes en el Código Penal y el Código de Ejecución Penal con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Se ha incorporado en el Código Penal el feminicidio en el contexto de violencia familiar, coacción o acoso sexual, abuso de poder y discriminación, y penas mayores en circunstancias agravantes, hasta la cadena perpetua. (p. 3)

Según se informó:

Que, el Poder Judicial durante el 2015 y el 2016, impuso 100 condenas por el delito de feminicidio en nuestro país. Ello de acuerdo al Registro Nacional de Condenas de la institución. Del total de las sentencias, 52 condenas se registraron en el 2015 y 48 en la primera mitad del 2016. Según el Poder Judicial, el aumento en el número de sentencias en el año 2016 se debe a que la "acción represora de los jueces" se ha intensificado. Las sentencias fueron impuestas en diligencia de los artículos 107 del Código Penal, que sanciona este delito con penas no menores de 15 años de cárcel, y el 108-B que lo castiga con una sanción superior a los 25 años de prisión. (El Comercio, Párr, 1-3)

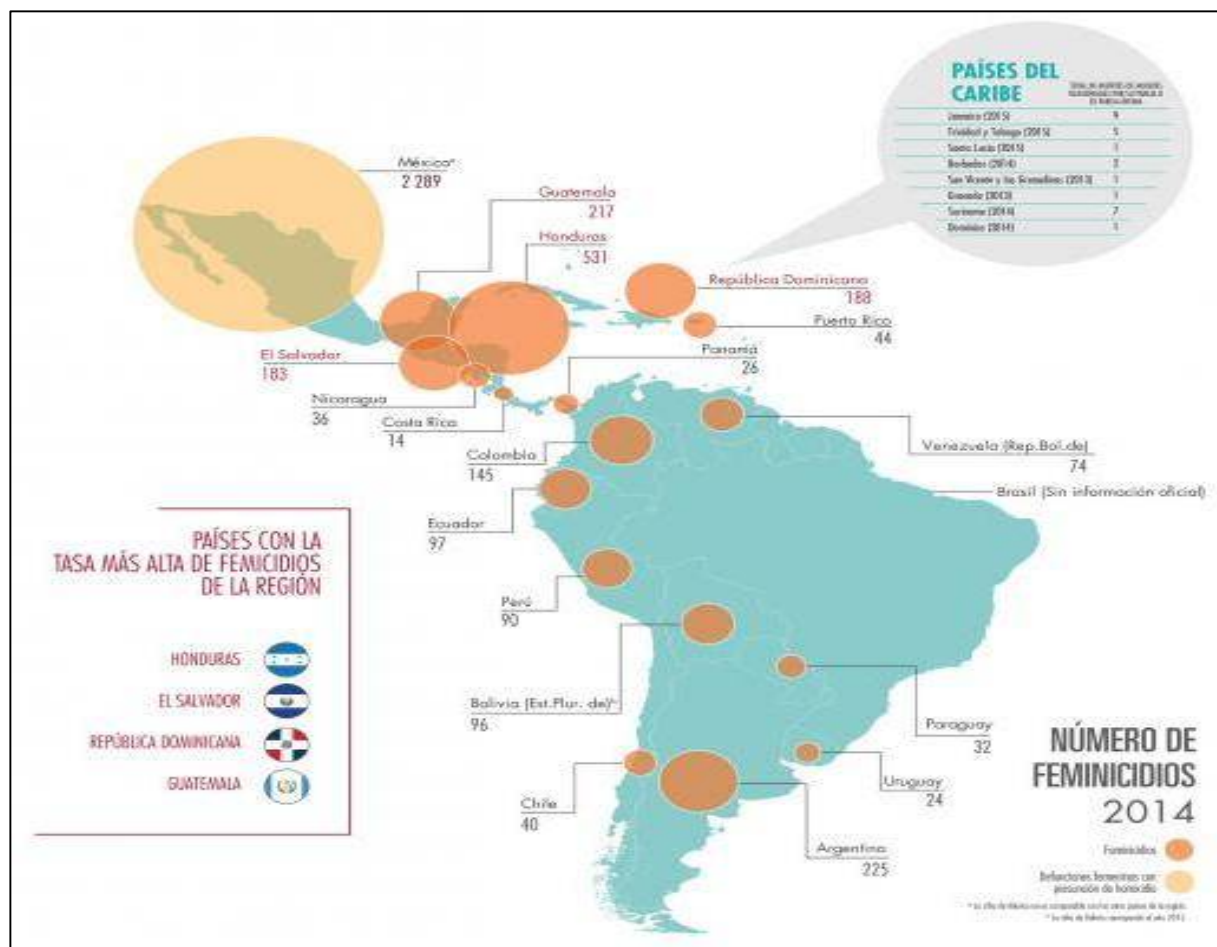
Es importante recalcar que las sentencias van de menos a más, en ese sentido las condenas representan un indicador de que el delito de asesinato de mujeres es alarmante, ante esta problemática es ineludible que el Estado peruano, tome acciones concretas como políticas estratégicas jurídico sociales que combatan desde la raíz estos problemas sociales que cobra cada día vidas humanas, específicamente mujeres, ante esta situación resaltan preguntas ¿Qué hace el estado para contrarrestar este flagelo?, ¿Qué medidas preventivas se están dando desde el Ministerio de la Mujer?, estas interrogantes y otras más se desarrollan en la presente investigación.

Con respecto al planteamiento del problema se exponen cuestiones verídicas suscitadas a nivel nacional, donde se describe en su máxima expresión el problema que se está presentando con respecto a los feminicidios en nuestro país.

Lima, El Agustino: Janeth Cahuina Ramos (27) falleció camino al hospital Hipólito Únanue, mientras que el agresor presenta un corte en el brazo, los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Al llegar, los agentes hallaron a Janeth Rosario Cahuina Ramos (27) con dos profundos cortes en el pecho. A su lado se encontraba Gustavo Daniel Castillo Figueroa con un corte en uno de sus brazos. Se presume que la mujer intentó defenderse del ataque hiriendo a su agresor.

Cahuina Ramos falleció camino al hospital, mientras que Castillo Figueroa se haya fuera de peligro custodiado por la policía. Familiares de la víctima denunciaron que el sujeto, quien habría purgado una condena en el penal de Lurigancho, era violento con su pareja. Las investigaciones se realizan en la comisaría de El Agustino (El Comercio, 2017).

Tabla 2. Tasa de Feminicidios en América Latina y el Caribe en comparación con Perú



Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Se puede observar como nuestro país es considerado como uno de los países con más alta tasa de femicidio, en ese sentido estos indicadores representan un serio problema no solo legal, sino social, económico, salud y entre otros, por lo que refuerza la investigación que se ha realizado con respecto a las estrategias jurídico sociales para prevenir y disminuir los delitos de femicidio.

Cusco: Por celos. Sujeto dio muerte a enamorada que era 10 años menor,

tras acusarla de serle infiel. La atacó con un cuchillo de cocina y luego quiso suicidarse en un hostel. Según la investigación preliminar de la Policía, Wilfredo Ccahuana, quien laboraba en una panadería, habría planificado matar a su ex pareja tras descubrir que mantenía una relación con otro hombre. El 14 de agosto, Ccahuana le quitó el celular a Yenni y tras ver los mensajes que mantenía con otro sujeto, se hizo pasar por su pareja y mantuvo comunicación con aquel. El día del crimen citó con engaños a la jovencita y tras increparle por el hecho le asestó dos puñaladas en el cuello para luego esconderse en el hostel. El hecho ha conmocionado a los vecinos de la zona donde fue hayada Yenni. Algunos afirmaron haber oído que la fallecida discutía con un varón, al parecer su pareja sentimental, quien la atacó con un cuchillo de cocina de 35 cm, que fue hallado cerca del cuerpo de la víctima (La república, 2016, Párr. 1-3).

Piura: Solo un caso de feminicidio resolvió el Poder Judicial en cinco años. La coordinadora del Colectivo por la Igualdad, Maritza Bobadilla, reveló que en los últimos cinco años en Piura se han registrado 16 feminicidios y sólo uno de ellos ha logrado ser resuelto por el Poder Judicial (PJ). Resaltó que la ley de prevención considera como violencia de género a las agresiones que reciben las mujeres no sólo por parte de su pareja, sino también por una persona particular que puede ser su jefe e incluso su profesor. Sin embargo, dijo que preocupa que el sistema judicial aun no conozca a cabalidad la normativa y tampoco cuente con los mecanismos ineludibles para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, las valoraciones psicológicas no son tomadas en cuenta porque el Poder Judicial no cuenta con estos especialistas (La República, 2016, Párr. 1-3).

Lambayeque: Luego de varias horas de agonía, falleció una mujer que fue brutalmente golpeada por su conviviente, convirtiendo en el primer caso de feminicidio (asesinato de mujeres por razones de género). Marcelina Salazar Lozada (56) fue internada de emergencia en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo tras sufrir una mortal golpiza de su conviviente Desiderio Ruiz Chuquilín (63) (Andina, 2014, Párr. 1-2).

Se puede observar como los ataques contra el género femenino cada vez

más terminan en la mortandad, esto contra vienen de forma directa y contundente contra el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, el cual se haya tipificado en el Artículo 107. Parricidio: El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurren cualquiera de las circunstancias perjudiciales previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. Asimismo, el Artículo 108- B: Femicidio, promulgado el 18 de julio del 2013: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. Violencia Familiar; 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menos de veinticinco años, cuando concorra cualquiera de las siguientes circunstancias perjudiciales: 1. Si la víctima era menor de edad; 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestión; 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente; 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación; 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad; 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias perjudiciales establecidas en el artículo 108.

Se puede apreciar cuan riguroso y específico es la norma, la cual castiga con severidad, sin embargo poco o nada les importa a estos sujetos agresores de sus parejas, cuyo índice de ataque y asesinato de mujeres crece cada día, entonces nacen interrogantes ¿Qué se puede hacer?, ¿Por qué la ley o el derecho penal no persuade o previene, estos asesinatos?, ¿Qué se necesita hacer?, ¿Qué nueva estrategia aplicar

para disminuir el índice de crímenes contra las mujeres?, esas interrogantes y muchas más se desarrollarán en la presente investigación, para ello se formula la siguiente interrogante:

Formulación y objetivos del problema: ¿Qué estrategias permitirán disminuir el crecimiento de feminicidio en el Perú? Continuando con la parte introductora de esta tesis tenemos cómo objetivo general: Proponer Estrategias jurídico sociales para disminuir el crecimiento del feminicidio en el Perú. Para alcanzar con la finalidad planteada se describen los objetivos específicos: Primero: Diagnosticar la situación actual del feminicidio en el Perú; Segundo: Identificar los factores influyentes que conllevan al crecimiento del feminicidio en el Perú y Tercero: Elaborar estrategias jurídicas sociales mediante proyectos de Ley para combatir el crecimiento del feminicidio en el Perú.

Planteamiento hipotético: Con respecto al planteamiento hipotético tenemos: Si se proponen Estrategias jurídico sociales, entonces disminuirá el índice de crecimiento de los delitos de feminicidio en el Perú.

Justificación de la investigación: Asimismo se justifica Por qué permitirá desarrollar estrategias jurídico sociales que permitan frenar el aumento del feminicidio en nuestro país, preservando o contribuyendo a la protección y aseguramiento de los derechos fundamentales como es la salud, la vida de las mujeres peruanas, de esta forma se genera justicia social para ellas, alcanzando armonía, y paz en la comunidad, región y país.

Para efectos de esta investigación se ha diseñado la estructura del informe en dos apartados que representan las variables de estudio, la primera variable independiente es “Estrategias Jurídicos Sociales”, y luego la segunda variable “Feminicidio” en ambos capítulos se realiza una introducción de lo que se va realizar, luego viene el desarrollo temático como conceptos, teorías, donde sobre sale Ciuro (2011) y (Shaw & Travers, 2005) para luego realizar un análisis de lo descrito con su

respectiva conclusión por capítulo.

Posteriormente se desarrolló los resultados estadísticos, para luego pasar a la propuesta donde se escogen dos ciudades como Dar Slam y Filipinas, cuyas autoridades desarrollaron estrategias jurídicas sociales para prevenir y disminuir la inseguridad ciudadana. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Ubicación

A continuación el objeto de estudio como es el “Feminicidio” se ubica en dos grandes contextos: El Internacional como una violación de derechos humanos y la obligación del Estado de tipificar conductas violatorias de derechos humanos.

Para realizar el análisis de estudio se tendrá en cuenta dos aspectos fundamentales como es el feminicidio y responsabilidad internacional del estado por violaciones de los derechos humanos, el feminicidio y obligación de estado de tipificar conductas violatorias de los derechos humanos. Como autor principal tenemos al experto Toledo Vásquez quien nos describe a continuación estos dos pilares: “Feminicidio/femicidio y responsabilidad internacional del Estado por violaciones de Derechos Humanos” y “Feminicidio/femicidio y la obligación del Estado de tipificar conductas violatorias de derechos humanos”

a. Feminicidio/femicidio y responsabilidad internacional del Estado por violaciones de Derechos Humanos

Especialmente a partir de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belém do Pará) –en cuanto instrumento vinculante y específico– es claro a nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que cabe responsabilidad al Estado por la violencia contra las mujeres cuando éste no ha adoptado todas las medidas adecuadas para su prevención, sanción y erradicación¹. Ello es así respecto de toda forma de violencia contra las mujeres, ya sea que se cometa en la esfera privada o pública, y más aún cuando se trata de violencia institucional donde la responsabilidad del Estado está más directamente comprometida (Toledo Vásquez, 2009, p. 39).

¹ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

Lo anterior, por tanto, es plenamente aplicable al fenómeno del femicidio o feminicidio, y en este sentido lo han desarrollado todos los informes de organismos internacionales de Derechos Humanos, tanto del sistema universal como interamericano, que se han pronunciado especialmente en relación a la situación del feminicidio en el norte de México. De acuerdo con estas recomendaciones, hay múltiples aspectos en relación con este fenómeno que forman un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, esto es, que forman violaciones a éstos.

Este tipo de vulneraciones se presentan en una multiplicidad de aspectos, especialmente los relativos a la prevención, investigación y sanción de estas conductas. De esta forma, un Estado que no prevenga, investigue o sancione con la debida diligencia el feminicidio o femicidio, ya sea que se cometa en la esfera pública o privada, incumple con su obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres. Estas obligaciones, además, deben cumplirse con respecto a la realidad de violencia que presenta cada país: las formas de femicidio/feminicidio que muestran mayor prevalencia o mayor gravedad en una determinada región, las conexiones que pueden tener con otro tipo de criminalidad², etc. En este sentido, es importante destacar que de acuerdo con todos los tratados internacionales de derechos humanos, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas o apropiadas para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, es decir, en esta materia siempre se debe considerar la realidad del Estado –y eventualmente, ciertas regiones del mismo– de que se trate (Toledo Vásquez, 2009, p. 40).

Gran parte de las observaciones y recomendaciones formuladas en este

² Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

sentido a México destacan cuestiones relativas especialmente a la prevención e investigación, desde la competencia de los organismos de persecución criminal federal, la debida diligencia en la investigación de estos crímenes, las garantías del acceso a la justicia para las víctimas, sin discriminación, hasta la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad de funcionarios por negligencia o complicidad, así como de mejorar los sistemas de información y análisis de la misma, incluyendo consideraciones de género, entre otros muchos aspectos (Toledo Vásquez, 2009, p. 40).

Todos estos aspectos, que siempre son de responsabilidad del Estado, también pueden estar presentes en mayor o menor grado en otras cuestiones de femicidio o feminicidio más allá de las complejas cuestiones de la frontera norte de México. Por ejemplo, se ha señalado que para una adecuada prevención de estos crímenes, cada Estado debe evaluar cuál es la forma prevalente de feminicidio/femicidio y las circunstancias en que se cometen, a fin de determinar también los factores de riesgo que permitirán elaborar políticas de prevención más adecuadas. En este sentido, un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Como vemos, la naturaleza de las medidas que un Estado debe adoptar para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas en su territorio, es múltiple y debe ajustarse a la realidad de estos derechos teniendo en consideración la multiplicidad de factores que la determinan en forma específica. Ello implica considerar los factores de género, por cierto, pero también los sociales, étnicos, económicos, culturales e incluso geográficos —entre otros— que pueden tener relevancia en la configuración de una realidad determinada de mayor vulnerabilidad a ciertas formas de violencia o violaciones de derechos humanos (Toledo Vásquez, 2009, p. 40-41).

Dentro de las medidas que los Estados deben adoptar, normalmente

serán muy utilizadas las administrativas, pero también las legislativas pueden tener un rol fundamental, como se analiza en el siguiente punto³.

Toledo nos enseña que el estado peruano es el principal responsable de la violencia contra la mujer, especialmente si se trata del delito de feminicidio el cual está dentro de los límites protegidos por los derechos humanos en el ámbito internacional. Toledo indica que este tipo de vulneraciones debe contener o desarrollar aspectos como la prevención, investigación y sanción de estas conductas. De lo contrario el estado incumple con su obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres.

b. Feminicidio/femicidio y la obligación del Estado de tipificar conductas violatorias de derechos humanos

La inexistencia de leyes en ciertas materias puede significar un incumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, ya que esta última impone la obligación de adoptar medidas legislativas que tiendan a asegurar el goce de éstos. Conforme los Estados se organizan, especialmente a partir de la legislación que adoptan, ésta es una de las herramientas fundamentales para lograr la adecuada garantía de los derechos fundamentales, aun cuando por sí sola sea insuficiente para garantizarlos, si no está combinada con medidas administrativas o de otra naturaleza que den una verdadera efectividad a su contenido (Toledo Vásquez, 2009, p. 41-42).

El cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, entonces, implica también la obligación de dictar leyes, tanto cuando el tratado establece específicamente la forma de legislar (como las

³ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

convenciones contra la tortura o la desaparición forzada de personas) como cuando no lo hace en forma precisa, ya que en ambas cuestiones la obligación de garantizar aquellos derechos supone la de legislar, ya sea para dictar nuevas normas, o bien para derogar legislación incompatible con el tratado de que se trate. Ello porque las normas nacionales no pueden ser invocadas para incumplir un tratado internacional, de acuerdo con las reglas generales (Toledo Vásquez, 2009, p. 42).

Ahora bien, la obligación de garantizar debe además cumplirse sin discriminación, lo cual hace ineludible que los derechos se garanticen de una forma efectiva para todas las personas. Esto conlleva a lo señalado en el acápite anterior, es decir, deben considerarse especialmente los factores que pueden incidir en que un determinado grupo de personas se vea privado de la plena vigencia de sus derechos humanos, ya sean factores sociales, económicos, culturales, étnicos, geográficos, de género o de cualquier otro carácter⁴. Esto significa que la obligación de garantizar los derechos sin discriminación no puede ser una garantía estandarizada basada en un ciudadano modelo, sino que sobrelleva para el Estado la adopción de medidas positivas para garantizar los derechos a todos los grupos, teniendo en consideración la heterogeneidad de condiciones en que se haya la población de un país (Toledo Vásquez, 2009, p. 42-43).

Lo anterior implicará siempre la adopción de medidas particulares para hacer efectivos los derechos a grupos específicos, por ejemplo, cuando un Estado garantiza el derecho a voto a las personas invidentes, o cuando se garantiza la libertad de desplazamiento a personas con discapacidad física a través de modificaciones en la infraestructura urbana. Se trata de medidas que se adoptan con el objetivo de garantizar los derechos a todas las personas, considerando las diversas condiciones o situaciones en que se haya. Si el Estado no adoptara estas medidas, se consideraría una forma de discriminación indirecta en cuanto estas situaciones desiguales

⁴ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

requieren también un trato diferente. (Toledo Vásquez, 2009, p. 43).

En cuanto los derechos de que se trate sean de diverso carácter, entonces las medidas también lo serán. Así por ejemplo, si se busca garantizar el derecho a la educación de personas que pertenecen a minorías étnicas, las disposiciones que se adopten pueden comportar la reserva de plazas en universidades o favorecer el acceso de otro modo. Este tipo de medidas tienden a ser vistas con mayor atención, en cuanto pueden conllevar también una exclusión indirecta –o una restricción en el acceso– de quienes no forman parte del grupo favorecido. A este respecto, se ha desarrollado, en materia de derecho antidiscriminatorio –especialmente en Estados Unidos–, la teoría de las llamadas acciones afirmativas, que aluden a aquellos mecanismos que garantizan los derechos de un grupo desfavorecido (Toledo Vásquez, 2009, p. 43).

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esto es recogido especialmente a través de las llamadas “medidas especiales de carácter temporal” que contemplan tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), como en la CEDAW. De allí se desprende que la necesidad de medidas diferentes es particularmente relevante cuando se trata de los derechos de las mujeres, ya que las normas generales muchas veces no sirven para proteger convenientemente sus derechos, por lo que se requiere de disposiciones específicas. (Toledo Vásquez, 2009, p. 44)

Estas medidas destinadas a acelerar la igualdad de facto –tal y como han sido formuladas por la CERD y la CEDAW– exigen un carácter temporal y que cesen en cuanto se logre el objetivo que las justificó. Si bien esto resulta comprensible cuando se piensa en la superación de discriminaciones históricas como la racial y la de las mujeres –de las que se espera su total erradicación en el futuro–, si consideramos otras medidas, como las señaladas inicialmente al referirnos a personas invidentes o con discapacidad física, difícilmente pueden considerarse como formas de medidas especiales temporales, a menos que se crea o

se aspire a que en un futuro no existan estas personas. De alguna forma, si esto se traslada a la esfera de las medidas en favor de las mujeres, resultaría –por ejemplo– extraño considerar que disposiciones como el derecho a lactancia –que únicamente se garantiza a mujeres en legislaciones laborales– se pueda considerar una medida especial de carácter temporal. Este análisis también revela, por cierto, las limitaciones de los modelos explicativos basados únicamente en la noción de igualdad, especialmente cuando se trata de los derechos de las mujeres. (Toledo Vásquez, 2009, p. 44-45)

De allí que no toda medida que se adopte para asegurar los derechos humanos a sectores de la población cuyo disfrute de los mismos se haya obstaculizado o impedido, puede considerarse una medida especial temporal. Más bien –y como ha señalado el Comité de Derechos Humanos– una correcta interpretación del principio de igualdad conviene necesariamente la adopción de medidas adecuadas que pongan remedio a esa situación de exclusión o restricción de derechos⁵. Cuando estas medidas supongan el otorgamiento “durante un tiempo, al sector de la población de que se trata un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población”, entonces se trata de aquellas medidas especiales temporales de que hablan la Cerd y la Cedaw, y que el Comité ha considerado, también forman parte de la correcta interpretación del derecho a la igualdad que prevé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Toledo Vásquez, 2009, p. 45)

En consecuencia, como bien ha señalado el Comité Cedaw, no toda medida adoptada a favor de los derechos de las mujeres y niñas forma una medida especial temporal si bien éstas han alcanzado un amplio nivel de reconocimiento y acuerdo, particularmente en materia de políticas

⁵ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

públicas. Cuando se trata de medidas legislativas, sin embargo, la situación resulta más debatida, especialmente en cuanto se puede argumentar sobre el carácter de trato preferencial que revista o no una medida –y en consecuencia, su temporalidad– así como la idoneidad de la misma para contribuir a superar la desigualdad de facto de que se trate. Cuando las medidas a favor de los derechos de las mujeres y las niñas se adoptan a través de leyes penales –ámbito en que el principio de igualdad tiende a interpretarse más formalmente–, suelen encontrarse mayores dificultades. (Toledo Vásquez, 2009, p. 45, 46)

En todo caso, el actual desarrollo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente a partir de la década de 1990, manifestado especialmente en la adopción de instrumentos específicos sobre la materia que configuran hoy en día todo un marco normativo internacional aplicable, de carácter tanto declarativo como vinculante, ha permitido gradualmente la adopción, en el Derecho interno de los países, de normas específicas destinadas a sancionar diversas formas de violencia contra las mujeres. Más aún, en particular, respecto de la introducción en el ordenamiento jurídico de figuras como el feminicidio, el Comité cedaw ha recomendado específicamente al Estado mexicano su tipificación, surgiendo entonces la pregunta respecto si una medida legislativa de este tipo supone una forma de simple tratamiento diferenciado de una situación desigual o si puede considerarse una medida especial de carácter temporal, en el sentido descrito por la propia Convención. (Toledo Vásquez, 2009, p. 46)

La sola interpretación de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos sin discriminación a todas las personas es la que ha permitido fundamentar la constitucionalidad de estas normas especiales en los países en que ha sido cuestionada. Actualmente, en efecto, ya se cuenta con pronunciamientos de los tribunales constitucionales de Costa Rica y España, que avalan la existencia de normas que forman medidas penales específicas a favor de las mujeres en materia de violencia de género. (Toledo Vásquez, 2009, p. 46)

De esta forma, tanto el pronunciamiento del año 2005 de la Sala Constitucional de Costa Rica, que reconoció la constitucionalidad de la Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres, así como las primeras sentencias del Tribunal Constitucional español, que reconocen la constitucionalidad de las normas penales españolas, las cuales establecen sanciones diferenciadas y agravadas a la violencia contra las mujeres, forman dos ejemplos sobre cómo es que comienza a reconocerse también en el Derecho Penal interno la obligación del Estado de tipificar conductas dirigidas específicamente a enfrentar la violencia contra las mujeres⁶. Es interesante verificar que en estas cuestiones los órganos constitucionales no han evaluado la legitimidad de estas disposiciones desde la configuración de las medidas especiales de carácter temporal, sino como una diligencia directa de disposiciones diferenciadas, atendida una realidad diversa esto es, como diferencia de trato justificada o razonable encaminada a alcanzar una igualdad sustancial de las mujeres en estas materias. (Toledo Vásquez, 2009, p. 46-47)

Desde esta configuración, es viable concluir que existen tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el Derecho constitucional de los diversos países, elementos suficientes para justificar la adopción de normas penales específicas en materia de violencia contra las mujeres. Si bien de ello no se desprende que la adopción de estas normas penales diferenciadas sea obligatoria para que los Estados cumplan con su obligación de garantizar los derechos de las mujeres en este ámbito, sí permite que esta alternativa sea considerada al momento de definir la forma más adecuada para enfrentar el fenómeno en una realidad dada. (Toledo Vásquez, 2009, p.47)

⁶ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

Así como el estado tiene responsabilidad nacional e internacional de velar por los derechos humanos específicamente los derechos como es la integridad la salud y la vida de las mujeres también tiene la imperiosa obligación de tipificar conductas violatorias de derechos humanos como es el feminicidio. Toledo enseña que la inexistencia de leyes por parte del estado conlleva a que este no respete y garantice los derechos humanos especialmente de las mujeres, consideradas poblaciones vulnerables sobre todo si se encuentra en estado de pobreza.

Cuando un estado se compromete a respetar tratados internacionales de derechos humanos implica también la obligación de legislar, norma, leyes que permitan sancionar los delitos de feminicidios. En nuestro país el estado si cumple con estas disposiciones sin embargo la realidad en todo territorio dice lo contrario, cada vez los ataques hacia mujeres son con mayor ferocidad, y humanidad donde al final termina en feminicidio.

1.2 Cómo surge el problema.

Es una descripción del objeto de estudio, tendido en cuenta su evolución histórica y las propensiones que presenta

1.2.1. El Derecho Penal frente a la violencia contra las mujeres

1.2.1.1. Evolución histórica: de leyes patriarcales a leyes específicas sobre violencia contra las mujeres.

Históricamente, las diversas formas de violencia contra las mujeres y las leyes penales han tenido una relación difícil. Los países latinoamericanos adoptaron las normas civiles y penales de los Estados conquistadores y, con ellas, todo un sistema jurídico destinado a asegurar la subordinación de las mujeres. En efecto, al analizar normas hoy ya derogadas, vemos cómo el Derecho tradicionalmente ha sido la forma a través de la cual se ha organizado el poder de los hombres sobre las mujeres. Esto ha ocurrido no sólo a través del Derecho Civil, que –en materia de familia–

fundaba el matrimonio en la autoridad marital –incluyendo el derecho de corrección sobre la mujer y los hijos– y desconocía la plena capacidad a las mujeres casadas; sino también a través de las normas penales. Baste pensar como ejemplos en el uxoricidio, por el cual se atenuaba sustancialmente la responsabilidad penal del marido que mataba a la mujer adúltera, el delito de adulterio como ilícito que sólo podía ser cometido por la mujer (no por el marido), la extinción de la responsabilidad penal del violador por el posterior matrimonio con la ofendida, la exigencia de honestidad o buena fama en las víctimas de ciertos delitos sexuales, etc. Como vemos, figuras penales en que la mujer puede ser sujeto activo o pasivo del delito, pero en las que, en cualquier caso, se refuerzan los roles y estereotipos de género que pesan sobre ella. (Toledo Vásquez, 2009, p.57)

En la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas –y en el mundo– este tipo de normas han ido desapareciendo paulatinamente, conforme se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la democratización –en general– del Derecho Penal. En una primera época, efectivamente, y coincidiendo con la entrada masiva de mujeres a los distintos sistemas jurídicos del mundo en la segunda mitad del siglo pasado, se produce una serie de reformas legales en materia penal tendientes a lograr la efectiva neutralidad de un Derecho penal que, hasta entonces, era el mero reflejo de un sistema en que los derechos de las mujeres estaban subordinados a los que tenían los hombres sobre ellas. (Toledo Vásquez, 2009, p. 57-58)

Sin embargo, la eliminación de las normas que expresa o implícitamente conllevaban una discriminación contra las mujeres –como las mencionadas más arriba– no resultó suficiente para que el sistema penal (incluyendo en él no sólo las normas penales sustantivas, sino también normas de procedimiento y la actuación real de las y los operadores de justicia) efectivamente sancionará los actos que forman violencia contra

las mujeres, es decir, la violencia que las afecta por razones de género. Posteriormente, se puede identificar una segunda etapa, en que comienza a ser abordada por los sistemas jurídicos una de las formas más generalizadas de violencia contra las mujeres: aquella que ocurre en las relaciones íntimas o de familia. Surgen entonces en la mayor parte del mundo, y también en los países latinoamericanos –en éstos, en general en la década de 1990 – leyes especiales para abordar esta forma de violencia, ya sea desde la vía civil o penal, aunque inicialmente prefiriéndose la primera. Sin embargo, se trata de leyes que, al igual que en la primera fase, son adoptadas sobre una base de neutralidad de género –de acuerdo con los postulados del feminismo liberal clásico– y, por lo tanto, no son leyes dirigidas a sancionar la violencia contra las mujeres, sino a la violencia familiar o intrafamiliar, de modo que sus víctimas pueden ser tanto hombres como mujeres, aunque en la gran mayoría de los casos lo sean estas últimas. (Toledo Vásquez, 2009, p.58)

Ya en esta época comienzan a surgir las primeras controversias con algunos sectores de la doctrina penal en relación a la posibilidad de tipificar conductas relativas a la violencia en la esfera privada.

Respecto de esta violencia, estos sectores advierten que la respuesta penal resulta inadecuada frente a la gran complejidad que reviste este tipo de conflicto social, o bien, que éste no reviste la gravedad suficiente como para ameritar una respuesta penal o que forma una transgresión a los principios de un Derecho Penal mínimo, ambas apreciaciones fundadas en la creencia de la nimiedad o escasa gravedad de las conductas⁷. (Toledo Vásquez, 2009, p. 58-59)

Estas objeciones o críticas, sin embargo, tienden a desaparecer en la actualidad. En cuanto a la crítica que sostiene que el Derecho Penal no

⁷ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

es la vía adecuada para solucionar este tipo de conflictos, se puede decir que resulta, simplemente, superada por la realidad. En efecto, esta crítica sólo tenía algún sentido cuando se pensaba que la violencia contra las mujeres sólo estaba constituida por leves malos tratos físicos o verbales que tenían lugar al interior de la familia o pareja. Cuando se evidencia que la violencia contra las mujeres también se expresa en delitos y crímenes graves como homicidio, lesiones, violación, etc., entonces es claro que el sistema penal siempre ha intervenido e intervendrá en estas materias. Es decir, el sistema penal no puede excusar su intervención –ni en esta materia ni en otras– en atención a la complejidad del conflicto social que subyace a los delitos. Así, si bien la respuesta penal es insuficiente como respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres, es una respuesta imperativa, y por tanto, no puede descartarse la intervención penal frente a hechos que revisten caracteres de delito, aun cuando éstos reflejen conflictos sociales mucho más complejos, y las obligaciones del Estado en esta materia no se agoten en la respuesta penal. (Toledo Vásquez, 2009, p.59)

Por otro lado, la crítica relativa a la falta de gravedad de las conductas como para ameritar una respuesta penal o la infracción a los principios de un Derecho Penal mínimo tiende a desaparecer tanto como consecuencia de los cada vez más amplios estudios que, también a partir de la década de los años noventa confirman la gravedad de las consecuencias de la violencia contra las mujeres, incluso de aquella aparentemente más leve, lo que se suma a la masividad de que dan cuenta las primeras encuestas en diversos países y las denuncias que cada año se reciben por esta materia. Además, las críticas relativas a la falta de gravedad de las conductas no pueden ser, por supuesto, sostenidas cuando se trata de la penalización del feminicidio o femicidio, crímenes respecto de los cuales la discusión pasa por otros aspectos, como se verá más adelante. (Toledo Vásquez, 2009, p.59-60)

Se produce entonces la progresiva penalización especial de figuras que previamente eran consideradas meras faltas o infracciones que no revestían carácter penal. Se establece así la figura de malos tratos, maltrato habitual o violencia doméstica en diversas legislaciones penales. Nuevamente aquí –al igual que la legislación civil preexistente– se trata de legislaciones enfocadas en la violencia en la esfera privada y en tipos penales que mantienen una neutralidad de género, es decir, que no abordan la violencia contra las mujeres como tal, sino en cuanto es parte de la violencia que se ejerce en la esfera familiar o privada. (Toledo Vázquez, 2009, p.60)

Sin embargo, la evolución posterior –en la que se pueden enmarcar las nuevas legislaciones que tipifican el femicidio o feminicidio o las iniciativas que buscan tipificarlo– marca un paso importante en este sentido: es viable constatar en los últimos años una propensión al abandono de la neutralidad formal de los tipos penales para dar paso a tipificaciones que expresamente incluyen la diferencia sexual, lo que se ha llamado por ciertas autoras como la sexualización de la respuesta punitiva.⁸ (Toledo Vázquez, 2009, p. 60)

En esta fase encontramos como primer hito el Código Penal sueco que contiene, desde 1998, un tipo penal denominado “grave violación de la integridad de la mujer”, disposición que –a pesar de mantener la misma penalidad cuando la víctima sea un hombre– es pionera en convertirse en una figura que establece separadamente un delito de violencia contra las mujeres, en que además se precisa que este delito sólo puede ser cometido por un hombre. Al mantener la misma pena, se trata de un ejemplo claro del uso del Derecho Penal simbólico, a la vez que pretende ser una normativa con el objeto de facilitar el seguimiento y control de los procesos judiciales en estas cuestiones. (Toledo Vázquez, 2009, p. 60-61)

⁸ Expresión usada por Acale Sánchez María, *op. cit.*, nota 75, p. 11

Un paso más allá es el que ha dado España a partir de 2004, al consagrar en diversas normas de su Código Penal la agravación de la sanción cuando se trate de delitos cometidos en contra de la mujer que sea pareja actual o pasada del autor, en cuanto en este caso estos delitos sí suponen una penalidad mayor a la de aquellos en que las mismas conductas se cometan contra hombres. (Toledo Vásquez, 2009, p.61)

Esta legislación ha marcado un hito en la discusión jurídico-penal en España, en cuanto prácticamente ha generado una división en el ámbito académico y jurídico entre personas promotoras y detractoras de la ley. Resulta paradójico constatar que, en cambio, tanto esta ley en España como la reciente legislación sobre femicidio en Guatemala, han sido leyes aprobadas por unanimidad parlamentaria, es decir, apoyadas transversalmente por todos los sectores políticos. (Toledo Vásquez, 2009, p.61)

En este contexto, es el ámbito académico y jurídico el que se transforma en el principal opositor a estas nuevas legislaciones, cuestionadas esencialmente en cuanto rompen con la igualdad formal, uno de los pilares del sistema jurídico en los Estados liberales. Esto se comprende en cuanto es consecuencia de una formación jurídica que –en la mayor parte de los países de la región– escasamente incorpora contenidos de derechos humanos, y menos aún de derechos humanos de las mujeres y cuestiones de género, formación en la que, por tanto, rige un apego irrestricto a la igualdad formal. (Toledo Vásquez, 2009, p.61-62)

La gravedad de la oposición de académicos y juristas radica en que ellos conforman e inciden, precisamente, en quienes serán los responsables de la diligencia de aquellas leyes: las y los abogados, fiscales, defensores y por supuesto, jueces y juezas (Toledo Vásquez, 2009, p. 62).

Sin duda, las legislaciones suecas y española son los precedentes –en cuanto a la sexualización de los tipos penales– de la tipificación de figuras como el feminicidio o femicidio. A continuación analizaremos las principales controversias que se presentan entre estos tipos penales específicos –incluido el femicidio/feminicidio– y diversos sectores de la doctrina penal en los países que siguen el modelo jurídico europeo continental (Toledo Vásquez, 2009, p. 62).

El problema de los delitos de feminicidios visto desde la evolución histórica se origina desde tiempos antiguos donde existían leyes patriarcales o leyes específicas sobre violencia de las mujeres. Recordemos la época de Jesús donde la mujer adúltera era castigada a pedradas, sin embargo el hombre no, en tiempos antiguos donde los derechos de la mujer era limitados por ejemplo se le prohibía trabajar o participar de política. Sin embargo la sociedad del hombre evoluciona, mejora, se perfecciona, como es el caso de derecho penal que empezó a eliminar ciertas normas que sujetaban las mujeres hacia los hombres (subordinación).

De esta manera comienza los reconocimientos de los derechos humanos sin distinción de género es decir leyes, penas para todos por igual. Sin embargo a pesar de esta evolución no es suficiente, los derechos de la mujer son cada vez más violentados, que obligan al estado a través del derecho penal a dictar normas más severas pero que hoy en día se debe tener en cuenta lo que enseña CIURO “las leyes se deben dictar teniendo en cuenta tres dimensiones. Social, Normológica y psicológica.

1.3 **Cómo se declara y qué características tiene**

Se describe la realización empírica del objeto de estudio.

1.3.1. **Controversias penales en relación a los tipos penales específicos de violencia contra las mujeres y el femicidio/feminicidio.**

En general, las discusiones que estas normas penales indican han planteado en el ámbito penal concuerdan con aquellos que surgen a propósito de la penalización del *femicidio/feminicidio*. Se examinarán los exteriores más relevantes relacionados con estas discusiones:

¿Un delito ineludible? La alegada suficiencia de los tipos penales existentes.

Según Toledo (2009) Primero, se ha trazado en correlación al *femicidio* o *feminicidio*, en personal cuando la legislación o proyecto de legislación en cuestión percibe únicamente los ocurridos en el entorno íntimo –uno de los contornos en que la violencia contra las féminas se declara en forma más generalizada, y en el que auténticamente la violencia masculina ha sido permitida y eventualmente admitida por el Estado– que estas cuestiones ya se hayan convenientemente amparados por los tipos penales *neutros* ya existentes, ya sea a través de las figuras de homicidio calificado en virtud del lazo o relación de pareja o de parricidio. A lo largo de la tradición codificadora el vínculo ha jugado diferentes, opuestos e incluso opuestos papeles, ya sea teniendo finalidades perjudiciales, atenuantes o incluso de excusa absolutoria. (Toledo Vásquez, 2009, p. 62-63)

Cuando se trata del parricidio u homicidio calificado por parentesco, se suele fundamentar su mayor severidad en el *plus de injusto* o mayor antijuricidad en el hecho de atacar contra una persona de la que se es pariente o con quien se está casado –o se tiene una relación de convivencia–, pues en estas cuestiones se vulnerarían *además* ciertos especiales deberes de cuidado y respeto originados en el derecho civil o incluso asegurados constitucionalmente. Sin embargo, la propensión de

los más recientes Códigos Penales es hacia la eliminación tanto del parricidio como del homicidio calificado por parentesco (Toledo Vásquez, 2009, p. 63). En efecto, y coincidiendo en este punto gran parte de la doctrina penal, la existencia de vínculos de parentesco o de pareja forma una circunstancia que puede tanto agravar como atenuar la responsabilidad penal, dependiendo del caso particular. Así, diversas legislaciones consideran el parentesco una *circunstancia mixta de responsabilidad*, en cuanto puede ser perjudicial o atenuante. Así, por ejemplo, puede ser perjudicial en el caso de un hombre que mata a su cónyuge como culminación de una relación de violencia contra la víctima, mientras que puede ser una atenuante a favor de la mujer que, luego de años siendo víctima de violencia, mata a su marido –fuera de los cuestiones de la legítima defensa. (Toledo Vásquez, 2009, p.63)

Según Toledo (2009) Por el contrario, cuando estos vínculos forman un delito agravado específico –como el parricidio u homicidio calificado– el efecto es *agrar la pena en todos los asuntos*, siendo indiferente si el homicidio se produce después de años de ejercer violencia o de ser víctima de la misma. (p. 63-64)

Ahora bien, la justificación de normas penales *específicas* sobre ciertas formas de terror contra las mujeres o leyes penales *sexualizadas* también ha sido sacudida desde otra configuración por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la “**Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer**” (MESECVI) en las encomiendas de su Informe Hemisférico.

En él se recomienda expresamente:

Excluir toda norma sobre el problema de violencia contra las mujeres que sea genéricamente neutra. En este sentido, es ineludible que las normas relativas a violencia doméstica sean específicas para avisar, sancionar y/o

erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres⁹. (Toledo Vásquez, 2009, p. 64)

La excusa de esta encomienda se haya en el cuerpo del informe, al señalar que las disposiciones genéricamente neutras suponen el riesgo de permitir su diligencia *en contra de las mujeres*, por lo que no cumplirían con el objetivo del Art. 7 c) de la Convención.

La apariencia que sienta esta recomendación, sin duda, va más allá que sus antecedentes, en cuanto no sólo se encomienda la adopción de normativa género-específica, sino que denuncia expresamente los efectos perjudiciales de las normativas genéricamente neutras. (Toledo Vásquez, 2009, p.64)

El escenario que refiere el MESECVI en cuanto a los delitos *neutros* puede aplicarse con igual severidad contra mujeres que sean víctimas de violencia, además, no sólo es una hipótesis teórica, sino que haya una base fáctica en la diligencia de estas normas en algunos estados del mundo¹⁰. De esto se desprende que el argumento relativo a la suficiente protección a través de las ya existentes figuras del parricidio o el homicidio calificado por parentesco resulta poco sustentable. Incluso, una reflexión más profunda al respecto puede llevar por el contrario– a recomendar la derogación de aquellos tipos penales, atendidos los efectos perjudiciales que eventualmente acarrearán para las mujeres. En cualquier caso, es importante considerar que la conservación en los ordenamientos jurídicos de estos delitos *neutros* como el homicidio calificado por parentesco o el parricidio pueden tener consecuencias exactamente iguales que las señaladas por el MESECVI, incluso en legislaciones en que se tipifique el *femicidio* o *feminicidio*. En efecto, de la forma en que está previsto en

⁹ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

¹⁰ Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>

Costa Rica y en el proyecto de ley de Chile, por ejemplo, al establecerse la *misma pena* para el *femicidio* que para aquellos otros delitos, se produce el mismo efecto: las mujeres sufrirán las mismas penas al matar a sus agresores y sólo el nombre del delito por el que serán condenadas será diferente. Este punto se retomará al tratar la cuestión relativa a las penas. (Toledo Vásquez, 2009, p.65)

En ese sentido, es ineludible considerar que el femicidio o feminicidio no se limita a la esfera íntima, y por tanto, tratándose de las cuestiones que se han catalogado en el ámbito sociológico como *feminicidio o femicidio sexual y el feminicidio sexual sistémico*, la situación es distinta con respecto a la ya analizada. En estas cuestiones, desde la configuración penal, se hayan conductas que comprenden una pluralidad de delitos: desde cuestiones de violación y homicidio hasta otros que incluyen el secuestro, lesiones, violación, homicidio e inhumación ilegal del cadáver de la víctima. Se trata, en definitiva, de lo que se ha denominado en doctrina penal *concurso de delitos* (Toledo Vásquez , 2009, p. 65-66).

Según Toledo, “En estas cuestiones, también es viable sostener que existen tipos penales suficientes: el secuestro, las lesiones, la violación, el homicidio y la inhumación ilegal de cadáver son delitos que ya existen en las legislaciones penales, y que se sancionarán –de acuerdo con las reglas generales– sumando la pena que corresponda a cada uno de los delitos cometidos”. “Sin embargo, la mera suma de las penas y delitos no permite dar cuenta de la gravedad que *como conjunto* poseen estas conductas, especialmente en contextos en que se comienzan a presentar de forma generalizada o frecuente” (Toledo, 2009, p. 66).

Para Toledo (2009, p. 66) “Esta energía de resaltar la mayor gravedad de las conductas en que se cometen dos o más delitos se haya en muchas legislaciones penales, por ejemplo, en la sanción agravada de la *violación con homicidio*”. “De forma semejante, en el caso de la *desaparición forzada de personas* también se trata de una conducta compleja que ha

obtenido un reciente reconocimiento internacional y penal precisamente porque el solo delito de secuestro no era suficiente para comprender la gravedad del fenómeno” (Toledo, 2009, p. 66).

De forma equivalente, es viable considerar que la lesividad adicional que contienen conductas como el femicidio/feminicidio sexual o el feminicidio sexual sistémico, a pesar de que pueden ser reconducidas a un vinculado de delitos independientes, su gravedad como fenómeno no resulta contenido convenientemente en ellas.

Las posibilidades de configuración: ¿Delito especial o perjudicial genérica? Hate crimes en el Derecho anglosajón.

Para Toledo (2009, p. 67) “Otra de las controversias tiene relación con la alternativa de lograr el mismo efecto con la tipificación del *femicidio* o *feminicidio* que con la inclusión de una perjudicial genérica por *motivos discriminatorios*, la cual puede tener un alcance más amplio –en cuanto se aplicaría también a otros delitos y a otros colectivos discriminados más allá de las mujeres”.

Según Toledo “En diversas legislaciones se consagra expresamente una perjudicial de responsabilidad relativa a los *móviles discriminatorios* que motivan al autor a cometer el delito”. “Esta preferencia se vincula con los llamados *hate crimes* o crímenes de odio originarios del derecho anglosajón” (P, Toledo, 2009, p. 67). “Los *hate crimes* (o crímenes basados en prejuicios) son aquellos perpetrados contra una determinada víctima porque ella es percibida como parte de un grupo determinado, que puede ser racial, nacional, étnico, religioso, de género, etc”. “Se trata de conductas que ya forman delitos (homicidio, lesiones, atentados contra la propiedad, etc.) pero cuyas penas se aumentan por tratarse de crímenes motivados por la discriminación”. “Se reflexiona que estos crímenes revisten mayor gravedad por cuanto generan un mayor daño tanto individual como social, en la medida que amenazan la seguridad y

bienestar de la sociedad, especialmente, a quienes forman parte de ese grupo”. “Sin embargo, estas figuras han sido criticadas también porque entran en conflicto con la libertad de expresión y pensamiento en cuanto se criminalizaría en ellas las ideas y no las acciones” (Toledo Vásquez, 2009, p. 67)

De acuerdo a Toledo (2009, p.67) “El piloto de una perjudicial específica por móvil discriminatorio es más corriente en países de Europa, así como en Estados Unidos y Canadá”.

Según Toledo (2009) indica que:

En cualquier caso, diversas legislaciones en la región incorporan miramientos en torno a los móviles o motivaciones del delito como elemento para determinar la pena a imponer en los países que forma una perjudicial específica alcanza normalmente los móviles discriminatorios basados en la raza, religión, nacionalidad y origen étnico, siendo menos frecuentes los cuestiones en que se incluye la orientación sexual, así como las categorías sexo o género (p. 67)

“A pesar de ello, aun dentro de los códigos que expresamente contienen en esta perjudicial la discriminación por razón de sexo, la inclusión de los crímenes de violencia contra las mujeres en ellas resulta hasta la actualidad muy controversial”

Según Toledo (2009) indica que:

En efecto, es ineludible considerar en primer lugar, que estas perjudiciales no han surgido en el Derecho Penal para la protección de las mujeres, sino de otros grupos históricamente discriminados, especialmente raciales o religiosos. La ampliación experimentada ha extendido sus efectos más fácilmente a grupos discriminados por su orientación sexual, por ejemplo, que a las mujeres. Aquí, por supuesto, se haya como base el hecho que la discriminación de éstas es estructural en las sociedades y las dificultades de considerar a las mujeres –en tanto sujeto universal– como un grupo o minoría o género. En el caso de USA,

por ejemplo, a pesar de existir una base normativa que consentiría incluir los crímenes de violencia contra las mujeres en los hate crimes –a través de la expresión género – en la práctica se ha impedido su diligencia en forma específica (p. 68)

Toledo (2009) indica que:

Las razones para ello van desde considerar que los delitos contra las mujeres en la esfera privada no afectarían (ni amenazarían) a las mujeres en general, sino sólo a una mujer en particular lo que establecería una diferencia sustancial con los demás hate crimes, en que los delitos son cometidos contra un integrante cualquiera del grupo, generando una amenaza implícita para quienes lo componen hasta consideraciones de tipo político-estadístico, en cuanto se señala que el gran número de delitos de violencia contra las mujeres colapsaría el sistema de registro (p. 68)

Toledo (2009, p.68-69) “Se mantiene que la firmeza de la coalición por los derechos civiles a la inclusión de crímenes motivados en prejuicios de género en los hatecrimes en Estados Unidos instruye la naturaleza simbólica de esta legislación, valorada en cuanto llama la atención sobre un reducido tipo de crímenes”.

Según Toledo (2009) indica que:

Si un porcentaje alto de crímenes contra mujeres por hombres pudieran constituir hatecrimes, los crímenes contra otras víctimas obtendrían menor atención y el significado de su victimización y la fuerza de sus demandas serían minimizadas, es decir, “si todas las víctimas de crímenes son víctimas de hate crimes, entonces los hate crimes pierden su poder simbólico especial”

“Esto demuestra los problemas que enseña la inclusión de los delitos de violencia contra las mujeres dentro de los hate crimes o en la perjudicial por discriminación en los países que existe, dado el carácter estructural

de la discriminación que las afecta y confirma la inconveniencia de la utilización de normas generales para abordar con efectividad estos delitos”. “Si bien en la teoría es viable considerar que la violencia contra las mujeres debe ser incluida en ellos, la evidencia empírica demuestra que los sistemas de justicia y otros colectivos discriminados no lo entienden así. Desde esta configuración, entonces, la opción por figuras específicas parece ser más adecuada (p.69)

Sin perjuicio de ello, es ineludible considerar otras fórmulas que comienzan a ser exploradas en algunos estados de México, en cuanto a incluir como perjudicial específica de ciertos delitos el hecho de que sean cometidos contra una mujer.

Toledo (2009) indica que:

En este sentido, ya desde 2003 el Código Penal del estado de Chihuahua ha incorporado una disposición por la cual se excluye la pena de homicidio simple cuando la víctima sea una mujer, y recientemente ha sido presentada en el estado de Sinaloa una iniciativa que busca la agravación del homicidio cuando la víctima sea mujer este tipo de formulación resulta compleja si se considera que con ello se sancionan de forma diferenciada todos los homicidios en que la víctima sea una mujer, sin considerar los elementos que han configurado el feminicidio o femicidio en el ámbito teórico desde las Ciencias Sociales. En este ámbito, por el contrario, se reconoce que no todo homicidio de una mujer es un femicidio/feminicidio, lo que este tipo de normas parecen perder de vista. Desde este panorama, resulta aún mayor el riesgo de cuestionamiento de su constitucionalidad, en cuanto a que el aumento de la pena se funda sólo en el sexo, no en el género, que puede ser debidamente considerado sólo si se incluyen elementos que dotan de contexto al delito de que se trate (p.69-70)

¿Cómo se justifica la creación de un delito específico? Bien jurídico protegido, el plus de injusto o igualdad sustancial.

Dentro de la estructura del ordenamiento jurídico, el Derecho Penal es considerado aquella rama a la que corresponde la sanción de las más graves conductas en la sociedad. Se suele denominar la extrema ratio, es decir, el mecanismo jurídico que opera cuando todas las demás formas de control social han fracasado. A pesar que al respecto de ambas aseveraciones encontramos múltiples ejemplos en contrario con las legislaciones penales de todo el mundo, éstos siguen siendo los principios rectores del sistema penal y en consecuencia para justificar su intervención debe tratarse de hechos que afecten gravemente un determinado bien jurídico. (Toledo 2009 p. 70)

Toledo (2009, p.70) “Si analizamos desde este punto de vista los diversos conceptos que se han dado sobre el feminicidio/femicidio encontramos que también existen diversos bienes jurídicos afectados, dependiendo del fenómeno al cual se alude”:

Así, mientras en ciertas cuestiones, como el femicidio o feminicidio sexual entendiendo por tal la muerte de una mujer precedido de un ataque sexual sin duda se atenta contra bienes jurídicos fundamentales como la vida y la libertad sexual, cuando el fenómeno se compone del secuestro, violación, lesiones, homicidio e inhumación ilegal del cadáver de la víctima, el atentado es aún más amplio, ya que junto a la vida y la libertad sexual también se ha afectado la integridad física y la libertad personal de la víctima, a la vez que se atenta contra la administración de justicia y las normas de salubridad pública con la inhumación ilegal. De esta forma, los diversos fenómenos que se conceptualizan como femicidio o feminicidio en el ámbito teórico sociológico, al ser trasladados a la esfera jurídico-penal forman figuras complejas, y en general, pluriofensivas, debido a que son delitos que afectan a una pluralidad de bienes jurídicos (p.70-71)

Pero más allá de ello, gran parte de la discusión en el ámbito penal en torno a los tipos penales específicos sobre violencia contra las mujeres radica en la cuestión de si ellos protegen un bien jurídico diferente que justificaría su existencia separada o independiente de otras figuras penales similares y de carácter neutro, como el homicidio, la violación, el

secuestro, las lesiones, etc. Si bien el concepto de bien jurídico por sí mismo da lugar a diversas posturas en la doctrina penal, en general se ha considerado que la afección a un bien jurídico protegido en los delitos no sólo permite diferenciar los delitos y las penas que se imponen por ellos en atención a la importancia del bien jurídico protegido y la entidad de la amenaza o lesión que éstos le provocan, sino que también impide la tipificación de conductas meramente basadas en concepciones morales. (Toledo Vásquez, 2009, p. 71)

En términos generales, respecto de la violencia contra las mujeres se ha dicho que afecta bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad sexual, etc... Sin embargo, el argumento de fondo que impulsa a la adopción de leyes penales especiales en esta materia es que la violencia contra las mujeres no sólo afecta la vida, la integridad física, psíquica o la libertad sexual de las mujeres"... "Sino que existe un elemento adicional que se haya dado precisamente por la discriminación y subordinación implícita en la violencia de que ellas son víctimas (Toledo, 2009, p. 71).

Para Toledo (2009, p.71-72) Este elemento adicional es el que reconoce el Tribunal Constitucional español, al señalar que el legislador considera que "ciertas acciones son más graves, más reprochables socialmente, porque son expresión de una desigualdad y de una situación de abuso de poder, de una situación de discriminación en que se hayan muchas mujeres".

Este tipo de argumentos son desarrollados por distintas líneas teóricas como elementos constitutivos de un bien jurídico diferente, o bien, de un plus de injusto que justifica la agravación de las penas en este caso... "Siempre teniendo como elemento de consideración de fondo el reconocimiento de la situación de discriminación en que se hayan las mujeres y la necesidad de avanzar hacia una igualdad sustancial, abandonando la mera igualdad formal entre mujeres y hombres" (Toledo, 2009, p. 72).

En cuanto bien jurídico diferente o pluriofensividad de las conductas atentado contra más de un bien jurídico se ha señalado que los delitos de violencia contra las mujeres. “Además de la lesión o puesta en peligro de la vida, la salud, integridad física o psíquica, atentan también contra la prohibición de conductas discriminatorias violentas en un ámbito concreto, como dependiendo de la legislación de que se trate– el de las relaciones íntimas o de pareja (Toledo, 2009, p. 72)

La configuración que valida este tipo de bien jurídico también ha sido criticada, pues se señala que la prohibición de conductas discriminatorias en estos ámbitos en realidad es equivalente a la conducta misma que señala el tipo penal, por lo que se confunde el bien jurídico con la conducta prohibida. Otra dificultad adicional en la adición de un nuevo bien jurídico se haya en que sea ineludible acreditar en cada caso la lesión o puesta en peligro efectiva de ese bien jurídico, por la conducta sancionada, lo cual –por ciertotambién puede dar lugar a discusiones teóricas (Toledo, 2009, p. 72).

Para Toledo “Por otro lado, considerar que existe en estos delitos un plus de injusto que hace recomendable su penalización separada y agravada es otra de las alternativas”. “Este plus de injusto o mayor antijuricidad puede ser fácilmente identificado en conductas que forma una manifestación de la discriminación contra las mujeres, en cuya erradicación se haya comprometido el Estado ya sea a nivel constitucional en diversos país eso legal, a través de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la materia que ha ratificado” (Toledo, 2009, p. 72).

A pesar de la relevancia de esta discusión, es ineludible reconocer que, “en la medida que los tipos penales específicos sobre violencia contra las mujeres ya sea femicidio u otra figura no establecen penas diferentes para el caso en que la misma conducta sea cometida por un hombre”. “La

discusión sobre el bien jurídico o el plus de injusto no se desarrolla especialmente, ya que estas leyes no provocan mayor conflicto en la doctrina penal, al estar ya asegurado el mismo nivel de protección esto es, la misma pena para los hombres víctimas. Este punto se desarrollará más detalladamente en el siguiente acápite (Toledo Vásquez, 2009, p. 72-73).

¿Protección de las mujeres y discriminación de los hombres? La cuestión de la diferencia en las penas cuando los hombres son víctimas.

Uno de los ejes centrales de discusión respecto de los tipos penales específicos se haya en la cuestión relativa a la eventual discriminación en contra de los hombres que importaría sancionar más gravemente ciertas conductas cuando se cometen contra mujeres que cuando son realizadas contra hombres. En efecto, de no mediar una justificación, esto importaría dar un mayor valor a la vida o integridad física de las mujeres que a la de los hombres, lo que importa conflictos de constitucionalidad evidentes. (Toledo Vásquez 2009, p. 73)

Las líneas que se han seguido en lo legislativo frente a esta cuestión son dos: sancionar los delitos contra mujeres con iguales penas que las mismas conductas cometidas contra hombres, por un lado, o bien justificar la mayor penalidad de los delitos específicos de violencia contra las mujeres, de modo que no constituya una vulneración a las garantías de igualdad y no discriminación (con base en la consideración de otros bienes jurídicos afectados o plus de injusto en estas conductas). Ciertas legislaciones, como la ya mencionada normativa sueca y también la normativa que penaliza el femicidio en Costa Rica, simplemente evitan este conflicto, estableciendo penas o rangos de penalidad que son iguales, tanto cuando la víctima sea mujer como cuando sea hombre el proyecto de ley en discusión en Chile plantea la misma configuración (Toledo, 2009, p.73).

Con ello se produce una situación paradójica: se trata de leyes específicas

de violencia contra las mujeres, pero que traen aparejadas las mismas penas que figuras análogas neutras en cuanto a género”. “Por lo tanto, es viable sostener que el ordenamiento jurídico en cuestión, sigue respondiendo en forma igualitaria frente a los crímenes, aunque dándoles una denominación diferente” (Toledo, 2009, p.74). “Si bien es cierto que en estos delitos siempre se establecen rangos de penas (mínima y máxima) dentro de los cuales el tribunal determinará la pena específica a aplicar en cada caso concreto” (Toledo, 2009, p.29). “El solo hecho de establecer el mismo rango hace que se difumine la finalidad de sancionar específicamente estas conductas extremas de violencia contra las mujeres”. “La persistencia del crimen de parricidio o figuras equivalentes como el homicidio calificado por parentesco hacen que se pierda la especificidad de la sanción del femicidio o feminicidio en el ámbito de las relaciones íntimas, pues el ordenamiento jurídico responde de forma equivalente frente a actos de violencia cometidos contra otro sujeto” (Toledo, 2009, p.73-74)

Lo anterior debe ser considerado también a la luz de lo señalado por el mesecvi, pues si bien esta normativa no es neutra en cuanto a género, al tener el mismo contenido que otros tipos penales neutros”. “se pierde una parte del efecto buscado, ya que las mujeres víctimas de violencia que puedan cometer alguno de estos delitos en contra de sus agresor serán condenadas a penas igualmente altas”. “Respecto al femicidio, esta situación podría ocurrir en el caso de Costa Rica y Guatemala. (Toledo, 2009, p.74).

La situación es distinta cuando se opta por establecer una penalidad agravada para estos delitos, comparada con aquella que se impone a los delitos cometidos contra hombres”. “Este es el caso de la actual legislación española y, parcialmente, del femicidio en la ley guatemalteca como se verá más adelante. (Toledo, 2009, p.74).

Según Toledo (2009)

En el caso de España, se han planteado más de un centenar de cuestiones de constitucionalidad desde la entrada en vigor de esta

normativa, dictándose en mayo de 2008 la primera sentencia del Tribunal Constitucional al respecto y una segunda en febrero de 2009, validando la constitucionalidad de estas disposiciones. El tribunal señala que el trato desigual contenido en el tipo penal no es discriminatorio ni atenta al principio de igualdad formal, pues el trato diferente cumple las exigencias de “un fin discernible y legítimo”, que [la norma] debe además articularse, en términos no inconsistentes con tal finalidad” y “no incurrir en desproporción declara. Asimismo, la sentencia señala que “no es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino (...) el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se produce. (p.74-75)

Toledo (2009, p.75) “En definitiva, se trata de una sentencia que avala la existencia de un trato desigual que no forma discriminación en el ordenamiento jurídico penal, destinada a avanzar en el logro de la igualdad material para las mujeres”.

En el caso de Guatemala, la situación es equivalente a la de Costa Rica en cuanto al femicidio cometido en la esfera de las relaciones de pareja y el parricidio, ya que el rango de pena establecido para ambos crímenes es idéntico. Por otro lado, si bien la pena del femicidio es también equivalente a la del homicidio calificado, la formulación del tipo base de femicidio incluye elementos como las “relaciones desiguales de poder” y el dar muerte a una mujer “por su condición de mujer” que no son comparables a la descripción del delito de homicidio calificado ni del parricidio. Así, las conductas que forman femicidio siempre deben contar con estos elementos adicionales, los cuales no tienen cabida en el tipo neutral de homicidio calificado o parricidio. (Toledo, 2009, p.75)

“Una formulación de este tipo, entonces, más allá de otros inconvenientes que se analizan más adelante ubica al femicidio como una figura que en ciertas cuestiones puede constituir una forma especial de homicidio”.

“Calificado sujeta a la misma pena que éste o bien una figura que agrava un homicidio que, de otro modo, sería considerado simple” (Toledo, 2009, p.75).

“Sólo en este último caso habría una diferencia en la penalidad respecto de la comisión de misma conducta en contra de un hombre, cuya pena sería menor”. “Si bien en el caso de Guatemala no existen aún pronunciamientos de tribunales superiores respecto de la legitimidad de la agravación de la pena en lo que a esto se refiere”. “Es dable suponer que puedan hacerse extensivas consideraciones como las que ha formulado el Tribunal Constitucional español en términos de legitimar estas diferencias en la penalidad (Toledo, 2009, p.75-76).

Cuestiones sobre Derecho Penal de autor y la viable autoría femenina.

Para Toledo “Una de las cuestiones controversiales en relación a la existencia de tipos penales específicos de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio o femicidio”. “Es si estos delitos sólo pueden ser cometidos por hombres y las consecuencias que en caso afirmativo o negativo puede importar para la legitimidad de estas normas” (Toledo, 2009, p.76).

“En torno a la posibilidad de autoría únicamente masculina se ha señalado que supondría un atentado al principio de culpabilidad, formando un ejemplo del llamado Derecho Penal de autor”. “Esta crítica cobra fuerza especialmente en la medida en que existe una penalidad agravada en los delitos contra mujeres, comparada con aquella que se prevé para las mismas conductas cometidas contra hombres, como en el caso de la legislación española”. “En lo sustancial, este razonamiento supone que existe una vulneración a la presunción de inocencia y al principio de culpabilidad respecto a que la condición de hombre se transforma en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad en estos delitos”.

“Constituiría un ejemplo de Derecho Penal de autor contrario al Derecho penal del acto, puesto que la sanción se fundaría no en la sola realización de una conducta prohibida, sino también en la identidad de la persona que incurre en ella”. “Se trata de una crítica que advierte el riesgo, en estas disposiciones, de graves retrocesos para el Derecho Penal, en que se volvería a leyes autoritarias que se suponían superadas por el garantismo y el respeto a los derechos humanos de las personas frente al sistema penal” (Toledo, 2009, p. 76-77).

“En primer término, el marco jurídico internacional sobre violencia contra las mujeres no exige que ésta sea cometida únicamente por hombres, sino que sean conductas dirigidas contra mujeres y que estén basadas en su género”. “Esto abre la posibilidad teórica de actos de violencia contra las mujeres cometidos por otras mujeres, posibilidad que en la práctica se declara claramente en ejemplos tales como la mutilación genital femenina, normalmente llevada a cabo en niñas por otras mujeres” (Toledo, 2009, p.77).

“Si bien esto es así, en los tipos penales específicos de violencia contra las mujeres que se han analizado las alternativas son variadas”. “Así, en la legislación sueca, el tipo penal de “grave atentado a la integridad de la mujer”. “Únicamente puede ser cometido por un hombre con quien ella tenga o haya tenido una relación cercana. Si bien este es un tipo penal sexualizado en relación a ambos sujetos (hombre-autor y mujer víctima)”. “no genera mayores conflictos para la doctrina penal porque se prevé la misma pena para este delito que cuando la conducta es cometida por una mujer y la víctima sea un hombre”. “En este caso, como ya vimos, la especificidad del tipo tiene finalidades únicamente simbólicas” (Toledo, 2009, p.77).

En el caso español, en cambio, a pesar que la “violencia de género” está reducida a aquella que se ejerce contra las mujeres en contextos de relaciones de pareja actuales o pasadas, y que el mensaje y definiciones

de la ley permitirían suponer que exige una autoría masculina”, “el punto no ha sido zanjado expresamente por la ley ni por la doctrina o jurisprudencia”. “Así, la sentencia del Tribunal Constitucional ya comentada deja abierta la cuestión de si es viable que se incluyan conductas de mujeres contra mujeres”. “El punto es complejo dado que tratándose de una normativa dirigida únicamente a la violencia contra las mujeres en relaciones íntimas, la interpretación más amplia es decir, que es viable la autoría masculina o femenina– agrava la sanción de esta violencia en las relaciones heterosexuales y lésbicas”. “Este aspecto reviste dificultad precisamente porque la figura supone una pena agravada, y a pesar que es viable justificar el incremento de la pena en las relaciones heterosexuales”. “En las cuales se produce la mayor cantidad de cuestiones de violencia contra las mujeres resulta más difícil la justificación de por qué la violencia al interior de parejas lésbicas se sanciona más severamente que aquella que ocurre en parejas gays” (Toledo, 2009, p.77-78).

Según Toledo (2009) manifiesta que:

En las leyes sobre femicidio en Costa Rica y Guatemala, en tanto, la situación igualmente se haya abierta, es decir, los tipos penales no exigen autoría masculina por un lado pero además, la pena que trae aparejada el delito de femicidio es equivalente a la que se impone en aquellos países por homicidio calificado o asesinato. Con ello se evita el cuestionamiento a la constitucionalidad por la vía del eventual carácter discriminatorio de la norma, si bien, nuevamente, la situación de las parejas de lesbianas pueda dar lugar a hipótesis de más difícil justificación (p.78)

“En el caso de Guatemala, además, atendido que el femicidio incluye también cuestiones cometidos fuera de la esfera íntima, resulta más previsible la autoría colectiva y la participación de otras mujeres en la

comisión del delito. “ya sea como autoras, cómplices o encubridoras. En estas situaciones será interesante conocer los pronunciamientos judiciales, pues pueden constituir cuestiones en que mujeres sean condenadas por femicidio” (Toledo, 2009, p.78).

“Si bien estas cuestiones la autoría femenina en el femicidio así como la penalización de la violencia en las relaciones lésbicas pueden parecer hipótesis de laboratorio”. “Son las eventuales consecuencias de normativas que han evitado la definición de un sujeto activo únicamente masculino” (Toledo, 2009, p.78).

El principio de tipicidad y la precisión del contenido del delito.

“Finalmente, haremos referencia a una de las controversias más bien formales que han encontrado los tipos penales ya aprobados o propuestos de feminicidio o femicidio”. “Que presentan relación con la amplitud y eventual indeterminación de su contenido, lo que podría importar una vulneración del principio de legalidad y tipicidad penal” (Toledo, 2009, p.78)

Esto es especialmente notorio en la formulación de la ley guatemalteca, por ejemplo, al usar expresiones como “en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”, “diere muerte a una mujer, por su condición de mujer”, o el proyecto de ley paraguayo al hablar de “relaciones de género desiguales”. Si bien estas expresiones serán analizadas a profundidad más adelante, cabe hacer algunas apreciaciones generales en torno a cómo pueden entrar en conflicto con el principio de tipicidad penal. De acuerdo con el principio de legalidad, como pilar de las garantías individuales frente al sistema penal, todo delito y toda pena debe estar predeterminado en la ley, esto es, la conducta y la sanción asignada a la misma”. “Un elemento esencial en la descripción normativa es que el mensaje la conducta sancionada sea comprensible para los ciudadanos, presupuesto indispensable para la eficacia de la norma y para el adecuado resguardo de las libertades individuales”. “La

determinación del hecho punible en la ley –tipicidad– guarda un vínculo estrecho con el de seguridad jurídica (Toledo, 2009, p.78-79).

La claridad y la taxatividad de las leyes, además de la propia reserva de ley en materia penal, son fundamentales para el resguardo de este principio. La exigencia de claridad es en particular la que conduce a evitar el uso de “cláusulas abiertas, los conceptos valorativos y, en general, la indeterminación normativa de la materia legislada”. “Se trata de evitar que la indeterminación de los tipos penales pueda llegar a hacer que su diligencia quede sujeta únicamente del arbitrio judicial” (Toledo Vásquez, 2009, p.79)

Según Toledo (2009) indica que:

Si bien existen numerosas áreas en que las leyes penales sufren de algún grado de indeterminación en su contenido de acuerdo con la complejidad del área de que se trate y las consideraciones político criminales que guían al legislador en cada caso– es ineludible analizar con mayor cuidado los riesgos que una eventual vulneración de este principio puede acarrear para las normas relativas a la violencia contra las mujeres y, en particular, el femicidio o feminicidio. Para ello es interesante analizar el reciente caso de la Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de Costa Rica (p.79)

Toledo (2009) La Sala Constitucional costarricense declaró en octubre de 2008 la inconstitucionalidad de las figuras de maltrato y la de violencia emocional en contra de la esposa o conviviente, dos de las disposiciones más relevantes de la ley. Si bien el nuevo delito de femicidio no ha sido afectado por la declaración de inconstitucionalidad, lo ocurrido alerta sobre las dificultades particulares que afectan a los tipos penales de violencia contra las mujeres para ajustarse a los criterios de claridad y determinación que exigen los Tribunales en cada país “(Toledo, 2009, p.79-80)

En efecto, llama la atención en el caso costarricense que a pesar de tratarse de una Sala Constitucional la cual reconoce que el Código Penal ya contempla términos no del todo precisos (tranquilidad pública en el artículo 271 del Código Penal) o con gran capacidad de absorción (artificios o engaños en el artículo 216 del Código Penal)” igualmente considera que expresiones como “agredir”, “lesionar”, “insultar”, “desvalorizar”, “ridiculizar”, “avergonzar” o “atemorizar” resultan a tal punto imprecisas como para determinar la inconstitucionalidad de las referidas normas. (Toledo, 2009, p.80)

Considerando lo anterior, es ineludible preguntarse cuánto más compleja será la situación de expresiones como “relaciones de género desiguales” o dar muerte a una mujer “por su condición de mujer. Si bien estas expresiones son conocidas en el ámbito de los derechos de las mujeres, sabemos también que carecen de un sentido unívoco, por lo que –en estas cuestiones es viable considerar que los tipos penales no satisfacen el principio de tipicidad por no estar claramente establecido el núcleo de la conducta prohibida (Toledo Vásquez, 2009, p.80)

Es ineludible considerar que, dada la resistencia que provocan en los sistemas jurídicos las normas específicas referidas a mujeres –no sólo penales–, es de esperarse todavía un mayor nivel de minuciosidad cuando se trate de examinar la constitucionalidad de normas que establecen delitos nuevos, lo que debe ser un factor a considerar al redactar estas figuras. En este sentido, el caso de Costa Rica debe ser estimado como ejemplar en cuanto constata que los umbrales de rigurosidad, en la práctica, siempre son más altos cuando se trata de normas a favor de los derechos de las mujeres”(Toledo Vásquez, 2009, p.81).

1.4 Descripción detallada la metodología empleada.

De forma tal que el lector interesado pueda repetir el experimento o el proceso y llegar a los mismos resultados.

1.4.1. Método

El método correlacional consiste en aplicar un análisis estadístico a un conjunto de datos seleccionados, con el fin de averiguar si hay o no correlación entre ellos (si están relacionados). Al igual que en la observación sistemática en este método el investigador tampoco ejerce ningún control sobre las variables objeto de estudio.

Se aplica el método hipotético deductivo: Uno de los métodos más aceptados en la actualidad. Se considera una descripción del método científico. Plantear hipótesis en base a los datos disponibles. Luego aplicar la deducción para llegar a una conclusión. Esta se realiza a través de experimentación¹¹ (Puebla, 2016, p.15).

1.4.2. Tipo de Investigación:

Por su propósito fundamental la presente investigación corresponde a una investigación teórica, pura o básica; puesto que está dirigida hacia un fin netamente cognoscitivo, repercutiendo en unas cuestiones de correcciones, y en otros en perfeccionamiento de los conocimientos. (Puebla, 2016, p.15).

1.4.3. Diseño de investigación:

Diseño no experimental, En los estudios correlacionales no se obtiene una información sobre cuál de los fenómenos es causa y cuál efecto, únicamente lo que pretende es conocer el grado y la dirección de la correlación. Una correlación no es más que una expresión estadística mediante la cual se relacionan dos hechos. El valor de la correlación puede oscilar entre 0 y 1, cuando más próximo a 1 sea el valor obtenido mayor es la relación entre las dos variables estudiadas. La correlación además puede ser positiva (+) o negativa (-). La correlación será positiva

¹¹ Puebla, C. (24 de Agosto de 2016). *Método hipotético deductivo*. Obtenido de <https://mbeuv.files.wordpress.com/2010/09/4-metodo-hipotetico-deductivo.pdf>

cuando el aumento (o disminución) en los valores de una de las variables estudiadas conlleva también el aumento (o disminución) en la otra. Mientras que, por el contrario, existirá correlación negativa cuando se produce una relación inversamente proporcional entre dos fenómenos, de tal forma que al incrementarse el valor de uno, se observa un decremento en el valor del otro, o viceversa.

1.4.4. Tipo de análisis:

La técnica del análisis documental; utilizando, como instrumentos de recolección de datos: fichas textuales y resumen; teniendo como fuentes libros y documentos de la institución; que usaremos para obtener datos de los dominios de las variables: conceptos básicos, normas generales y legislación comparada; responsables y contextos.

1.4.5. Forma de tratamiento de los Datos:

Los datos obtenidos mediante la diligencia de las técnicas e instrumentos antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados; serán incorporados o ingresados al programa computarizado Microsoft Excel; y con él se harán cuando menos, los cruces que consideran la hipótesis; y, con precisiones porcentuales, ordenamiento de mayor a menor, y cronológico, serán presentados como informaciones en forma de cuadros, gráficos, etc.

1.5. Hipótesis y Análisis de las variables.

1.5.1. Hipótesis

Si se proponen Estrategias jurídico sociales, entonces disminuirá el crecimiento del feminicidio en el Perú.

1.5.2. Variables

Variable Independiente: Estrategias jurídico sociales.

Variable dependiente: Feminicidio.

Tabla 3. Operacionalización de variables

VARIABLES	INDICADORES	SUB INDICADORES	ITEMS	TÉCNICAS E INST.
Estrategias jurídico sociales	Sociológica	Favorece o perjudica a la vida humana	1 y 2	Encuesta y Cuestionario
	Normológica	Normas jurídicas	3 y 4	
	Dikelógica	Valores y humanidad	5 y 6	
Feminicidio	Feminicidio Íntimo	Relación íntima con un hombre	7	Encuesta y Cuestionario
	Feminicidio Infantil	Relación familiar	8	
	Feminicidio sexual sistémico:	Contra niñas menores de edad	9	
	Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas	Asesinato de niñas y mujeres	10	

Fuente: Elaboración propia

1.6. Diseño de contrastación de la hipótesis.

El trabajo de investigación es de tipo aplicada, tecnológica o de desarrollo o denominada Descriptiva-Explicativa. El método que se empleará en la presente investigación es el análisis. El diseño del presente proceso de investigación es Cuantitativa.

Por su función pueden ser descriptivas, explicativas y predictivas.

- **Las descriptivas:** Son predominantemente investigaciones cualitativas, en base a fuentes documentales. Cuando una investigación es solo descriptiva recibe el nombre de monografía.
- **Las explicativas:** son investigaciones causales, ya que plantean hipótesis explicativa, es decir propuestas de explicación al problema causal, que luego deben ser contrastadas. Estas investigaciones son las más apropiadas para las tesis de maestrías y doctorado.
- **Las predictivas:** plantean hipótesis predictivas que para poder ser contrastadas requieren de un experimento con poblaciones de condiciones o características uniformes.

1.6.1. Área de estudio-ubicación

El área de estudio será la ciudad de Lambayeque que comprende el Distrito Judicial y Fiscal de Lambayeque.

1.6.2. Población y muestra:

Población: Debido a que la población de informantes para el cuestionario son: Jueces, fiscales, docentes y abogados, en el ámbito penal.

Muestra: En nuestro departamento, conformados por un promedio de 120 personas, se les aplicarán las guías a todos ellos.

Tabla 4. Distribución de la muestra

		N!	%
Responsables	Jueces	15	13%
	Fiscales	10	8%
Comunidad Jurídica	Abogados	60	50%
	Docentes	35	29%
TOTAL		120	100%

Fuente: investigación propia

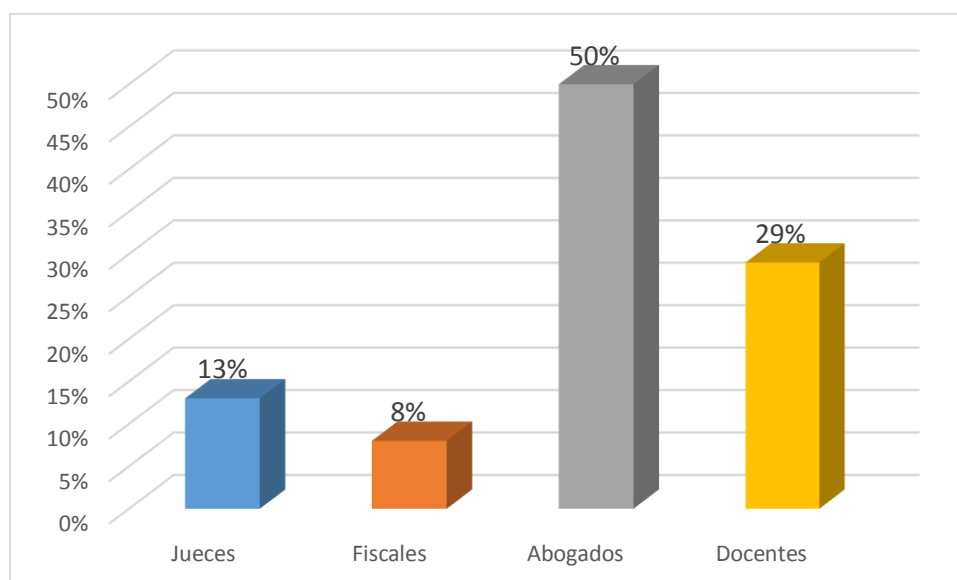


Figura 1. Distribución de la muestra

Fuente: investigación propia

1.7. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1.7.1. Materiales

- Útiles de escritorio
- Fichas de trabajo
- Recursos según las estrategias empleadas

1.7. 2. Técnica-Instrumento.

➤ Técnicas de fichaje:

Se utilizará para fijar conceptos y datos relevantes, mediante la elaboración y utilización de fichas para registrar organizar y precisar aspectos importantes considerados en las diferentes etapas de la investigación.

Las fichas a utilizar fueron:

- ❖ Ficha de Resumen: Fueron utilizadas en la síntesis de conceptos y aportes de diversas fuentes, que fueron organizados concisa y pertinentemente en estas fichas, particularmente sobre contenidos teóricos o antecedentes consultados.
- ❖ Ficha Textuales: Utilizados en la transcripción literal de contenidos, sobre su versión bibliográfica o fuente informativa original.
- ❖ Fichas Bibliográficas: Se utilizaron en el registro de datos sobre las fuentes recurridas y consultadas que dieron el soporte científico correspondiente a la investigación.

➤ **Documentos estadísticos:**

Específicamente se usaran documentos estadísticos de información policial así como jurídica procesal penal, proporcionada por la oficina de estadística de la corte superior de justicia de Lambayeque, y del Ministerio Público.

➤ **Encuesta:**

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (García, 2015, p.20), en esta oportunidad la encuesta está conformada por las dimensiones e indicadores de la variable dependiente Delito de feminicidio.

➤ **Cuestionario.**

“El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (Casas, 2003, p.21), en esta oportunidad el cuestionario consta de 11 preguntas que representan los indicadores y las dimensiones de la variable dependiente delito de feminicidio, teniendo como escala de medición la escala de Likert como se describe a continuación:

Categorías

1. De acuerdo
2. Totalmente de acuerdo
3. En Desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo.

1.8. Métodos Y Procedimientos Para La Recolección De Datos.

Método inductivo: “el método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría”. (Alamilla, 2014, p.24), en esta oportunidad se analiza las estrategias jurídicas como alternativa para disminuir los delitos de feminicidio¹².

Método deductivo: “El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (Alamilla, 2014, p.25), en esta oportunidad se analizan las estrategias sobresalientes que han tenido éxito en ciudades que lograron vencer la inseguridad ciudadana.

Método analítico: “El método analítico es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual”. (Alamilla, 2014, p.25), Se analiza el incremento del feminicidio en el Perú, y sus posibles mecanismos de solución.

Método sintético: “Es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Método inductivo-deductivo: consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. (Alamilla, 2014, p.25),

Método analítico-sintético: “Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)”. (Alamilla, 2014,

¹² Alamilla, J. S. (28 de agosto de 2014). *Fundamentos de Investigación*. Obtenido de <https://shounyalamilla.blogspot.pe/>

p.25), Se presenta un marco teórico sobre el feminicidio, sus orígenes, consecuencias y avances en el Perú.

Método histórico-comparativo: “Es un procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de dichos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común”. (Alamilla, 2014, p.26), se presentan las estadísticas de cómo ha evolucionado el feminicidio en el Perú.

Método hipotético-deductivo: “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. (Alamilla, 2014, p.26), en esta oportunidad se plantea una hipótesis acerca de la efectividad de las estrategias jurídicas sociales como una alternativa para disminuir los delitos de feminicidio en el Perú¹³.

1.9. Análisis Estadísticos de los Datos

Los datos serán organizados en cuadros estadísticos y gráficos en barra trabajados en Excel que permitirán su análisis e interpretación pertinente.

Coeficiente de correlación de Pearson: es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. “A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables”. (Weisstein, 2017, p.27)

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas

Fórmula:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y},$$

¹³ Alamilla, J. S. (28 de agosto de 2014). *Fundamentos de Investigacion*. Obtenido de <https://shounyalamilla.blogspot.pe/>

Interpretación:

El valor del índice de correlación varía en el intervalo $[-1,1]$, indicando el signo el sentido de la relación:

- Si $r = 1$, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables denominada *relación directa*: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.
- Si $0 < r < 1$, existe una correlación positiva.
- Si $r = 0$, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables.
- Si $-1 < r < 0$, existe una correlación negativa.
- Si $r = -1$, existe una correlación negativa perfecta¹⁴. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada *relación inversa*: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante (Weisstein, 2017, p.27).

¹⁴ Weisstein, E. (15 de agosto de 2017). *Coeficiente de correlación de Pearson*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

PARTE I

CAPÍTULO I: ESTRATEGIAS JURÍDICO SOCIALES.

En el presente artículo aborda tres componentes muy importantes como son: Estrategias jurídico sociales desarrolladas por el autor Ciuro (2011), las cuales son: La Sociológica, la Normológica y la Dikelógica, la primera especifica acciones desde el punto de vista social, la segunda hace referencia al estudio de normas y/o leyes y la tercera combina lo social con las normas o leyes.

También se describen casos exitosos de las ciudades Dar es Salaam y Filipinas, descritas por el autor (Shaw & Travers, 2005, p.21).

Con respecto a las estrategias jurídicas sociales deben ser promovidas por los operadores jurídicos teniendo en cuenta las normas existentes es decir la exigibilidad de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito jurídico como social y la participación activa de la colectividad que será fundamental en la prevención del delito de feminicidio, materia central de esta investigación (Shaw & Travers, 2005, p.21).

En cuanto a las ciudades Dar es Salaam y Filipinas, ambas coinciden que para prevenir el delito es importante desarrollar estrategias jurídicas sociales, teniendo como elementos claves la participación ciudadana, la policía auxiliar y que estar liderada por el Ministerio Público (Shaw & Travers, 2005, p.21).

Las autoridades de ambas ciudades han podido descubrir que para prevenir el delito es muy importante realizar trabajos a nivel comunidad, colectividad, estar en el mismo lugar de los hechos pero antes de que ocurran, mediante estrategias que permitan prevenir, disuadir y disminuir el delito, en ese sentido la localización del problema y sus actores de vital importancia para realizar las mencionadas estrategias, de esta manera se logra una excelente participación entre la autoridad y el pueblo, sin más preámbulo veamos el desarrollo de este capítulo que a continuación se describe.

1.1 Estrategias Jurídico Sociales

La Estrategia jurídica

De acuerdo a los aportes de Caldani (1976) indica que:

En términos del integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista del mundo jurídico podría expresarse que la estrategia ha de atender a las totalidades respectivas de los despliegues sociológicos, normológicos y axiológicos y se vincula más con el orden de repartos, con el ordenamiento normativo y con el régimen socionormológico de justicia. (p. 9)

Asimismo Caldani (1976) manifiesta:

En el marco estratégico y táctico es importante reconocer en plenitud la realidad social, normativa y axiológica de la que se parte, a cuál se pretende llegar y cómo se ha de recorrer el camino para lograrlo. Vale que, como lo viene haciendo la teoría trialista, se integren las perspectivas de lo jurídico en una vasta complejidad pura de la realidad social, las normas y los valores y de sus alcances materiales, espaciales, personales y temporales. (p. 10)

En resumen Caldani nos indica que la Estrategia Jurídica es un conjunto de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado, teniendo como base fundamental pilares tres aspectos inseparables como son: la sociología, la normología y la socionormología.

La estrategia Social

“Los conceptos de ‘estrategias de sobrevivencia’, ‘estrategias de reproducción’ o ‘estrategias familiares de vida’ han sido usados ampliamente en la literatura sociodemográfica como tipos de acciones sociales definidas como “esfuerzos económicos y ocupacionales” (Salvia, 2000, p. 2)

En resumen la estrategia social está orientada a establecer acciones que permitan combatir fenómenos o problemas sociales que afectan o vulneran derechos fundamentales como la sobrevivencia, salud,

educación, entre otros.

Según Ciuro presenta tres dimensiones jurídicas sociales, cómo:

Dimensión sociológica: Contar con la configuración de la dimensión sociológica es muy importante para desenmascarar la realidad existente “debajo” de las normas. Si las normas las hacen habitualmente los repartidores, que para serlo disponen de la fuerza (distinta del poder), es obvio que ellos tratarán de normativizar lo que más convenga a sus intereses, pero suelen quedar otros intereses débiles ocultos (p.12)

La dimensión sociológica del mundo jurídico se compone de adjudicaciones de potencia e impotencia. Goldschmidt presentó a las potencias y las impotencias como lo que favorece o perjudica al ser y de modo especial a la vida, pero a nuestro parecer conviene considerar como potencias e impotencias a lo que favorece o perjudica a la vida humana”. (Ciuro, 2011, p. 23). Es cierto que la vida es muy difícil de conceptuar, pero no podemos no ocuparnos de ella o no procurar su conceptualización porque es lo que más nos importa; al fin lo más relevante que nos sucede es que vivimos”. “Las adjudicaciones son específicamente jurídicas cuando se relacionan con seres humanos” (Ciuro, 2011, p. 24).

Dimensión Normológica: “Según la propuesta de construcción integrativista tridimensionalista trialista, ha de tenerse por norma la captación lógica de un reparto proyectado hecho desde el punto de vista de un tercero. El punto de vista de un tercero puede expresarse también con la palabra “neutral” y, en un sentido más fácil de aprehender, considerarlo una captación “promisoria”. Sea cual fuera la terminología, de ser o deber ser, empleada en la fuente formal, la norma, captación lógica, “promete” que algo “será”. “Aunque también existe la posibilidad de una captación genéricamente dirigida al deber ser y “prescriptiva” en sentido amplio, se opta para la norma por el modelo “promisorio” señalado porque es muy importante tener en cuenta si la norma se cumple, es decir, si es exacta” (Ciuro, 2011, p. 24)

En la construcción trialista tradicional, que refiere la interpretación a la auténtica voluntad del autor, también tiene gran importancia la fidelidad de la norma, que ésta logra cuando expresa con acierto el contenido de dicha voluntad. La captación normativa al propio tiempo describe e integra el reparto proyectado. La descripción se perfecciona en la fidelidad y la exactitud. La integración, mediante la cual la norma determina los alcances de la realidad y le incorpora sentidos que ésta en sí no tiene, es satisfactoria en términos de adecuación a los fines de los autores. Asimismo es relevante el impacto que los repartos y las normas producen en otros repartos y en otras normas” (Ciuro, 2011, p. 24).

Dimensión dielógica: “El integrativismo tridimensionalista trialista somete a la realidad social y las normas a las valoraciones de un complejo de valores que culmina en la justicia. De ese complejo forman parte también, por ejemplo, la utilidad, el amor, la verdad, la belleza y la santidad. “Entendemos que el valor supremo a nuestro alcance ha de ser el deber ser pleno de nuestro “ser”, la humanidad. “Según los lugares que se les adjudiquen, los valores pueden presentarse en relaciones de coadyuvancia o de oposición, sea ésta legítima, de sustitución, o ilegítima, de secuestro del material que corresponde a un valor por otro valor” (Ciuro, 2011, p. 24).

Ahora se desarrollan dos casos exitosos sobre lucha contra la inseguridad ciudadana, donde se aplicaron estrategias jurídicas sociales como son las ciudades Dar es Salaam y Filipinas que a continuación se describen.

1.2. Caso Dar es Salaam

Dar es Salaam es el mayor centro comercial de Tanzania y una de las ciudades de mayor crecimiento del África Subsahariana. Ocupa un área de 1.800 kilómetros cuadrados, con una población de 2,5 millones de habitantes, que crece a un ritmo anual del 4,3% según el Censo Nacional de 2002. Aparte del aumento de la población, la ciudad también se está

extendiendo lateralmente a un ritmo del 7% anual, lo que no es proporcional a la expansión de los servicios básicos. Otros retos emergentes de la rápida urbanización incluyen el aumento de la pobreza urbana y de la exclusión social, así como el aumento de la delincuencia. La incapacidad de los centros urbanos para suministrar oportunidades de empleo por adelantado en el sector público o privado no ha cambiado la opinión de que los centros urbanos siguen siendo los motores del desarrollo” (Shaw & Travers, 2005, p.75).

A continuación se describen las experiencias sobre las estrategias jurídicas sociales que desarrollaron las autoridades de la ciudad Dar es Salaam, convirtiéndola hoy en día como una de las ciudades más seguras del mundo:

1. El Enfoque

Se observa como todos los operadores de la ciudad Dar es Salaam, trabajaron en conjunto, para hacer de su comunidad uno de los lugares más seguros del mundo, autoridades, pueblo, ministros, instituciones, entre otros se unieron para sacar adelante estrategias que permitan combatir y sobre todo prevenir el delito en su ciudad.

Se utilizó el “**enfoque ascendente**”, ya empleado en la ciudad a través del Programa de Ciudades Sostenibles (EPM) para reunir a todas las partes interesadas en la participación en el desarrollo de estrategias de prevención del delito. Se preparó un inventario de todas las partes interesadas, que se usó para reunir las mediante sesiones informativas, talleres de sensibilización y seminarios, medios de comunicación y otra documentación (Shaw & Travers, 2005, p.78).

Según Shaw & Travers indica que, el vínculo entre las partes interesadas principales, es decir, los líderes de la comunidad y el sector popular, y las partes interesadas secundarias, incluyendo los ministerios y las instituciones del Gobierno, así como las Instituciones de Educación Superior, demostró su importancia a la hora de compartir conocimiento, movilizar recursos y lograr

acuerdos sobre los papeles y compromisos de todos ellos para implementar las estrategias adoptadas para abordar el problema del aumento de los índices de delincuencia en la ciudad. De este modo, se creó una asociación entre las partes interesadas y los dirigentes de la ciudad, y la coordinación de las iniciativas para la prevención del delito fue asumida por Ciudades Más Seguras (2005, p.78).

2. Los objetivos de Ciudades Más Seguras: Dar es Salaam

- Reducir la cantidad de víctimas de delitos y proporcionarles asistencia, así como prevenir la victimización repetitiva con un enfoque de asociaciones con otras partes interesadas y comunidades.
- Apoyar y aumentar las políticas de prevención mediante el modelo de vigilancia comunitaria.
- Desarrollar una cultura de respeto y cumplimiento de las leyes, al mismo tiempo que se abordan las causas subyacentes de la criminalidad, la violencia, la delincuencia y la inseguridad para mejorar y / o cambiar los entornos socio-económicos, culturales y físicos que conducen a estos fenómenos.

3. Estrategias:

(i) Seminarios y Talleres de Sensibilización: Los seminarios y talleres capacitaron a las partes interesadas que asistieron para desarrollar recomendaciones concretas sobre la forma en que debería implementarse la prevención del delito y sobre cómo identificar las funciones y responsabilidades específicas de cada parte, incluyendo los compromisos potenciales. Algunas de las recomendaciones hechas por las partes interesadas incluían la necesidad de una concienciación intensiva y continua entre los miembros de la comunidad para que hagan su papel y trabajen con el gobierno y otras partes interesadas en el desarrollo y la implementación efectivos de iniciativas de prevención del delito (Shaw & Travers, 2005, p.79).

Sensibilización para crear redes y establecer un inventario de partes interesadas



Figura 1. Talleres de sensibilización

Fuente: (Shaw & Travers, 2005, p.79).

Talleres de Sensibilización a nivel municipal

Se celebró la primera fase de los seminarios de sensibilización y sesiones informativas para todos los líderes locales y presidentes de subdistritos de las tres zonas de Dar es Salaam en ese momento: Temeke, Ilala y Kinondoni¹⁵. “El Ministerio del Interior, que integra el Departamento de Prevención del Delito y las Instituciones de Educación Superior, participó en estos seminarios de sensibilización y concienciación a nivel popular que, por primera vez en la historia de Dar es Salaam, intentó aumentar la concienciación pública sobre la prevención del delito” (Shaw & Travers, 2005, p.79).

En la segunda fase del proceso, las partes interesadas secundarias participaron en sesiones informativas y debates profundos por separado. Se pidió a los participantes que aportaran información rigurosa y que clasificaran los delitos que causaban más preocupación en sus localidades en relación con robos, abuso de drogas, hurtos, robos a mano armada y delincuencia, entre otros. La información aportada se representó posteriormente para proporcionar un marco de niveles de delincuencia en toda la ciudad (Shaw & Travers, 2005, p.79).

¹⁵ Shaw, M., & Travers, K. (25 de abril de 2005). *Estrategias y mejores prácticas en prevención del delito con relación a áreas urbanas y juventud en riesgo*. Obtenido de http://www.academia.edu/22668476/Bangkok_Tailandia_18-25_de_abril_de_2005

(ii) Cumplimiento de la ley y los estatutos: Policía Auxiliar de la Ciudad y Tribunales de Distrito La Policía Auxiliar

Para crear una cultura de respeto de las leyes y los estatutos entre los residentes de la ciudad, se necesitaba una estructura para complementar los esfuerzos del gobierno. Esto se consiguió con el establecimiento de la Policía Auxiliar de la Ciudad, que se relaciona con las comunidades a través de los grupos Sungusungu y, juntos, implementan las iniciativas locales de prevención del delito. En el proyecto piloto se reclutaron aproximadamente 100 oficiales, que se entrenaron en la Escuela de Entrenamiento de Policía de Moshi. Después se repartieron por las cuatro autoridades en 2001. Los objetivos principales de esta iniciativa eran (Shaw & Travers, 2005, p. 80):

- Mejorar la seguridad y la protección pública mediante la vigilancia y las patrullas públicas.
- Reforzar el cumplimiento de las leyes y los estatutos mediante la educación de la población en estatutos urbanos y municipales.
- Complementar los esfuerzos comunitarios a nivel local mediante el uso de vigilancia comunitaria, y así proporcionar una guía y un apoyo a los Sungusungu.

(iii) Auditorías de seguridad para mujeres:

Para Shaw & Travers, las mujeres son las dueñas de los entornos en los que viven. Cuando se implican son capaces de llevar a cabo cambios que pueden fomentar su desarrollo y el desarrollo de la comunidad en general. Sobre la seguridad siempre se ha dicho que “un lugar seguro para las mujeres es un lugar seguro para todos (2005, p. 81).

Seguridad siempre se ha dicho que *“un lugar seguro para las mujeres es un lugar seguro para todos”*. Ciudades Más Seguras trabaja para incluir a todos los grupos vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, en la sociedad, y así realzar la seguridad como elemento de gestión. En lo relativo a las mujeres, Ciudades Más Seguras trabaja para unir a los

grupos de mujeres, para que puedan analizar sus comunidades e identificar los asuntos que causan inseguridad en su vida diaria, y también para debatir y ponerse de acuerdo en cómo abordar mejor los problemas a través de auditorías de seguridad para mujeres. Estas auditorías de seguridad para mujeres implican a otros participantes, incluyendo a los hombres, los actores locales en posiciones de liderazgo y la gestión municipal en todo el proceso. De esta manera, las auditorías de seguridad pueden ser el punto de partida de la mejora del entorno a través de la mejora de los diseños urbanos y la actualización de estrategias que mejoran la seguridad urbana (p.82).

IMPLICACIÓN DE LAS MUJERES EN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO MEDIANTE LAS “AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PARA MUJERES”

“Las auditorías de seguridad realizadas en Dar es Salaam pueden ser muy distintas de las que se realizan e implementan en, por ejemplo, Montreal, Canadá, debido a las diferencias socio-económicas y geográficas entre las dos ciudades” (Shaw & Travers, 2005, p.21). “Sin embargo, una cosa que tienen en común es **el miedo a la victimización entre las mujeres** y la necesidad de tratar este miedo” (Shaw & Travers, 2005, p.21). “Los problemas pueden ser distintos en su naturaleza y magnitud, y las soluciones y niveles de implementación pueden ser diferentes, pero la buena noticia es que un enemigo común - el miedo al delito, ha unido a las mujeres” (Shaw & Travers, 2005, p.82).

En Dar es Salaam se han realizado tres auditorías distintas: en Manzese, Kurasini y Mchikichini. En Manzese, un grupo de mujeres de Mnazi Mmoja identificaron muchos asuntos problemáticos, desde el diseño medioambiental hasta las características socio-económicas y culturales que inculcan sentimientos de miedo en la vida diaria de las mujeres. El miedo al delito es tan malo como un delito en sí mismo, ya que su impacto es el mismo. “Los problemas de diseño medioambiental que mencionaron

incluyen la naturaleza no planificada de su asentamiento, junto con unas calles estrechas y mal iluminadas, falta de canales de desagüe y de nombres de las calles - aunque las calles sean solamente caminos de tierra (pobres), como causas potenciales de miedo al delito” (Shaw & Travers, 2005, p.82).

Otros asuntos, incluyendo la congestión de la vivienda sin espacio para la circulación del aire, las viviendas que bloquean los pocos caminos y calles, que bloquean el acceso a servicios de emergencia como la policía, los bomberos y las ambulancias. “Entre los aspectos socioeconómicos, citaron las mercancías peligrosas y las empresas comerciales mixtas que operan en el área, entre las que se incluyen numerosas destilerías y cervecerías ilegales que dan trabajo a la mayoría de mujeres y chicas, así como los quioscos de espectáculos de vídeo de 24 horas, pensiones, mercados de comida al aire libre, etc... Todos estos elementos hacen que la delincuencia pueda prosperar en estas áreas. En lo relativo a los aspectos culturales, mencionaron los quioscos ilegales de espectáculos de vídeo, que atraen a los niños en edad escolar y les disuaden de asistir a la escuela” (Shaw & Travers, 2005, p.82).

Según sus conversaciones, las mujeres hicieron las siguientes recomendaciones (Shaw & Travers, 2005, p.82-83):

:

Diseño medioambiental: el municipio debe colaborar con la comunidad para mejorar el asentamiento. Se comprometieron a lanzar una campaña por la iluminación de los alrededores por motivos de seguridad, con el lema “una bombilla en cada puerta”. Se pusieron en acción inmediatamente.

Aspectos económicos (generación de ingresos y reducción de la pobreza): las mujeres sugirieron el descenso de actividades comerciales para generar ingresos entre las mujeres, en lugar de vender las elaboraciones locales que deben vender por la noche, arriesgándose a la victimización.

Aspectos culturales: Recomiendan la prohibición urgente de los quioscos de espectáculos de vídeo y la reglamentación de las horas comerciales, especialmente los bares locales. También debería hacerse hincapié en la mejora de los grupos Sungusungu en el área.

Implementación: las mujeres, la mayoría de las cuales trabajan en los comercios locales ilegales de cerveza y destilerías para ganarse la vida, decidieron cambiar y propusieron una actividad distinta para generar ingresos, libre de delitos y del riesgo de victimización, y un descenso en general. Cambiaron sus productos y empezaron a vender cereales y harina de maíz. Con el apoyo de Ciudades Más Seguras, este proyecto está aumentando ahora para incluir la venta de alimentos durante la hora de la comida. El trabajo es ahora mucho más seguro para estas mujeres”. “El grupo ha atraído el interés de otras mujeres por retirarse de los riesgos y del empleo ilegal, lo que ha dado como resultado el establecimiento de tres grupos más, con el apoyo de Ciudades Más Seguras.

(iv) Proyectos de generación de ingresos:

Para Shaw & Travers, la pobreza se ha relacionado a menudo con el delito; no porque la gente pobre sea violenta, sino porque tiene que sobrevivir por cualquier medio, incluso si eso significa hacer cosas ilegales. La situación de inactividad conduce a los jóvenes a cometer delitos sin saberlo, mientras están sentados en esquinas sin trabajo, “*vijiweni*” (la mente ociosa es el taller del diablo). Por otro lado, los delitos afectan especialmente a los pobres porque éstos no tienen medios con los que protegerse contra los perpetradores de actividades criminales, ni tampoco saben cómo funcionan los sistemas judiciales y no pueden cubrir los costes de usar sistemas de seguridad. En la mayoría de los casos, también han recibido poca educación, viven en los suburbios más pobres de la ciudad y obtienen los empleos peor pagados. *Llevaban una vida de ira, pero aun así no querían dormir con los estómagos vacíos.* Los jóvenes y las mujeres constituyen la

mayoría de este grupo y son los más vulnerables ante el delito. El proyecto Ciudades Más Seguras trabaja con los grupos vulnerables para abordar las causas subyacentes de delitos mediante sesiones de sensibilización y de concienciación (2005, p.83).

1.3. Caso Filipinas

Filipinas al igual que otros países en vías de desarrollo por no decir pobres, han tenido éxito en hacer una de las ciudades más seguras en el mundo, luego de haber derrocado una férrea dictadura y establecer una democracia en 1986, mediante una revolución pacífica.

A continuación describo la estrategia denominada COPS, cuyas iniciales significan “Prácticas óptimas y punto de vista concluyente”, en su investigación realizada por Shaw & Travers, describe la siguiente estrategia:

COPS es una táctica policial nacional para prevenir delitos, el cual se fundamenta en una estrategia integral propuesta llamada Estrategia Nacional Antidelito (NACS, según sus siglas en inglés), organizada por la ONU con participación de Filipinas, quién implementa esta estrategia mediante la Policía en agosto del 1994, para luego convertirse en un programa emblemático. Para luego ser aprobada por la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo en el 2004. (2005, p.87)

Principios Básicos

Para Shaw & Travers, hay tres principios básicos, (2005, p.87-88):

Interdependencia de Paz y Desarrollo

Según la ONU, el problema del delito necesita una respuesta coordinada, para disminuir su incremento y para enfrentar al mismo tiempo problemas socio-económicos intrínsecos como el desempleo, desigualdad y pobreza.

Responsabilidad compartida para la vigilancia

Como indica Robert Pell, mencionado por Shaw & Travers, “La policía es

la sociedad y la sociedad es la policía”, en otras palabras también se debe involucrar la a comunidad, para que apoye a la vigilancia.

Indispensabilidad del poder del pueblo en la lucha contra el delito

El pueblo es una fuente inicial de poder para enfrentar la delincuencia, terrorismo, insurgencias, entre otras amenazas a la convivencia social en armonía y paz.

Tres componentes claves

De acuerdo con NACS, COPS maneja una estrategia de 3 frentes contra el delito:

1. Servicio de vigilancia completa,
2. Resolución de problemas y
3. Sociedad ciudadana.

Estas estrategias interactúan como los tres Pilares Claves de COPS, que se encuentran interrelacionados y reforzados mutuamente (Shaw & Travers, 2005, p. 88).

1. Servicio de vigilancia completa (FSP, según sus siglas en inglés) (Ver Figura 2)

Bajo FSP, la policía prevendrá y controlará directamente los delitos tomando cinco iniciativas antidelito simultáneas para eliminarlos (o al menos minimizarlos), los *Motivos* (o deseos/ intenciones), los *Medios* (o capacidades / habilidades) y las *Oportunidades* (o accesos) para cometer un delito. Estas iniciativas son las siguientes:

(i) Prevención de delitos: Incluye la participación de la policía con la comunidad, con el propósito de prevenir, eliminar las magnitudes de los motivos, medios y oportunidades para cometer los delitos, ¿Cómo prevenir?

1. Fomentar acuerdos extra judiciales de disputas entre vecinos
2. Campañas contra la tenencia ilegal de armas
3. Regular y controlar la tenencia de armas con licencia y de otras armas mortales
4. Campaña de concienciación para la prevención del delito que incluya el cumplimiento de la Semana Nacional de Prevención del

Delito

5. Instalar luces a la noche y despejar áreas con probabilidad de delitos

(ii) Supresión de delitos

La eliminación de delitos se funda en el principio fundamental de que un delito sólo sucederá si convergen tres (3) componentes relacionados

1. Motivos
2. Medios y
3. Oportunidades

Estos tres en el mismo lugar y al mismo tiempo. Este trabajo lo realiza la policía con la comunidad de la siguiente manera:

1. La realización de patrullas con móviles o a pie,
2. Policías encubiertos en autobuses de pasajeros y jeepneys (medios de transporte público en Filipinas) en áreas potencialmente peligrosas,
3. Instalar puntos de control móviles en dichas áreas y muchos ejemplos más.

Por parte de los ciudadanos, especialmente aquellos con mayor riesgo de convertirse en víctimas, se iniciarán medidas de seguridad tanto activa como pasiva que incluyen la resistencia y la defensa propia.

(iii) Intervención de delitos

La intervención de delitos consiste en medidas y esfuerzos por parte de la policía, con la participación y apoyo de la comunidad, para detectar y responder ante actos delictivos lo antes posible, incluso mientras se están llevando a cabo, para minimizar el daño potencial a la vida, a la integridad física o a la propiedad (Shaw & Travers, 2005, p.88).

Es bueno detener al autor/es del delito en el acto del crimen en base a “flagrante delicto”¹⁶. La garantía y el éxito de esta iniciativa penderán de la capacidad de la comunidad para que llame a la policía de inmediato y que éstos puedan

¹⁶ Shaw, M., & Travers, K. (25 de abril de 2005). *Estrategias y mejores prácticas en prevención del delito con relación a áreas urbanas y juventud en riesgo*. Obtenido de http://www.academia.edu/22668476/Bangkok_Tailandia_18-25_de_abril_de_2005

responder esos llamados, así como también del sentido de obligación civil de la comunidad. Las víctimas potenciales, pueden activar y utilizar eficientemente las medidas de defensa propia que los han preparado para esta eventualidad. Ellos también deberían conocer y poder poner en práctica las doctrinas de detención de ciudadanos, de defensa propia y de defensa de un extraño (Shaw & Travers, 2005, p.89)

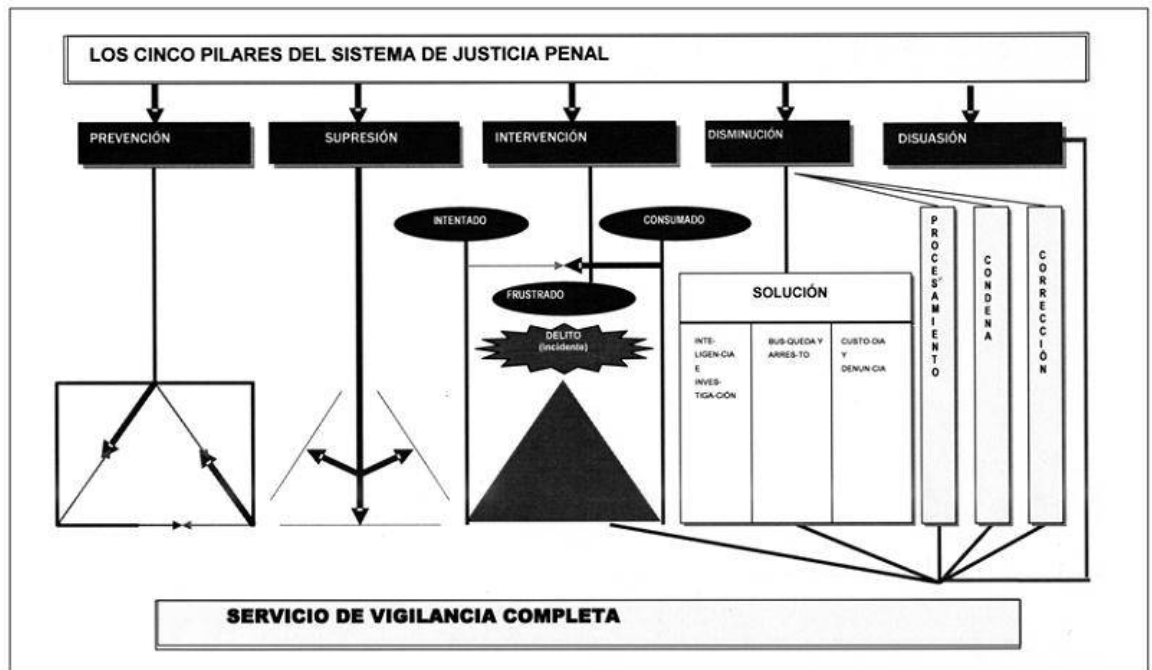


Figura 2. Los cinco pilares del sistema de justicia penal
Fuente: (Shaw & Travers, 2005, p.89).

(iv) Disminución de delitos

La disminución del delito incluye todas las medidas y esfuerzos por parte de la policía, con la participación y el apoyo de la comunidad, para identificar, arrestar, perseguir y aislar a los delincuentes, “incluyendo a los fugitivos, del resto de la sociedad para evitar que cometan otros delitos y/o que sufran represalias por parte de sus víctimas o de los seres queridos de las víctimas. “Es en esta iniciativa donde la policía y los ciudadanos interactúan y colaboran con los demás pilares del Sistema de Justicia Penal para el procesamiento, condena y rehabilitación de los delincuentes para que puedan ser ciudadanos aptos y cumplidores de la ley una vez que se reintegren a la sociedad. Los miembros de la comunidad deberían saber cómo observar y describir lo que vieron cuando son testigos de un delito, para poder así cumplir mejor la función

como ojos y oídos de la policía. También deben saber cómo preservar la escena del delito y manejar las pruebas y ayudar en la protección y apoyo de las víctimas y de los testigos, etc” (Shaw & Travers, 2005, p.89).

(v) Disuasión del delito

Shaw & Travers (2005) manifiestan lo siguiente

La disuasión del delito reside en discretas y voluntades adicionales por parte de la policía, con la colaboración y apoyo de la colectividad y de todos los demás pilares del Sistema de Justicia Penal, para experimentar convincentemente que “el delito no vale la pena” y disuadir así a delincuentes potenciales, obligándolos a cesar y a desistir sobre cometer un delito. La efectividad de esta iniciativa depende de la capacidad y eficiencia de todo el Sistema de Justicia Penal.

Esta decisión debe ser triunfante con el cometido efectivo y eficiente de la policía en la Mediación del Delito y en las Decisiones de Disminución de Delitos, llevando a la condena segura y expeditiva de casi todos, o tal vez todos, los malhechores culpables. Conjuntamente, el éxito y la certeza de esta iniciativa dependen de la voluntad y la intrepidez de casi todas, o tal vez todas, las víctimas y los testigos para exteriorizar e iniciar una demanda con los cargos apropiados en tribunales, hasta lograr la condena de casi todos, o todos, los delincuentes culpables” (Shaw & Travers, 2005, p.89).

2. Resolución de problemas (Figura 3)

Según Shaw & Travers (2005) indican que:

Bajo el Mecanismo para la Resolución de Problemas (PS, según sus siglas en inglés), la policía debe identificar o predecir, estudiar y abordar los problemas que han sido reconocidos como las fuentes principales y los contextos identificados como áreas de reproducción del delito, con la colaboración y el soporte de la colectividad, incluyendo agencias del gobierno nacional, unidades gubernamentales locales y organizaciones no gubernamentales.

Esto compone la Campaña para la Prevención del Delito de la policía, a través de la iniciación del desarrollo orientado a proyectos y actividades que abordan problemas que causan o fomentan el delito en la comunidad.

Según Shaw & Travers (2005) “El Sistema de Vigilancia Ciudadana (COPS, según sus siglas en inglés) debe priorizar y concentrarse en los problemas que han sido identificados como prioridades por la comunidad para la cual se está trabajando”. “Ciertos problemas comunes que se encuentran en muchas comunidades incluyen la pobreza, el abuso y la injusticia, la ignorancia, la pérdida de los valores familiares, las familias desunidas, los problemas relacionados con la debilidad del estado como la corrupción y el incumplimiento de las leyes, sensación de miedo o inseguridad, dependencia a las drogas o al alcohol, etc” (Shaw & Travers, 2005, p.90).

“Individualmente, las voluntades para la resolución de problemas bajo COPS también reside en el progreso de proyectos y actividades orientados bajo el Desarrollo Económico / Sustento, Renovación Moral / Espiritual Educación e Información Pública” (Shaw & Travers, 2005, p.90), “la Prevención del Delito a través del Desarrollo Social, Buen Gobierno, Prevención del Delito por medio del Diseño Ambiental, Anti-abuso de Drogas / Sustancias y otros Programas contenidos en NACS”(Shaw & Travers, 2005, p.90).

Este dispositivo esencial es agregado y de apoyo al Servicio de Vigilancia Completa (FSP, según sus siglas en inglés). “Cuanto más problemas sean afrontados y resueltos, o al menos atenuados bajo la resolución de problemas, habrá menos delitos y menos trabajo para el Servicio de Vigilancia Completa y viceversa” (Shaw & Travers, 2005, p.90).

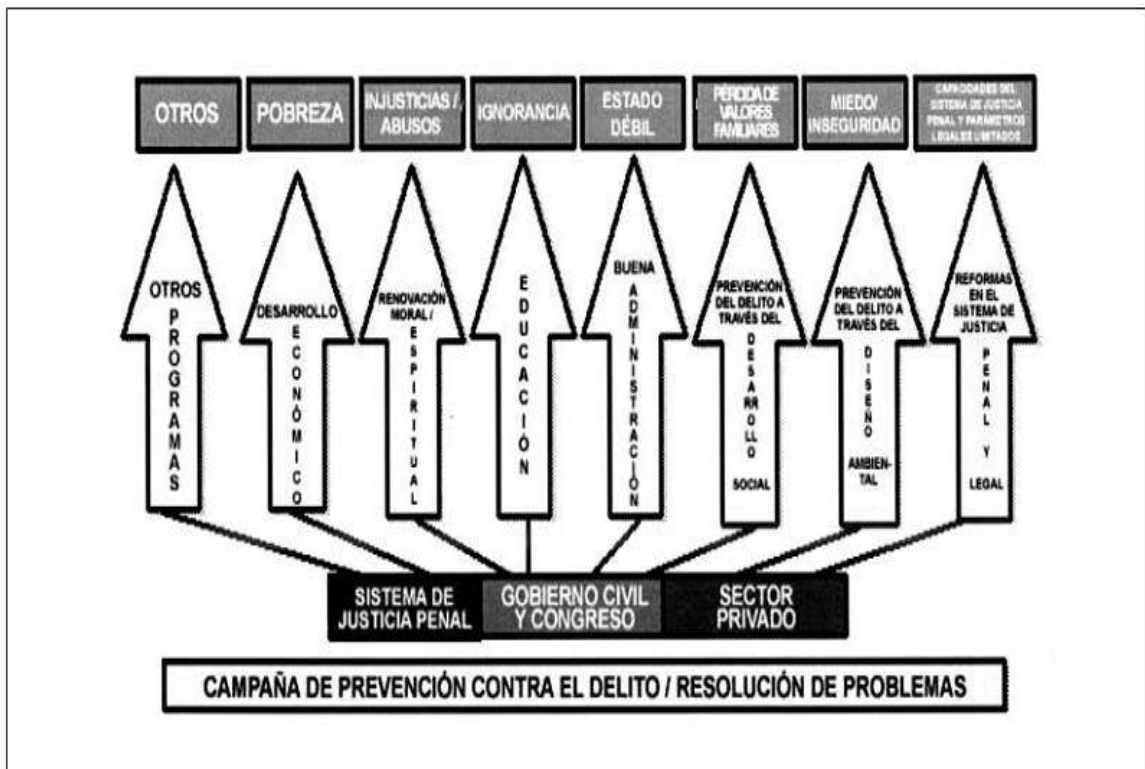


Figura 3. Resolución de problemas

Fuente: (Shaw & Travers, 2005, p.90).

3. Sociedad Ciudadana (Ver Figura 4)

Para Shaw & Travers “El éxito y la efectividad de la policía en la implementación del Servicio de Vigilancia Completa y de la Resolución de Problemas dependerán principalmente de su colaboración con la comunidad”. “Asediados por la permanente falta de recursos y de capacidad, la policía apenas podía lidiar las formas de vigilancia mayormente reactivas o tradicionales, ¿cuánto más podrá abarcar con la inclusión de FSP y PS? El desarrollo de Sociedades Ciudadanas (CP, según sus siglas en inglés) es la solución para la falta de recursos y de capacidad de la policía. Bajo este componente, la policía deberá realizar una Campaña antidelito / dar facultades al pueblo para motivar, iluminar, organizar y movilizar la mayor cantidad de ciudadanos posibles. “Los ciudadanos movilizados estarán intervenidos por la policía, como sus Multiplicadores de Fuerza, para aumentar su capacidad de voluntarios o Multiplicadores de Recursos” (Shaw & Travers, 2005, p.90).



Figura 4. Sociedad Ciudadana
Fuente: (Shaw & Travers, 2005, p.91)

Estructura de la Unidad Policial COPS (Ver Figura 5)

En el cuadro que se encuentra a continuación, se ve la estructura organizacional de una Estación de Policía COPS típica o promedio. Sólo aquellos relacionados con COPS están destacados de la siguiente manera:

1. Jefe de policía - dirige / controla la estación de policía
2. Operaciones/Centro 117 - instalación de la estación de policía en donde se dirigen y controlan sus unidades subordinadas y sus grupos operativos de apoyo. Tiene una función doble como centro de llamados/envío para recibir y atender todos los llamados del público que requieran la acción o asistencia policial.
3. Grupos Operativos de Apoyo - la estación de policía tiene cuatro Grupos Operativos de Apoyo:
 - (i) Patrullas móviles/Grupos de respuesta rápida (MP/ QRG, según sus siglas en inglés) Su fortaleza es que al menos un equipo cuenta

con un móvil o jeep de patrulla con una radio conectada al Centro de Operaciones/Centro 117. MP/QRG puede realizar Operaciones de Intervención, Eliminación de Bombas y Explosivos, Rescate y Negociación de Rehenes, Combate en Áreas Reducidas y Operaciones de Patrulla/Persecución, entre otras.

(ii) Grupo de Inteligencia e Investigación (IIG, según sus siglas en inglés) - Su fortaleza es su personal, el cual suma cinco miembros incluyendo al Jefe del Grupo, dos investigadores y dos oficiales de inteligencia. Están equipados con equipos básicos de investigación e inteligencia, así como también con al menos una motocicleta con una radio portátil.

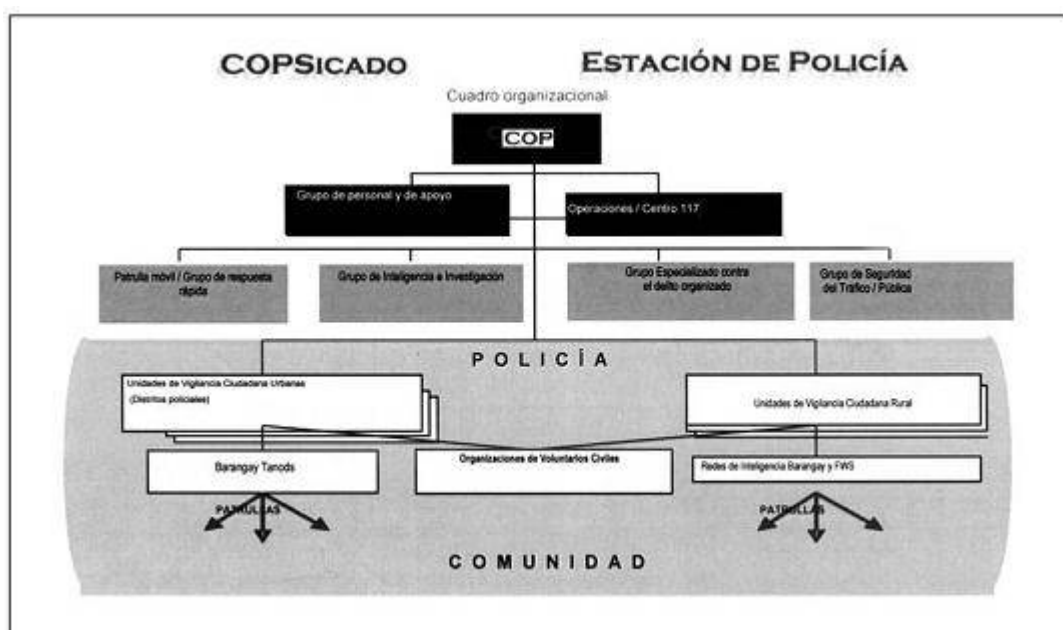


Figura 5. Estructura de la Unidad Policial

Fuente: (Shaw & Travers, 2005, p. 92)

(iii) Grupo de Operaciones Especiales/Contra el Delito Organizado (AOC / SOG, según sus siglas en inglés) - Su fortaleza depende de la naturaleza y el número de delitos organizados y de Operaciones Especiales realizadas con regularidad. Los delitos más comunes

relacionados con grupos delictivos organizados son drogas, secuestros para cobrar rescate, robo de automóviles, tráfico de armas, contrabando, robo de ganado, pesca ilegal, tala indiscriminada de árboles, juego ilegal, reclutamiento ilegal, retención o secuestro de aviones/autobuses-jeepneys, y robo de bancos. Mínimamente, debería haber especialistas/ policías encubiertos en las áreas mayor afectadas por el delito organizado en el Área de Responsabilidad (AOR, según sus siglas en inglés). AOC / SOG debe estar equipado con al menos una motocicleta con una radio portátil.

(iv) Grupo de Seguridad del Tráfico/Público (T/PSG, según sus siglas en inglés) - Su fortaleza depende del volumen del tráfico, accidentes, peligros y desastres en la localidad. T/PSG está equipado con al menos una motocicleta, o preferentemente un automóvil y un camión grúa/remolque.

4. Unidades de Vigilancia Ciudadana (CPUs, según sus siglas en inglés)
- La estación de policía tiene ocho CPUs, divididos en las siguientes categorías: (Shaw & Travers, 2005, p.92-93).

(i) CPUs urbanos - existen dos CPUs urbanos, ubicados dentro de la ciudad/localidad. Sus mínimas áreas de responsabilidad tienen una superficie pequeña pero están densamente pobladas. Cada CPU urbano está equipado con al menos dos bicicletas, un teléfono, dos radios portátiles y una radio de base en el Centro CPU que está conectada al Centro

Operaciones/117 y a la Patrulla Móvil/Grupos de respuesta rápida. Cuentan con el apoyo de *barangay tanods* para realizar rondas de patrullas y también cuentan con el apoyo de las Redes de Inteligencia de Barangay (BINs, según sus siglas en inglés).

ii) CPUs rurales - existen seis CPUs rurales, ubicados afuera de la

ciudad/localidad. Sus mínimas áreas de responsabilidad son grandes en extensión, generalmente formadas por grupos de *barangays* (pueblos); pero están muy poco pobladas. Cada CPU Rural está equipado con una motocicleta o un caballo, un teléfono si es que se encuentra disponible, una radio portátil y una radio de base en el Centro CPU que está conectada al Centro de Operaciones/117 y a los Grupos de respuesta rápida. Cuentan con el apoyo de Organizaciones de Voluntarios Civiles (CVOs, según sus siglas en inglés) para realizar *rondas barangay* o patrullas. También cuentan con el apoyo de las Redes de Inteligencia de Barangay (BINs, según sus siglas en inglés).

1.4. Conclusiones:

Basado en los aportes de Ciuro (2011), el cual manifiesta que las Estrategias Jurídico sociales están constituidas por tres dimensiones las cuales son: Dimensión sociológica, Dimensión Normológica y Dimensión dikeológica, la primera ayuda a desenmascarar la realidad existente debajo de las leyes, reglamentos o normas, cuyos grupos de interés solo desarrollan normatividades para sus intereses, La dimensión sociológica del mundo jurídico está compuesta de adjudicaciones de potencia e impotencia y estas beneficia o lesiona al ser y de modo especial a la vida, en resumen las estrategias jurídico sociales desde el punto de vista de la Dimensión sociológica presentan normas para intereses ocultos que perjudican o benefician al ser y su vida. Con respecto a la dimensión Normológica, la norma debe ser de captación lógica de un reparto proyectado hecho desde el punto de vista de un tercero, en otras palabras de un neutral, esta dimensión implica la integración, mediante la cual la norma determina los alcances de la realidad y le incorpora sentidos que ésta en sí no tiene, es satisfactoria para la comunidad, región y país. Ahora veamos la dimensión dikeológica, la cual trabaja con la realidad social y las normas a las valoraciones de un complejo de valores que culmina en la justicia, en donde tiene en cuenta la utilidad, el amor, la verdad, la belleza y la santidad. En resumen esta dimensión desarrolla

normas basado en la realidad de la sociedad o la comunidad y los valores.

Finalmente las estrategias jurídico sociales son un compendio de normativas, directrices, reglas, costumbres o leyes que trabajan en torno a dos aspectos fundamentales como son la realidad de un país o una sociedad y sus valores.

Las presentes terminaciones se basan en el desarrollo de dos casos exitosos en el mundo como son las ciudades de Dar es Salaam y Filipinas, a continuación describo cada una de ellas:

La Ciudad Dar es Salaam, hoy en día es una de las ciudades más seguras del mundo, gracias a su “Programa de Ciudades Sostenibles”, la cual reúne a todas las partes involucradas para desarrollar estrategias de prevención del delito. Entre las estrategias desarrolladas están: **Primero:** Seminarios y Talleres de sensibilización, donde el Ministerio Público convoca a todas las instancias como universidades, instituciones públicas, privadas, colegios y comunidad. **Segundo:** Cumplimiento de la ley y los estatutos: Policía Auxiliar de la Ciudad y Tribunales de Distrito La Policía Auxiliar, con el establecimiento de policías auxiliares quienes trabajan coordinadamente con los Tribunales de Distrito que se encuentran inmersos en las comunidades o barrios, iniciando las acciones de prevención contra el delito logrando mejorar la seguridad, reforzamiento del cumplimiento de las leyes y el refuerzo de la vigilancia comunitaria. **Tercero:** Auditorías de seguridad para mujeres, se ha llegado a la conclusión que la pobreza a menudo se relaciona con la delincuencia, y esto porque los ciudadanos pobres tienen necesidad de sobrevivir, es por ello que para las mujeres se ha establecido un sistema de protección en donde además de la seguridad se le brinda o hace partícipe de la **Cuarta Estrategia** como es el Proyecto de Generación de ingresos, teniendo en cuenta que pertenecen a una población vulnerable y son más propensas a ser víctimas del delito como es la violencia doméstica o familiar el cual puede terminar en feminicidio. Gracias a este proyecto las mujeres dejan de ser

dependientes de sus esposos o parejas económicamente y se vuelven autosuficientes.

La ciudad de Filipinas, un país como el nuestro en vías de desarrollo, donde la pobreza reina y luego de salir en la década del 80 de un gobierno dictador, paso a un gobierno democrático, tuvo la oportunidad de participar en un programa especial organizado por la ONU.

La estrategia empleada por Filipinas se llama COPS (Prácticas óptimas y punto de vista concluyente), la cual se basa en la Estrategia Nacional Antidelito (NACS, según sus siglas en inglés), organizada por la ONU. A continuación describo brevemente las estrategias jurídicas sociales:

Esta estrategia se basa en los siguientes principios: Interdependencia de Paz y Desarrollo; Responsabilidad compartida para la vigilancia; Indispensabilidad del poder del pueblo en la lucha contra el delito. Asimismo tiene 3 componentes claves que son: Servicio de vigilancia completa; Resolución de problemas; Sociedad ciudadana.

Estrategia 1: Servicio de vigilancia completa: la policía prevendrá y controlará directamente los delitos tomando cinco iniciativas: Prevención del delito, supresión del delito, intervención del delito, Disminución de delitos y Disuasión del delito. Para lograr estos 5 trabajos policiales es necesario el trabajo coordinado con la comunidad o la colectividad, el sistema penal judicial y todo un trabajo coordinado en equipo como son instituciones o entidades ya sean privadas o públicas que contribuyen día a día a prevenir los delitos.

Estrategia 2: Resolución de problemas, esta estrategia social está orientada a fortalecer la estrategia 1 que es netamente jurídica, en esta táctica se solucionan problemas sociales como pobreza, injusticias y abusos, pérdida de valores familiares, miedo, inseguridad, capacidades del sistema de justicia penal.

Estrategia 3: Sociedad ciudadana: Anteriormente se comentó la estrategia servicio de seguridad ciudadana, pues esta no tendría éxito si los policías trabajan solos, pues depende mucho de la participación ciudadana, una de las debilidades de la policía son los recursos y la capacidad, para ello la policía utiliza a los ciudadanos como sus multiplicadores, creando o generando una red con una cobertura que ocupa y alcanza a toda la colectividad urbana, en otras palabras se hace uso de policías ciudadanos voluntarios, estrategia similar a la policía auxiliar empleada en la Ciudad Dar Es Salaam.

Es importante destacar que las ciudades de Filipinas y Dar es Salaam, al igual que otras ciudades del mundo, como por ejemplo las ciudades del Perú, sufren de pobreza, poblaciones vulnerables como mujeres, niños y ancianos en estado de pobreza, desempleo, falta de oportunidad, falta de apoyo por parte del gobierno central.

En Resumen las autoridades de Filipinas y Dar es Salaam se han dado cuenta que la mayor fuerza de poder para poder combatir la criminalidad está en el Pueblo, y para ello tienen que trabajar con policías auxiliares quienes representan los multiplicadores de los policías del estado a falta de recursos y capacidad, a ello se suma el desarrollo de solución de problemas como la pobreza, desempleo, obras sociales como agua, saneamiento generando puestos de trabajo, un sistema especial de protección y sobrevivencia para las mujeres y un activo Ministerio Público y Sistema Penal que interactúan constantemente con la policía y la comunidad.

PARTE II

CAPÍTULO II: FEMINICIDIO

Este segundo capítulo desarrolla la segunda variable de la investigación como es el Femicidio, un delito que cada vez cobra más víctimas no solo en nuestro país, sino en el mundo, situación que el Derecho Penal como ciencia no ha podido tener eficiencia y eficacia para reducir los índices de criminalidad con respecto al delito de Femicidio, recordemos que la finalidad del derecho penal es el castigo de los delitos, mediante las penas, esta teoría está quedando sin efecto, al existir cada vez más asesinatos y más corrupción. El nuevo derecho penal debe tener como objetivo principal la prevención, disuasión y disminución del delito, bajo un sistema político integrador entre el estado y la comunidad. Cuando funcione de esa manera, el delito disminuirá.

La exposición de este capítulo está basada en los aportes de (Mascassi Leon, 2005), quien desarrolla un marco teórico acerca de la violencia contra la mujer y resume que el feminicidio es una acción humana cuyo móvil responde a una racionalidad colectiva que discrimina a la mujer, asimismo se describen los diferentes tipos de homicidio estipulado en nuestro Código Penal.

Continuando con el desarrollo del feminicidio se hace un resumen histórico del avance de este delito a través de los años, presentando cifras como edades de las víctimas, relación del agresor con la víctima, ámbito de la agresión, modalidades de inhabilitar a la víctima para luego ser atacada y los medios que se utilizó para asesinar a la víctima, toda esta información brindada por el especialista CMP Flora Tristán haciendo siempre la aclaración para evitar acusaciones de plagio en el presente o futuro de esta indagación. Luego pasamos a las cuestiones de feminicidio en nuestro país, una descripción desde el 2015 al 2016, como se ha venido desempeñando esta actividad delictiva, en donde en resumidas cuentas, las víctimas cada vez son más atacadas con mayor ferocidad, veamos entonces la descripción de este interesante capítulo.

2.1. Definición de Femicidio.

El feminicidio es el asesinato de mujeres por parte de un hombre, en razón de

su sexo.

A. Garita (2013), la primera persona que utilizó el término “femicide” directamente vinculado a la violencia de género fue Diana Russell en 1976 ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres. Desde entonces, su contenido y alcance ha variado. La propia Diana Russell, lo definió inicialmente junto con Jane Caputi como el “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer” (A. Garita, 2013, p.15).

Garita traduce el término *femicide* a *feminicidio*, ya que en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de mujeres. Señalando además que las autoras Diana Russell y Jane Caputi definen al femicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios” Se aprecia entonces que la palabra Feminicidio hace referencia al asesinato de mujeres con referencia para todas las legislaciones y países del mundo. (Ana Garita 2013, p. 16).

Cómo es citado por El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú define el Feminicidio cómo: “El asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por el solo hecho de ser mujeres y que tiene como base la discriminación de género. En realidad, debe ser visto como el último capítulo en la vida de muchas mujeres, marcada por un "continuum de violencia y terror" (Defensoría del Pueblo, 2010). A menudo los medios presentan el asesinato de mujeres como "crímenes pasionales" lo que desvirtúa su carácter y que contribuye a reforzar los estereotipos que ubican a las mujeres en una posición de subordinación y desvalorización frente a los varones.

Lagarde Marcela (cómo lo citó Joshua Calderón), Redefine el término a FEMINICIDIO y levanta el concepto de Impunidad. Incorpora la violencia institucional. Legarde apunta a que el Estado tiene responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de sanciones y castigos a los asesinos coloca al Estado como responsable por acción u

omisión del feminicidio y este tiene que asumir su complicidad o responsabilidad directa. (Joshua Calderón, 2009, pág. 5).

Carcedo Ana Femicidio: Es toda muerte derivada de la subordinación femenina, involucra homicidios como suicidios originados en la violencia o discriminación así como las acciones u omisiones que provocan la muerte (Calderón, 2009, pág. 6).

2.2. Clases de femicidio/feminicidio: tipologías existentes

Pastilí Toledo (2009, pág. 32-33) presenta las siguientes tipologías:

Feminicidio Íntimo Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, de convivencia, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciones laborales, de vecindad, ocasional, circunstancial o afines a éstas.

Feminicidio Familiar Íntimo Es la privación dolosa de la vida de una mujer cometida por su cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en línea recta o colateral hasta en cuarto grado, hermana, concubina, adoptada o adoptante, o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, sabiendo el delincuente esta relación.

Feminicidio Infantil Es la privación dolosa de la vida cometida en contra de niñas menores de edad [sic] o que no tengan la capacidad mental, ya sea hija descendiente o colateral hasta en cuarto grado, hermana, adoptada, que tenga alguna relación afectiva o de cuidado sabiendo el delincuente esta relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la menor¹⁷.

Feminicidio sexual sistémico: Es el asesinato codificado de niñas y

¹⁷ Monárrez, J. (1993-1999). *La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez*. Juárez: Frontera Norte Núm 23 vol 12.

mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda, a través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicidades (Monárrez, 1993-1999).

Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas: Si bien las mujeres son asesinadas por ser mujeres, como nos (...) explica la Dra. Monárrez, hay otras que son asesinadas por la ocupación o el trabajo que desempeñan¹⁸. Ellas son bailarinas, meseras o trabajadoras sexuales. Aunque son agredidas porque son mujeres, lo que las hace aún más vulnerables es la ocupación desautorizada que desempeñan (Monárrez, 1993-1999)

2.3. Elementos del tipo de feminicidio

2.3.1. Bien jurídico protegido.

El bien jurídico protegido en el que recae la acción en el delito de feminicidio es la “vida humana” específicamente la de la mujer por su condición de tal.

2.3.2. Acción típica

El feminicidio, es una acción dolosa, es decir, debe concretarse necesariamente el resultado muerte, caso contrario, de no producirse ésta sería ajena a la acción típica.

2.3.3. Sujeto activo

Conforme se describe en el tipo, en éste delito el sujeto activo en su generalidad es un varón;

¹⁸ Monárrez, J. (1993-1999). *La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez*. Juárez: Frontera Norte Núm 23 vol 12.

2.3.4. Sujeto pasivo

En el delito de feminicidio el sujeto pasivo es una mujer.

2.3.4. Tipo Penal

En nuestro ordenamiento jurídico existen una serie de tipos Penales, siendo específicamente establecido el delito de feminicidio desde el 18 de julio del 2013, con la Ley N° 30068 (Ley que incorpora el artículo 108-B al Código Penal y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio) posteriormente, se realizan varias modificatorias, siendo la descripción típica actual la siguiente:

“Artículo 108-B.- Feminicidio

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

- 1. Violencia familiar;*
- 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;*
- 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente;*
- 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.*

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

- 1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.*
- 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.*
- 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.*
- 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.*

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad.

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o **cualquier tipo de explotación humana.**

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.

8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado.

La pena será de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes.

En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme al artículo 36.” (negrita agregada)

Los tipos penales, antes de la incorporación específica del delito de feminicidio se contemplaba y caracterizaba dicha figura en los atentados contra la vida de las personas; en este sentido las cuestiones de feminicidios podían inscribirse en los siguientes tipos: HOMICIDIO SIMPLE (Art. 106 del Código Penal CP). - Se Configura este delito cuando alguien mata a otra persona, tiene por tanto que existir dolo o intención por parte del agresor de causar la muerte de la víctima. Tiene una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 20 años. · PARRICIDIO (Art. 107º del CP). - Se configura cuando el agresor sabe que está matando a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o su cónyuge o concubino. Se sanciona con pena privativa de libertad no menor de quince años. · HOMICIDIO CALIFICADO-ASESINATO (Art. 108 del CP). - Es aquel homicidio que se da dentro de cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Por ferocidad, por lucro o por placer.
2. Para facilitar u ocultar otro delito.
3. Con gran crueldad o alevosía, lo que implica actuar sobre seguro

para producir un daño.

4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.

Todas tienen una pena privativa de libertad no menor de 15 años. HOMICIDIO POR EMOCIÓN VIOLENTA (Art. 109 Del CP.). - En este caso, el que mata lo hace porque se haya bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable. Tiene Una pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de cinco años. Existe una perjudicial que se da cuando concurre el parricidio, teniendo entonces pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años. (Mascassi Leon, 2005).

Obstáculos en la penalización y correcta sanción de los crímenes contra las mujeres: el denominado homicidio por emoción violenta. Como se ha señalado anteriormente, el artículo 109 del Código Penal peruano contempla el tipo penal “Homicidio por emoción violenta”. ¿Qué implica el término “emoción violenta”? En la práctica esta figura penal es utilizada por los agresores como defensa, constituyéndose en un atenuante a su acción y disminuyendo –de esta forma y considerablemente– la sanción penal. La “emoción violenta” es una excusa, la cual se argumenta mediante la ocurrencia temporal de un hecho psíquico y de orden afectivo que trastorna momentáneamente el equilibrio psicofísico de un individuo. Según esta noción, la consecuencia principal es el relajamiento de los límites sociales internalizados por las personas durante su vida; por lo mismo, el principio y valor ético universal que reconoce la prohibición a matar se ve ofuscado por el trastorno en la estructura psíquica del individuo. De esta forma se argumenta y excusa un comportamiento destructivo. Las circunstancias que se consideran excusables son: honor ultrajado, agravio y ofensa no justificada. Estas circunstancias son riesgosas para lograr obtener una sanción severa en los cuestiones de feminicidio, pues mantienen una cultura de superioridad masculina que reafirma estereotipos de género y que sustentan la idea de autoridad y dominio sobre la mujer, subordinándola y exponiéndola a un clima de

violencia, ante la negación de libertades y autoafirmación femenina (Mascassi, León, 2005, p.20)

2.4. Estadísticas de sobre el feminicidio en el Perú.

El feminicidio es un término que intenta inscribirse en el discurso criminalística para evidenciar acciones humanas cuyos móviles responden a una racionalidad colectiva que discrimina y valora a la mujer como objeto de “uso” y “abuso”; y no como sujeto semejante y digno de ejercer sus derechos (Mascassi, 2005, p.20)

Se forma como un crimen de características específicas. No tiene actores ni coyunturas determinadas estrictamente; es decir, que no existe un perfil único de víctima. Todas las mujeres, sin importar edad ni nivel socioeconómico, están expuestas a esta violencia; la cual se inscribe en un contexto cultural de discriminación y violencia contra la mujer. Sin embargo, los datos señalan un mayor riesgo en mujeres en edad reproductiva. El 58% de víctimas se encontraba entre los 17 y 34 años de edad. En tanto que el 17% tiene entre 35 y 52 años, mientras que un 10% está entre los 53 y 70 años de edad (Mascassi, 2005, p.21).



Figura 6. Edad de las víctimas

Para el análisis de lo encontrado, empezaremos mostrando los gráficos con la información correspondiente y a continuación haremos una reseña analítica de los datos (Mascassi, 2005, p.21).

2.4.1. Relación del agresor con la víctima

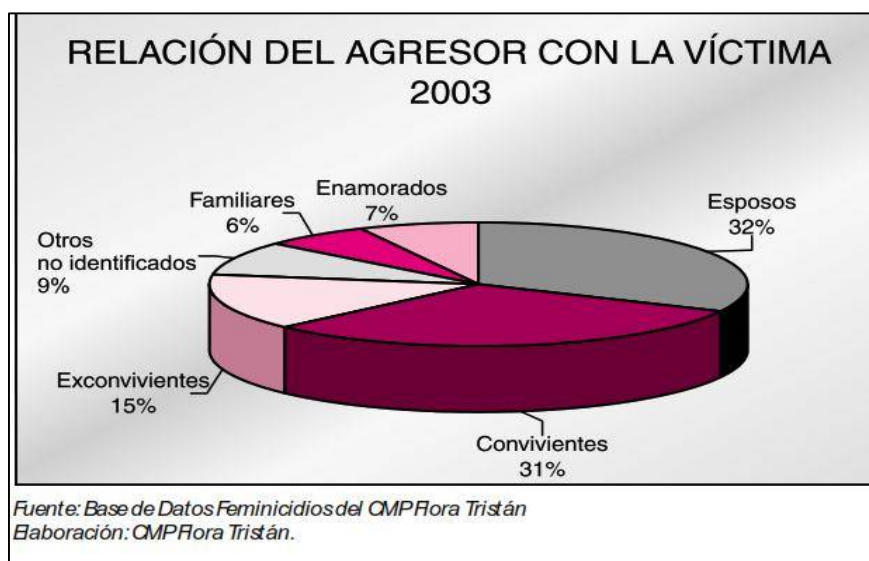


Figura 7. Relación de agresor con la víctima - 2003



Figura 8. Relación de agresor con la víctima - 2003



*Fuente: Base de Datos Feminicidios del OMP Flora Tristán.
Elaboración: OMP Flora Tristán.*

Es importante resaltar, que estas cifras pueden incrementarse debido a que muchas cuestiones no llegan a conocerse por la opinión pública ni llegan a las autoridades. Las brechas Sociales de nuestro país han determinado que en bastantes lugares –especialmente en el ámbito rural– no haya cobertura de los medios de comunicación ni acceso a servicios de justicia; por lo que numerosos cuestiones podrían no estar siendo denunciados y, por tanto, nunca ser esclarecidos. En promedio, sólo en el 12% de cuestiones el agresor era una persona desconocida al entorno de la víctima. Esto significa que la mayor parte de los agresores eran conocidos de la agredida y, de hecho, mantenían relaciones sentimentales con ella. Así, para los años 2003 a 2005, el 70%, 68% y 56% de agresores, correlativamente, fueron los esposos, parejas sentimentales o convivientes de las víctimas. “En promedio, más del 64% de víctimas en el momento de la agresión mantenía una relación sentimental-afectiva o íntima con su agresor”. (Mascassi, 2005, p.23)

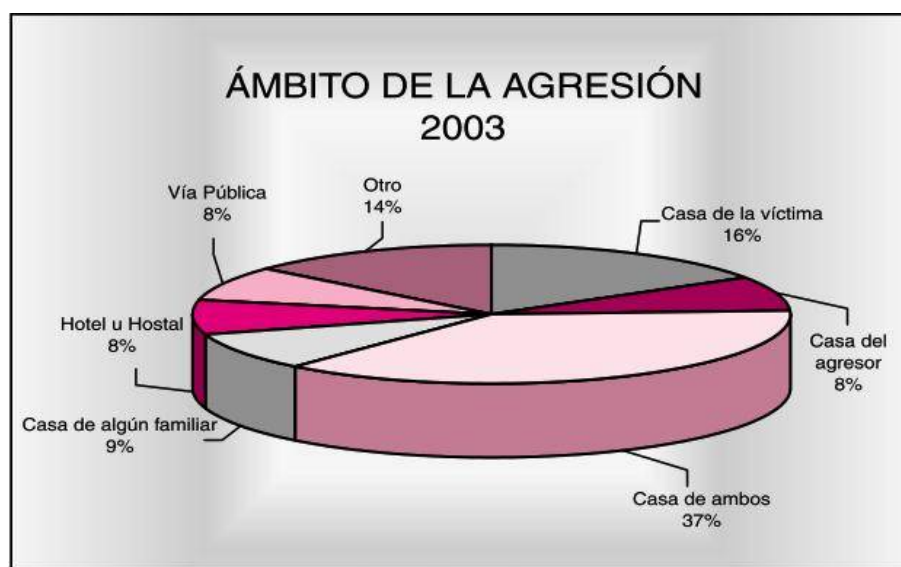
Por otra parte, se advierte cierto incremento en este factor de contacto estrecho entre víctima y victimario. “Para los años 2003 y 2004, el 15% de agresores mantuvo en algún momento una relación íntima de convivencia con la víctima; mientras que, en el 2005, este porcentaje se elevó a 17%”. “Asimismo, en los tres años, el 6%, 7% y 10% de los agresores, correlativamente, mantenía una relación familiar con la víctima: fueron sus

padres, hermanos, tíos, primos e hijos. En la totalidad de cuestiones, el promedio de mujeres que conocía a su agresor asciende al 88%” (Mascassi Leon, 2005). “Estando contemplado en esto los esposos, parejas sentimentales, convivientes, ex convivientes y familiares” (Mascassi, 2005, p.23)

Para Mascassi, por lo tanto, la gran mayoría de crímenes fueron realizados por personas cercanas al entorno social, familiar y afectivo de la víctima; probando ello que la violencia contra la mujer se inscribe dentro de un plano estructural que va construyendo prácticas discriminatorias que se reflejan y reproducen en la cotidianeidad de la vida de las mujeres”. “Finalmente, según datos de 2005, sólo el 20% de agresores se haya detenido” (Mascassi Leon, 2005, pág. 23).

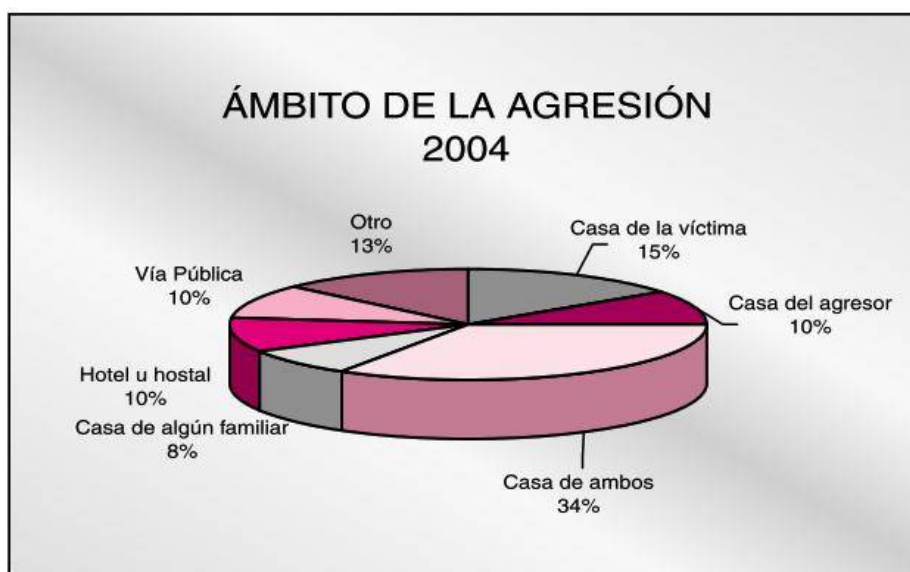
2.4.2. Características de la agresión

En este punto se refieren el ámbito en el que ocurrió la agresión, la forma de inhabilitar a la víctima y el medio utilizado para cometer el crimen.



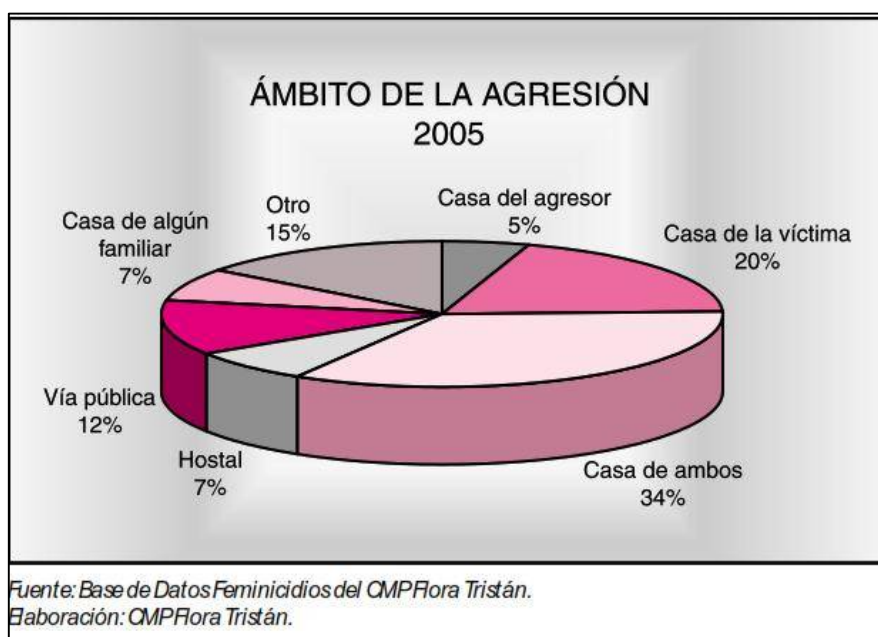
Fuente: Base de Datos Feminicidios del CMP Flora Tristán.
Elaboración: CMP Flora Tristán.

Figura 10. Ámbito de la agresión - 2003



Fuente: Base de Datos Feminicidios del CMP Flora Tristán.
Elaboración: CMP Flora Tristán.

Figura 11. Ámbito de la agresión – 2004



Fuente: Base de Datos Feminicidios del CMP Flora Tristán.
Elaboración: CMP Flora Tristán.

Figura 12. Ámbito de la agresión - 2005

En promedio, el 52% de mujeres víctimas sufrieron la agresión en sus propias casas y un 23% en el domicilio de su agresor”. “Ello nos muestra que los asesinatos fueron cometidos en espacios que comúnmente son significados como espacios físicos y sociales que garantizan la seguridad de las personas y especialmente de las mujeres. Sin embargo, es en estos ámbitos donde la mujer no sólo se haya insegura; sino que, por el

contrario, para un 52% de Ellas es en este espacio donde se desencadena una grave situación de violencia” (Mascassi Leon, 2005, pág. 25).

Son los contextos de discriminación y violencia los que definen estos espacios como de alto riesgo para las mujeres. En efecto, entre 2003 y 2005, el 53%, 49% y 54% de los crímenes, correlativamente, fueron realizados en el lugar donde la víctima residía”. “Por otra parte, el 25% de los crímenes en promedio fue perpetrado en hoteles u hostales; lo cual sugiere la preexistencia de situaciones de índole sexual – consensuadas o forzadas– entre la víctima y el agresor” (Mascassi Leon, 2005, pág. 25).

La clasificación “otro” responde a los cuestiones donde las mujeres fueron encontradas en lugares alejados, abandonadas luego de haberse cometido el crimen y, por lo tanto, no se conoce el ámbito de la agresión. Es ineludible enfatizar que las mujeres hayadas en estos lugares –en su mayoría– presentan Signos terribles de violencia; como golpes, violación, torturas, quemaduras e incluso mutilaciones. Para los tres años se reportan 14%, 13% y 17% de estas situaciones correlativamente (Mascassi Leon, 2005, pág. 25).

Para el año 2005 el 34% de los asesinatos ocurrió en el hogar de la pareja y los agresores fueron los esposos o convivientes. Algunos de los cuestiones de feminicidio fueron presenciados por hijos menores de la pareja, dejando de este modo secuelas psicológicas irreparables. Del total de los cuestiones registrados durante 2005, el 30% de mujeres asesinadas fueron anteriormente víctimas de violencia familiar y recurrieron a las instancias estatales, donde no encontraron una respuesta rápida, adecuada y eficaz al problema”. “Con ello se evidencia que el Estado aún tiene dificultades para brindar una protección adecuada a las mujeres”. (Mascassi Leon, 2005, pág. 25)

Veamos a continuación las formas de inhabilitar a las víctimas.



Figura 13. Modalidades de inhabilitación a la víctima – 2003

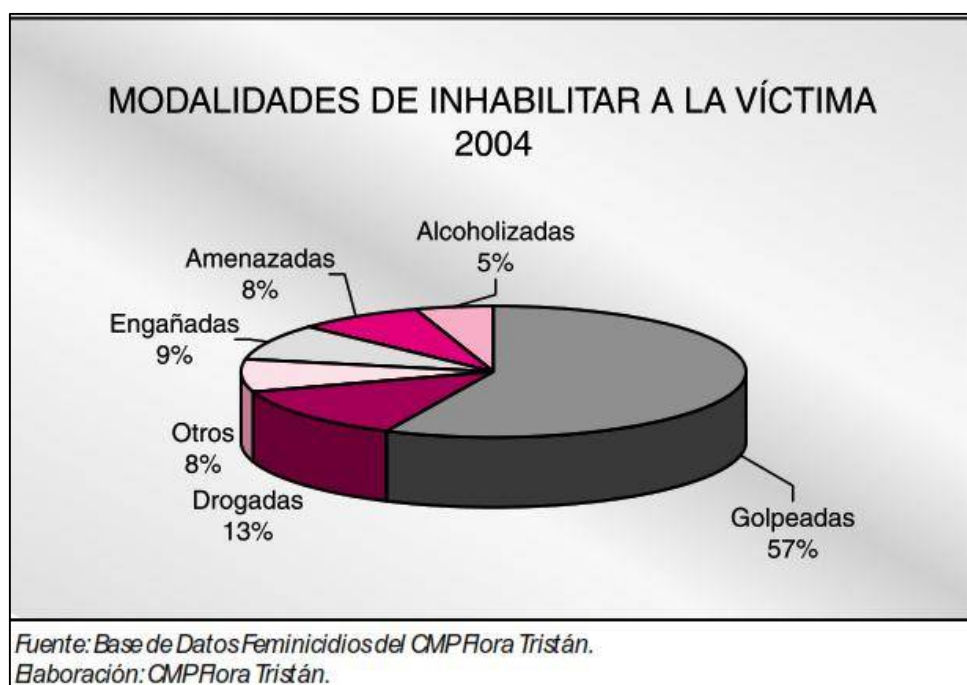


Figura 14. Modalidades de inhabilitación a la víctima – 2004



Figura 15. Inhabilitación a la víctima - 2005

Según la información recabada, más de 57% del total de víctimas de feminicidio sufrió extrema violencia física previamente a su muerte y de esta forma fue inhabilitada. Asimismo, los datos muestran que, como antecedente al fallecimiento, hay una intención de demostrar dominio sobre el cuerpo y la voluntad de la mujer mediante el recurso de la fuerza, el uso de estupefacientes, el engaño, la coacción y la amenaza. Los crímenes de feminicidio se desarrollan no sólo en un clima de violencia y discriminación, sino también de misoginia, la cual se expresa en los asesinatos perpetrados con extrema crueldad”. (Mascassi Leon, 2005, pág. 26)

Veamos a continuación los medios utilizados por los agresores para cometer sus crímenes.

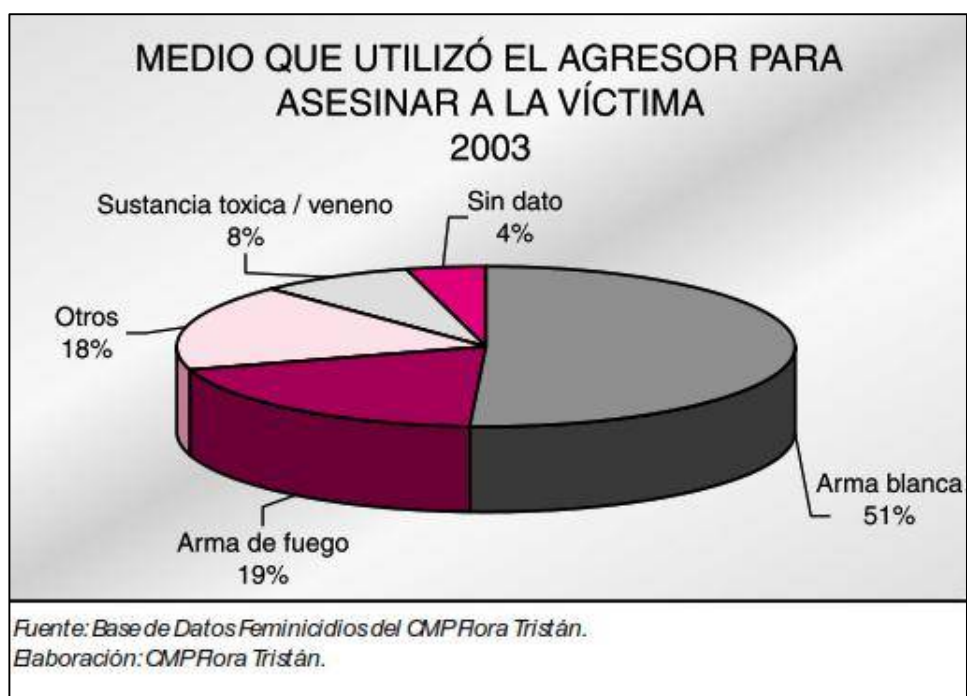
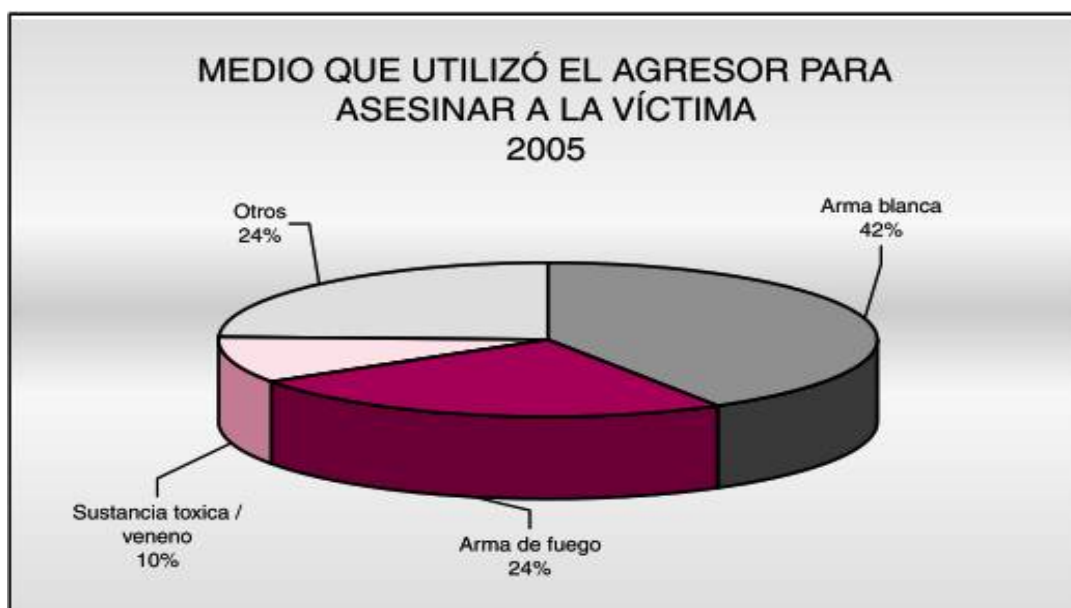


Figura 16. Medio que utilizó el agresor para asesinar a la víctima – 2003



Figura 17. Medio que utilizó el agresor para asesinar a la víctima - 2004



*Fuente: Base de Datos Feminicidios del CMP Flora Tristán.
Elaboración: CMP Flora Tristán.*

Figura 18. Medio que utilizó el agresor para asesinar a la víctima - 2005

Los agresores en muchas cuestiones planifican los asesinatos en complicidad con terceros, lo cual los lleva a elegir qué mecanismo utilizarán para alcanzar su objetivo. Según testimonios de algunos agresores, Ellos usaron un arma que les otorgue seguridad para acabar con la vida de sus víctimas. El poseer un arma les da un valor agregado de poder. En ese sentido, se ha identificado que en los tres años más del 48% de los agresores utilizan cualquier arma blanca para perpetrar su crimen (Mascassi Leon, 2005, pág. 28).

También se evidencia la utilización de otras armas, como el martillo, sin descartar el uso de prendas de la propia víctima; como es el caso de chalinas, bufandas, etc. “Estos Últimos son usados en su mayoría por personas que poseen mayor fuerza física que sus víctimas y por aquellos que no necesariamente planificaron el ase-si nato. En el caso peruano, podemos observar que en los tres años el 21% de mujeres murió por el uso de armas de fuego”. Sobre la relación que existe entre las armas las mujeres, Amnistía Internacional, Oxfam International y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas, en su informe “El Efecto

de las armas en la vida de las mujeres” señalan que sea cual fuere el contexto o la causa inmediata de la violencia, la presencia de armas de fuego tiene, invariablemente, el mismo efecto; es decir, cuanto mayor sea el número de armas, mayor es el peligro para las mujeres (Mascassi Leon, 2005, pág. 28)

Asimismo, dicho informe resalta que la presencia de armas de fuego en el hogar expone a las mujeres a un riesgo especialmente elevado de muerte”. Mascassi Leon (2005) “Al respecto, dos estudios recientes de Estados Unidos ofrecen información relevante sobre el tema”. En primer lugar, hay varios factores que afectan a las posibilidades de que una mujer sea asesinada por su esposo o compañero, pero el acceso a un arma de fuego aumenta el riesgo cinco veces. En segundo término, tener un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo general de que algún miembro de la familia sea asesinado en un 41%; pero para las mujeres en concreto, este riesgo casi se triplica” (subiendo hasta 272%). En consecuencia, los datos de estos estudios muestran que la intervención de las armas de fuego en el hogar hace mucho más probable que una agresión tenga consecuencias mortales. Ello por tres razones (Mascassi Leon, 2005, pág. 28) .

2.5. El feminicidio en Perú aumentaron del 2015 al 2016.

En el 2015: Según una investigación realizada por la asociación #NuUnaMenos (2016) 20 personas son ultrajadas sexualmente a diario en el Perú, siendo el 93% de ellas mujeres y los 71% menores de edad. De esta cifra de menores, el 60% tiene entre 10 y 17 años (#NiUnaMenos, 2016), éstos delitos están tipificados en el artículo 170 Violación sexual, del Código Penal peruano el cual indica: “El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”, muchos de estos delitos terminan en el asesinato de las víctimas pasando al delito de Feminicidio

establecido en el artículo 108-B cuya pena privativa de la libertad en su forma simple es no menor de quince años y en su forma agravada la pena privativa de libertad será no menos de veinticinco años.

A pesar que la ley establece parámetros para prevenir y proteger a la mujer de la muerte o los ataques físicos, psicológicos ente otros, el índice de asesinato femenino no para, cada año las cifras son alarmantes al observar su incremento, es por ello que se ha realiza esta investigación para conocer que otras estrategias se pueden implementar para disminuir tal índice de feminicidio en el Perú.

Continuando con las estadísticas, en el año 2015 se produjeron 95 feminicidios y 200 tentativas de este tipo de crimen. Y en lo que va del año, se han producido 54 feminicidios y 116 tentativas. Solo en este año, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 32 mil 588 cuestiones, la mayoría de ellos por violencia psicológica, física y sexual (#NiUnaMenos, 2016). Ahora veamos los indicadores del año 2016, donde las cifras son alarmantes en comparación al año 2015 (#NiUnaMenos, 2016).

En el 2016: La agresión a mujeres durante el 2016 se incrementó en 13% en relación con el año pasado, según el MIMP. La agresión a mujeres durante el 2016 se incrementó en 13% con relación al 2015, donde se registraron 95 feminicidios y 198 tentativas de feminicidio, según el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016).

Según un informe del Instituto Nacional Penitenciario, 211 personas están en prisión por feminicidio, mientras que 125 por feminicidio en grado de tentativa. Las regiones con mayor índice de este delito son: Lima, Junín, Arequipa, Cusco e Ica. De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en 25 países de la región, un total de 2 mil 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio; es decir, 12 latinoamericanas y caribeñas, murieron al día solo por el hecho

de ser mujer (MIMP, 2016).

Se aprecia entonces como para el 2016 las cifras con escalofrantes, registrándose 107 asesinatos de mujeres y 198 tentativas del mismo delito, al parecer la ley poco o nada les interesa o los persuade a los victimarios de estas indefensas mujeres, donde están los derechos humanos, donde está el Estado que vela por los ciudadanos según la constitución política en su Artículo 1.- Defensa de la persona humana La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ante estas cifras es inviable decir que no hay problema, que no existen razón para alarmarse, si cada día miles de mujeres son atacadas y muchas de ellas asesinadas, es por ello que se realiza esta investigación para buscar otros mecanismos que contribuyen a disminuir el alto índice de feminicidio que hay en el Perú.

A pesar del D.L. N° 1323, cuyas penas son muy duras y drásticas, casi poco o nada ayuda en la lucha contra la prevención, lo más resaltante del feminicidio, es que cada vez el hecho delictivo se realiza con mayor ferocidad, como es el caso ocurrido en Arequipa, la víctima una joven madre de 26 años de edad. El hecho ocurrió en la vivienda que Minga compartía con su pareja, José Calderón Fuentes, ubicada en el distrito arequipeño de Cerro Colorado. “El hecho empezó la noche del miércoles, cuando Calderón Fuentes habría atacado a Celina Minga con un pico. El diagnóstico para Celina fue fractura de cráneo y múltiples lesiones en el cuerpo, por lo que permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que falleció durante la madrugada de ayer” (Comercio.pe, 2017).

Este asesinato, ocurrió el miércoles 8 de noviembre del 2017, donde se aprecia gran ferocidad por parte del victimario, al usar un pico, lo que significa una elevada agresividad y pérdida del sentido de humanidad, es por ello que el Derecho Penal sigue de brazos cruzados y está esperando que se mate a la víctima para poder recién castigar, esta situación debe de tener un giro total y trabajar en la prevención, ello significa conocer la

situación de las poblaciones vulnerables, y para ello se requiere la aplicación de las estrategias jurídico sociales.

Ecuador:

El Ministerio de Justicia de Ecuador alista estrategia nacional para reducir índice de feminicidios. Estas estrategias tienen el propósito de comprometer a la sociedad, es decir están aplicando las estrategias jurídicas sociales para hacer frente al incremento del delito de feminicidio (ANDES, 2017).

A continuación se describe un extracto de la estrategia ecuatoriana: Alvarado precisó que la estrategia nacional se centrará en el seguimiento de estos casos, con los equipos de profesionales de las casas y centros de acogida, y en identificar e intervenir en casos emblemáticos. “Todos estos casos duelen y conmueven, pero hay algunos que si requieren de mayor atención para proteger a niños o familiares de las víctimas y vigilar que no haya impunidad (ANDES, 2017)

Es necesario articular a otras organizaciones y se refirió a la que recientemente se formó con familiares de personas que fallecieron víctimas de femicidio”. “Eran tres familias con historias diferentes al igual que su condición económica, pero les unió el mismo dolor de perder a un ser querido. Quieren nuestro apoyo, y el de la sociedad; que se haga seguimiento y que se haga justicia, con ellos también vamos a trabajar. (ANDES, 2017)

Chile:

Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de que en nuestras sociedades todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Las penas para quienes cometen femicidio en Chile van desde los quince años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua” (Minmujeryeg, 2017).

Por ello, entre los objetivos estratégicos de la Agenda de Género del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y del quehacer del Servicio Nacional de la Mujer está la idea de ampliar la Ley 20.066, de violencia intrafamiliar, para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, en los distintos espacios, y no sólo las que se dan en el contexto familiar. (Minmujeryeg, 2017)

Consideraciones finales

Se ha demostrado que las leyes peruanas con respecto al delito de feminicidio no han dado resultado o no han sido efectivos o eficaces en la disminución del índice de mujeres asesinadas.

Ecuador y Chile, ya están trabajando en estrategias jurídico sociales, donde están realizando seguimientos desde el mismo lugar donde se realizan los hechos, como son las casas de las mujeres violentadas. Se aprecia la sensibilización y el compromiso de la presidenta chilena de prevenir eficazmente los delitos de feminicidio.

2.6. Conclusiones de la PARTE II Feminicio

Sin lugar a duda las leyes y normas peruanas no han tenido efecto en la lucha contra la prevención o disminución contra el Feminicidio, la Ley que modifica el Artículo 107 del Código Penal, incorporando el Feminicidio, no ha tenido efecto preventivo a pesar del elemento castigador que se ha incrementado, y saltan preguntas como por ejemplo ¿Por qué no tienen efectos las nuevas penalidades? ¿Cuál serían las nuevas estrategias a utilizar para prevenir y disminuir los delitos o crímenes contra las mujeres?

Claro está entonces que se deben recurrir a nuevas estrategias que permitan darles una esperanza de justicia y sobre todo de vida a las mujeres peruanas, este problema social, porque ya no es un problema

netamente penal, no conoce de estructuras sociales, condiciones económicas, culturales entre otras.

Definitivamente lo operadores del derecho, los magistrados del Poder Judicial, congresistas y Gobierno Central, deben salir de la burbuja jurídico legal y salir más allá de este contexto y analizar la situación desde un punto holístico o integrador, conocer las raíces del problema, identificar los aspectos externos e internos desde el punto de vista social, cultural, económico, pobreza, salud, entre otros.

Los lugares donde más se comenten las agresiones son en el siguiente orden: La casa de los esposos, la casa del agresor, hostales u hoteles, casa de algún familiar, vía pública, entre otros.

Entre las modalidades de inhabilitar a la víctima tenemos en el siguiente orden: Golpes, Engañadas, drogadas, amenazadas, entre otros.

Modalidad que utilizó el agresor para asesinar a la víctima tenemos en el siguiente orden: Arma blanca, arma de fuego, sustancia tóxica o veneno entre otros. Las estadísticas dan fe de que las leyes de Femicidio no contribuyen a disminuir los delitos de femicidio, así tenemos para el 2015 se registraron 95 feminicidios, 200 casos de tentativa de este tipo de crimen, para el 2016 se incrementó al 13%. (MIMP, 2016). Conozcamos ahora los tipos de feminicidio o tipologías existentes, según Toledo (2017) tenemos: Femicidio íntimo, familiar íntimo, infantil, sexual sistémico y por ocupaciones estigmatizadas.

En resumen los delitos de feminicidio van creciendo cada año y con más ferocidad, así lo indican las estadísticas, que dan cuenta que las normas o leyes del feminicidio en nuestro país no están contribuyendo a persuadir, prevenir este delito, en ese sentido es necesario establecer una estrategia completamente diferente, que rompa los esquemas de la burbuja doctrinal, penal y jurídica y que salga hacia los contextos externos como la situación social, económica, pobreza, cultural, psicológica en que la víctima se encuentra para poder hacer frente a este fenómeno social que

cada vez cobra más víctimas de mujeres indefensas. Es por ello que esta investigación se propondrá estrategias jurídicas sociales para combatir desde otra perspectiva los delitos del feminicidio.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

3.1. Resultados

Tabla 5. Considera que las estrategias jurídicas del Poder Judicial dan resultados en la lucha contra el delito de feminicidio.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	16	13,3	13,3	13,3
	Totalmente de acuerdo	15	12,5	12,5	25,8
	En Desacuerdo	53	44,2	44,2	70,0
	Totalmente en desacuerdo	36	30,0	30,0	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

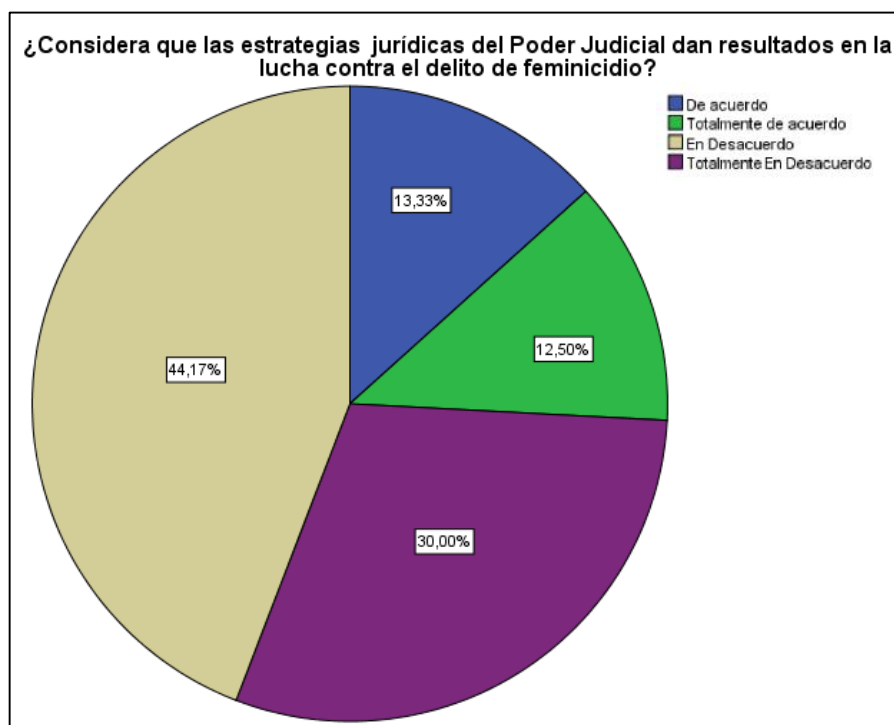


Figura 19: Resultados de las estrategias jurídicas del Poder Judicial

Análisis: Del 100% de encuestados, el 44.2% indica En desacuerdo, y el 30% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría considera que las estrategias jurídicas del Poder Judicial no están dando resultados en la disminución de los delitos de feminicidio.

Tabla 6. Considera que se deben tener en cuenta estrategias sociales para ayudar a disminuir el crecimiento del feminicidio.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	34	28,3	28,3	28,3
	Totalmente de acuerdo	34	28,3	28,3	56,7
	En Desacuerdo	22	18,3	18,3	75,0
	Totalmente en desacuerdo	30	25,0	25,0	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

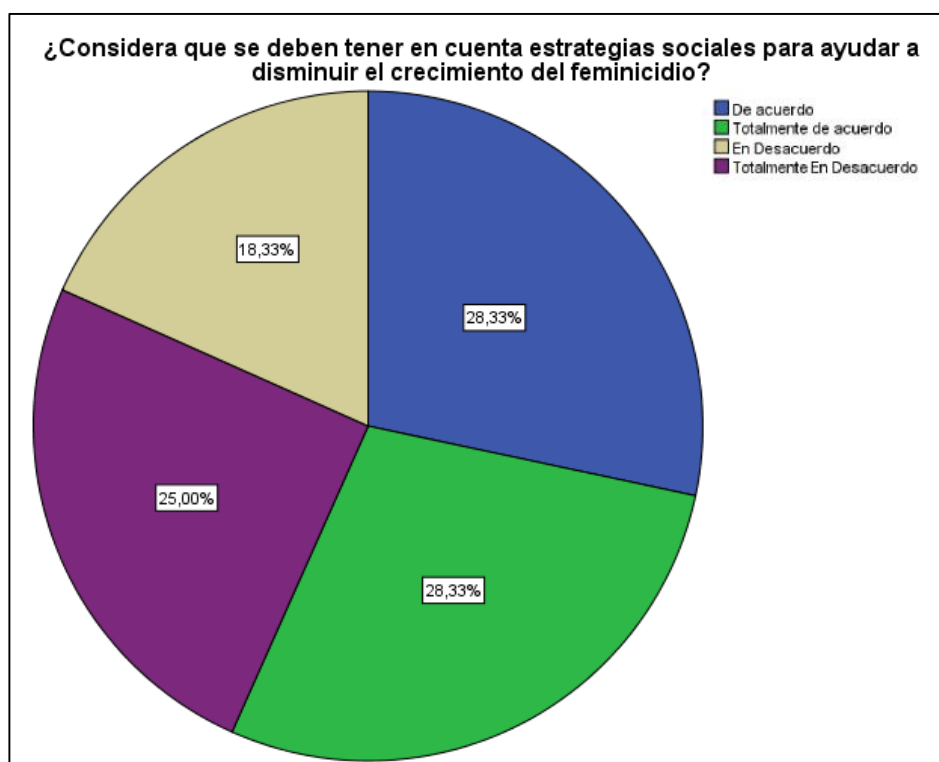


Figura 20: Estrategias sociales

Análisis: Del 100% de encuestados, el 28.3% indica De acuerdo, y el 28.3% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría considera que se debe tener en cuenta las estrategias sociales para ayudar a disminuir el feminicidio.

Tabla 7. Actualmente las normas jurídicas están frenando el delito de feminicidio

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	4	3,3	3,3	3,3
	Totalmente de acuerdo	8	6,7	6,7	10,0
	En Desacuerdo	43	35,8	35,8	45,8
	Totalmente en desacuerdo	65	54,2	54,2	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

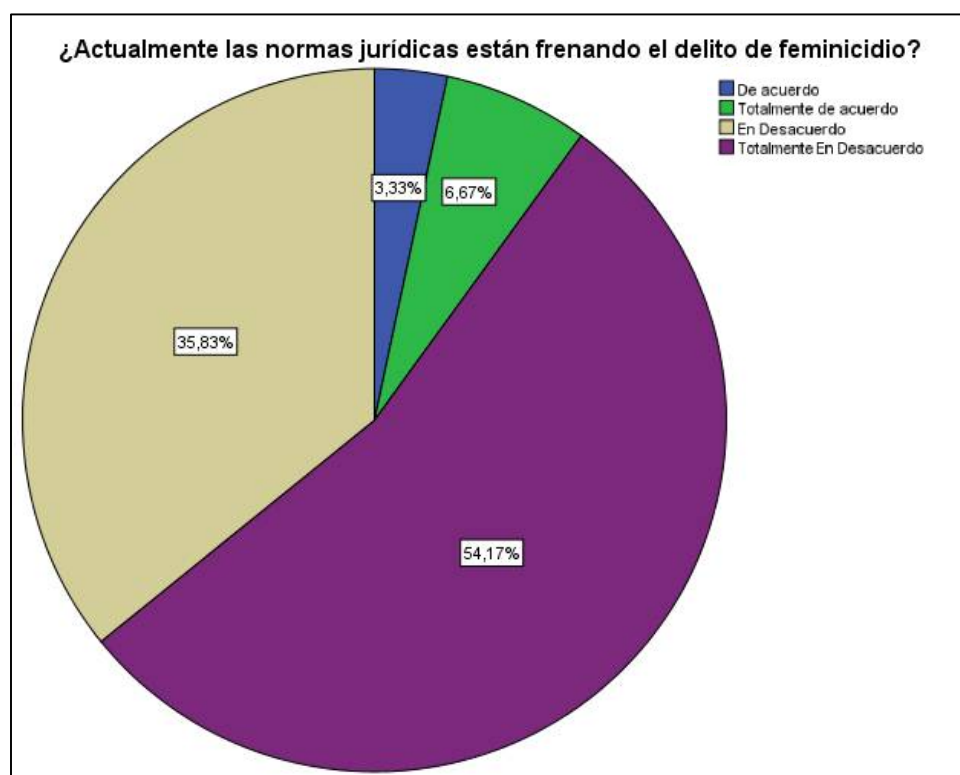


Figura 21: Las normas frenan el Feminicidio

Análisis: Del 100% de encuestados, el 35.8% indica En desacuerdo, y el 54.2% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho indica que actualmente las normas jurídicas no están frenando el delito de feminicidio.

Tabla 8. Está de acuerdo que las leyes penales recientemente dictadas contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	8	6,7	6,7	6,7
	Totalmente de acuerdo	17	14,2	14,2	20,8
	En Desacuerdo	38	31,7	31,7	52,5
	Totalmente en desacuerdo	57	47,5	47,5	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

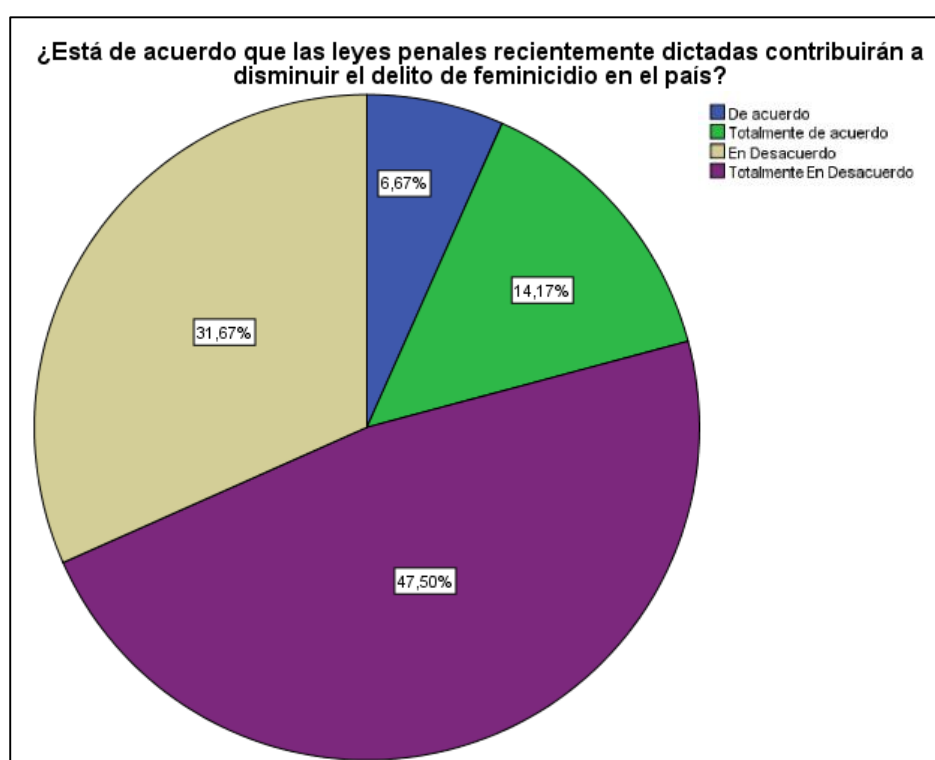


Figura 22: Las nuevas leyes contribuyen a disminuir el feminicidio

Análisis: Del 100% de encuestados, el 31.7% indica En desacuerdo, y el 47.5% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho indica que las leyes penales recientemente dictadas no contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país.

Tabla 9. Considera que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	31	25,8	25,8	25,8
	Totalmente de acuerdo	32	26,7	26,7	52,5
	En Desacuerdo	25	20,8	20,8	73,3
	Totalmente en desacuerdo	32	26,7	26,7	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

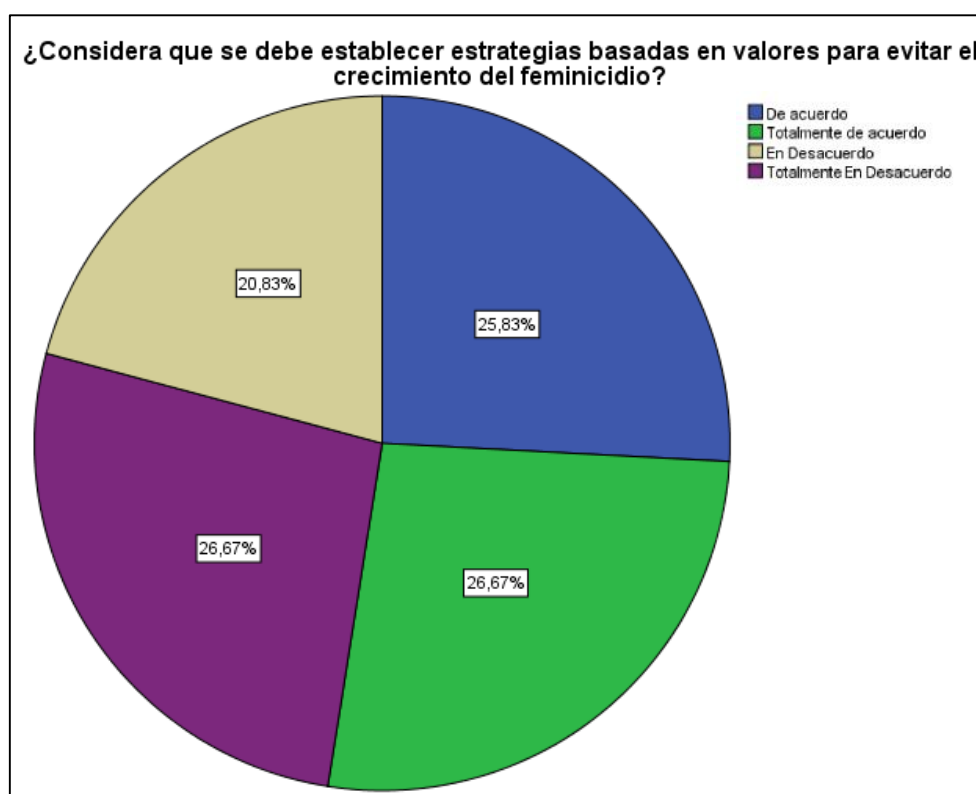


Figura 23: Estrategias basadas en valores

Análisis: Del 100% de encuestados, el 25.8% indica De acuerdo, y el 26.7% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho Consideran que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio.

Tabla 10. Está de acuerdo que los criminales de feminicidio han perdido el sentido de humanidad

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	18	37.5	37.5	35
	Totalmente de acuerdo	16	34.2	34.2	69.2
	En Desacuerdo	41	13.3	13.3	82.5
	Totalmente en desacuerdo	45	15	15	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

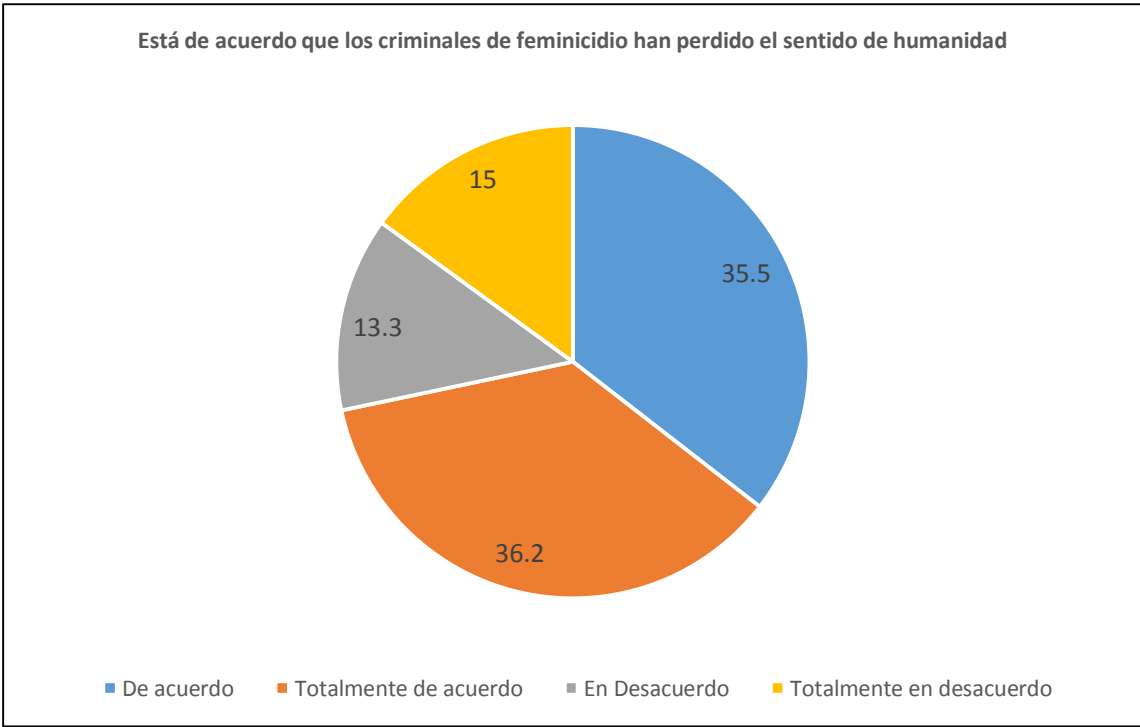


Figura 24: Los criminales del feminicidio han perdido el sentido de humanidad

Análisis: Del 100% de encuestados, el 37.5% indica De acuerdo, y el 34.2% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho están de acuerdo que los criminales de feminicidio han perdido el sentido de humanidad.

Tabla 11. Percibe Ud. Que el feminicidio íntimo sigue aumentando en el país

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	18	38.3	38.3	35
	Totalmente de acuerdo	21	29.2	29.2	64.2
	En Desacuerdo	35	17.5	17.5	81.7
	Totalmente en desacuerdo	46	15	15	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

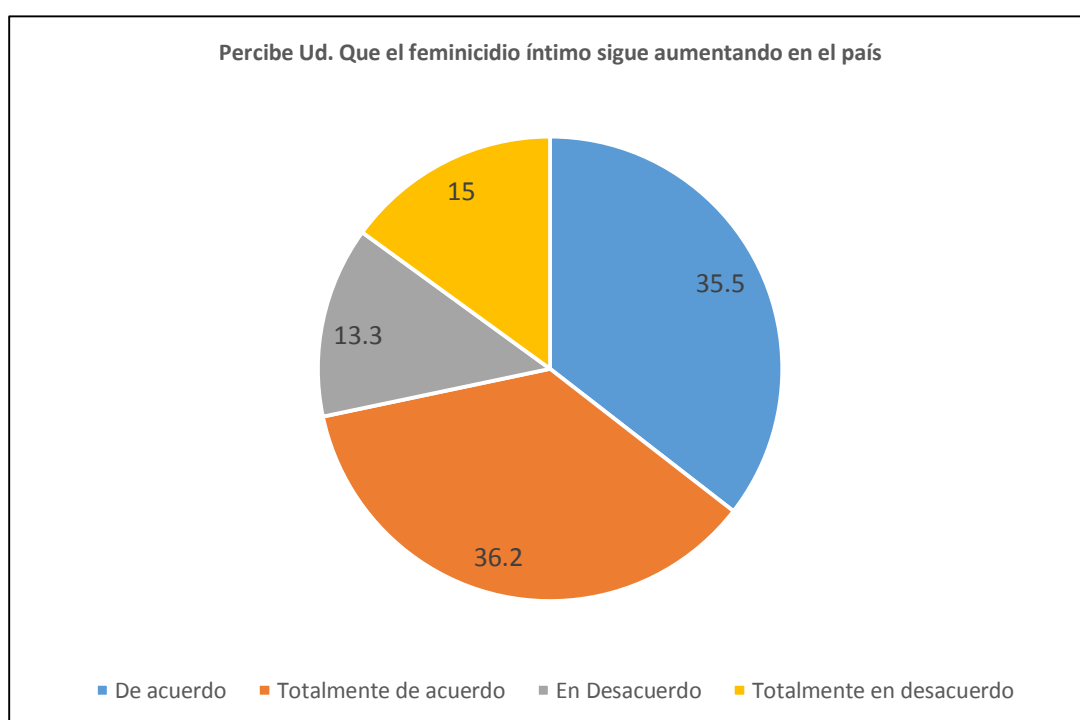


Figura 25: El feminicidio sigue aumentado

Análisis: Del 100% de encuestados, el 38.3% indica De acuerdo, y el 29.2% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho perciben que el feminicidio íntimo sigue aumentando en el país.

Tabla 12. Percibe Ud. Que el feminicidio íntimo familiar sigue aumentando en el país

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	12	35	35	35
	Totalmente de acuerdo	13	44.2	44.2	79.2
	En Desacuerdo	42	10	10	89.2
	Totalmente en desacuerdo	53	10.8	10.8	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

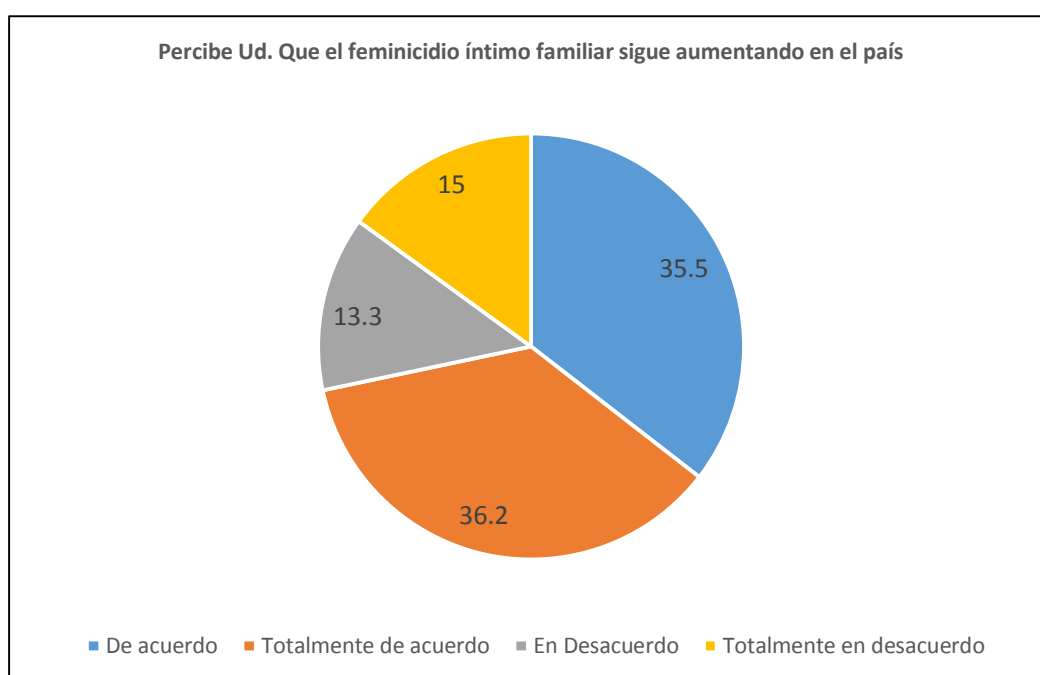


Figura 26: El feminicidio íntimo familiar sigue aumentado

Análisis: Del 100% de encuestados, el 35% indica De acuerdo, y el 44.2% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho perciben que el feminicidio íntimo familiar sigue aumentando en el país.

Tabla 13. Percibe Ud. Que el feminicidio infantil sigue aumentando en el país

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	5	40	40	35
	Totalmente de acuerdo	28	32.5	32.5	67.5
	En Desacuerdo	39	23.3	23.3	90.8
	Totalmente en desacuerdo	48	4.2	4.2	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

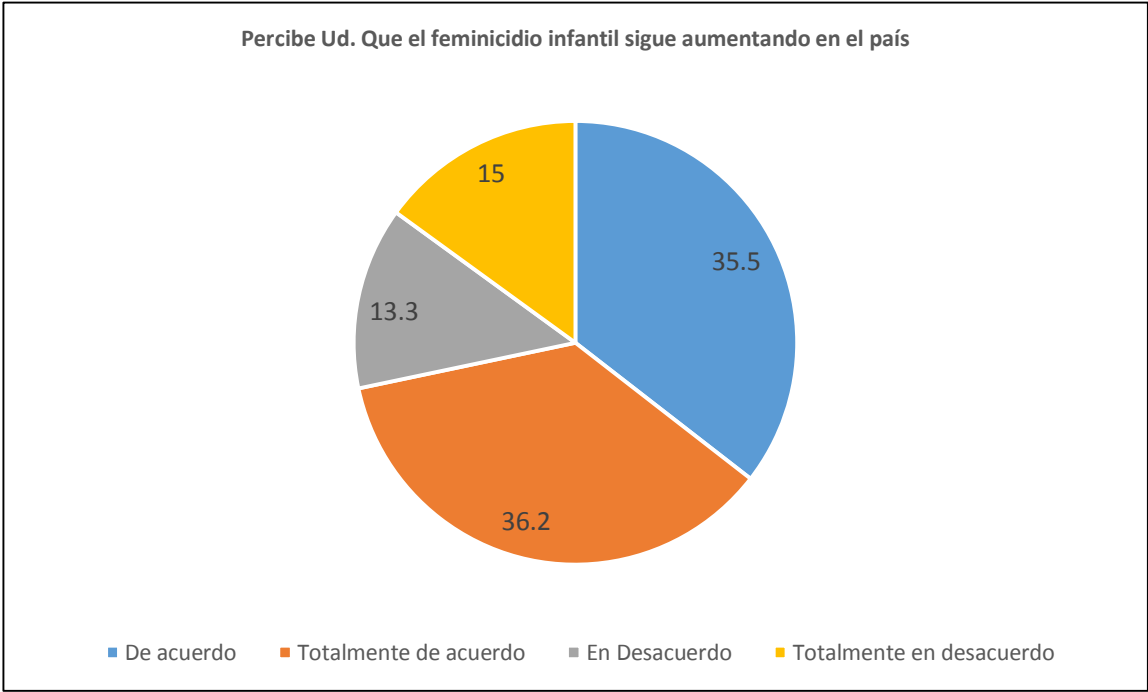


Figura 27: El feminicidio infantil sigue aumentado

Análisis: Del 100% de encuestados, el 40% indica De acuerdo, y el 32.2% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho perciben que el feminicidio íntimo infantil sigue aumentando en el país.

Tabla 14. Percibe Ud. Que el Feminicidio sexual sistémico sigue aumentando en el país

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	18	37.5	37.5	35
	Totalmente de acuerdo	16	34.2	34.2	69.2
	En Desacuerdo	41	13.3	13.3	82.5
	Totalmente en desacuerdo	45	15	15	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

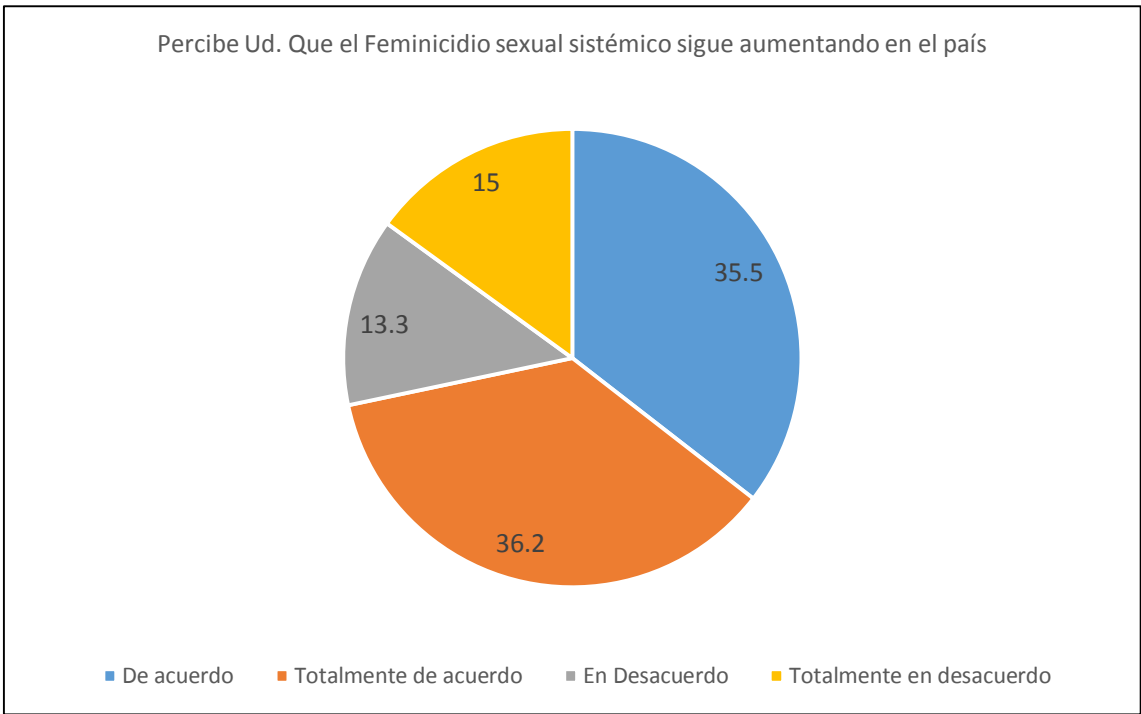


Figura 28: El feminicidio sexual sistémico sigue aumentado

Análisis: Del 100% de encuestados, el 37.5% indica De acuerdo, y el 34.2% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho perciben que el feminicidio sexual sigue aumentando en el país.

Tabla 15. Percibe Ud. Que el Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas sigue aumentando en el país

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	12	35.5	35.5	35
	Totalmente de acuerdo	16	36.2	36.2	71.2
	En Desacuerdo	43	13.3	13.3	84.5
	Totalmente en desacuerdo	49	15	15	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

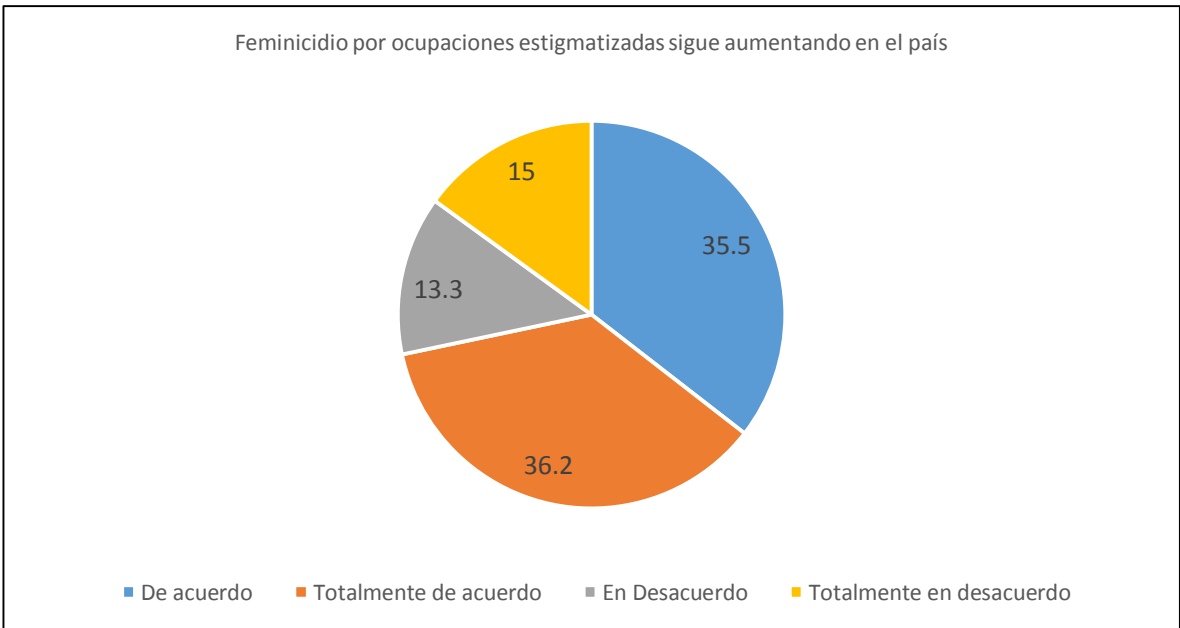


Figura 29: El feminicidio por ocupaciones estigmáticas

Análisis: Del 100% de encuestados, el 35.5% indica De acuerdo, y el 36.2% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho perciben que el Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas sigue aumentando en el país.

3.2. Discusión y Contrastación de resultados con respecto a los objetivos

3.2.1. Primer objetivo: Diagnosticar la situación actual del feminicidio en el Perú;

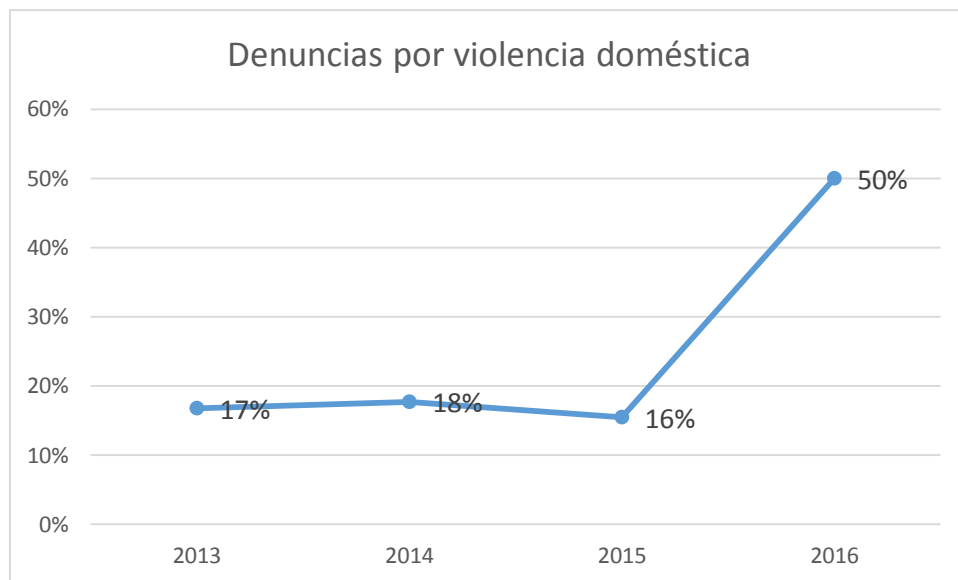


Figura 30. Denuncias por violencia familiar

Fuente: (INEI, 2016)

Análisis: se puede observar como las denuncias por han crecido del 2015 al 2016 en un alto grado de porcentaje (34%), lo que conllevaría más adelante en un delito de feminicidio, recordemos que estos delito se iniciar por la violencia familiar o doméstica.

Esta situación se corrobora con los resultados de la Figura 31 donde se describe a continuación las personas con sentencia condenatoria por cometer delitos en la modalidad de feminicidio.

PERÚ: PERSONAS CON SENTENCIA CONDENATORIA POR COMETER
DELITOS EN LA MODALIDAD DE FEMINICIDIO, 2014-2016¹⁹

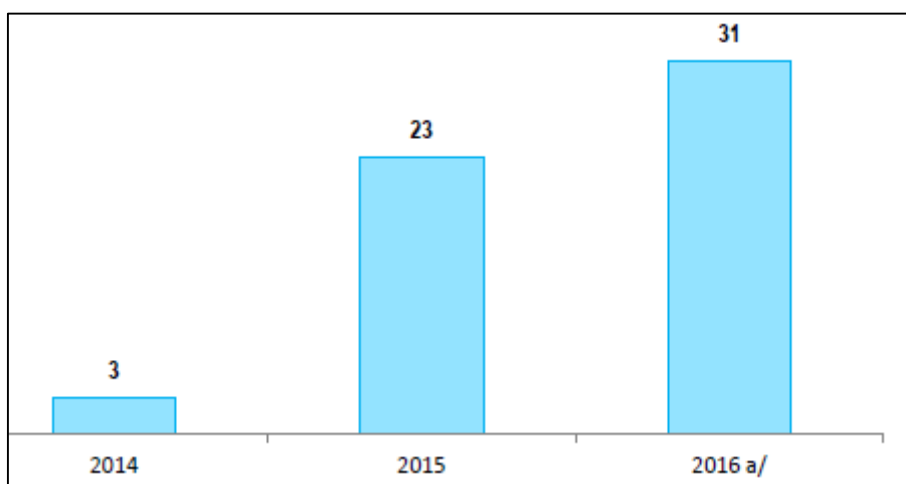


Figura 31. Sentencia condenatoria por cometer delitos en la modalidad de femicidio

Fuente: (INEI, 2016)

Análisis: Se puede observar en la Figura 31, el incremento en lo último 3 años sobre las sentencias de femicidio cuyas cifras en lugar de disminuir han aumentado, lo que indica que el índice de femicidio real va aumentando.

Estrategias jurídicas del poder judicial

Según los resultados de la Tabla 4: Considera que las estrategias jurídicas del Poder Judicial dan resultados en la lucha contra el delito de femicidio, del 100% de encuestados, el 44.2% indica En desacuerdo, y el 30% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría considera que las estrategias jurídicas del Poder Judicial no están dando resultados en la disminución de los delitos de femicidio.

Normas jurídicas y/o leyes penales del Poder Judicial

¹⁹ INEI, I. (15 de enero de 2016). *Estadísticas de Femicidio - Registros Administrativos*. Obtenido de www.inei.gob.pe

Según la Tabla 6: Actualmente las normas jurídicas están frenando el delito de feminicidio. Del 100% de encuestados, el 35.8% indica En desacuerdo, y el 54.2% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho indica que actualmente las normas jurídicas no están frenando el delito de feminicidio.

Asimismo la Tabla 7: Está de acuerdo que las leyes penales recientemente dictadas contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país: Del 100% de encuestados, el 31.7% indica En desacuerdo, y el 47.5% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho indica que las leyes penales recientemente dictadas no contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país.

PERU: POBLACIÓN PENITENCIARIA INTERNA POR COMETER FEMINICIDIO, 2012 - 2015, Julio 2016²⁰

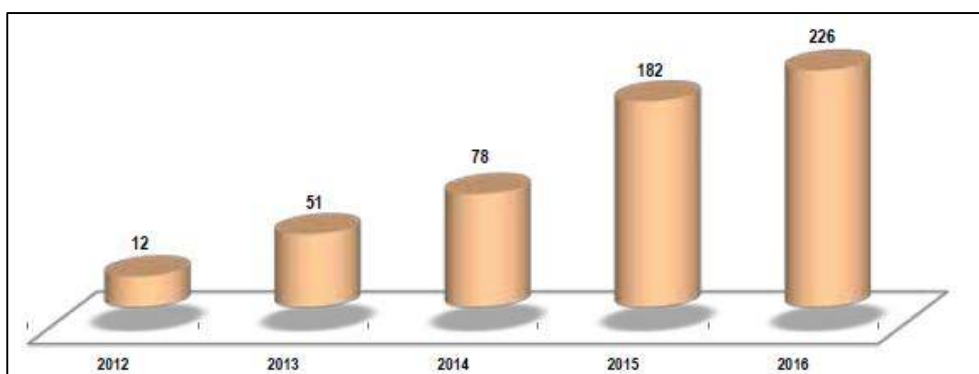


Figura 32. Población penitenciaria interna por cometer feminicidio

Fuente: (INEI, 2016)

Análisis: Se aprecia como la población penitenciaria interna por cometer feminicidio 2012-2015 junio del 2016, ha ido incrementando en los últimos años, situación que nos indica que las leyes penales sobre feminicidio no son eficaces en la disminución de los delitos de feminicidio.

PERU: POBLACIÓN RECLUÍDA POR COMETER FEMINICIDIO, SEGÚN

²⁰ INEI, I. (15 de enero de 2016). *Estadísticas de Feminicidio - Registros Administrativos*. Obtenido de www.inei.gob.pe

DEPARTAMENTO, 2015 - Julio 2016

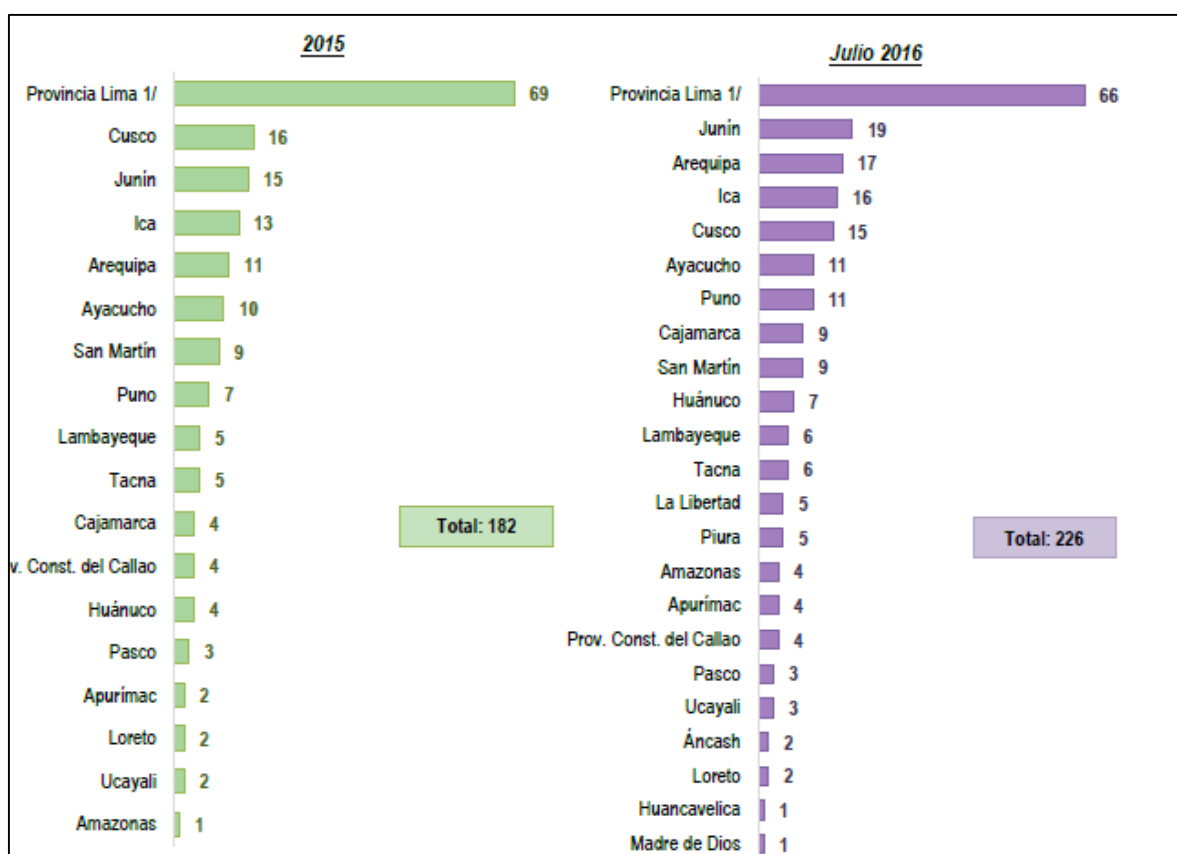


Figura 33. Población reclusa por cometer feminicidio, según departamento

Fuente: (INEI, 2016)

Análisis: Con respecto a la situación de la Región Lambayeque, el delito de feminicidio ha ido de menos a más según la figura 33 para el 2015 se recluyeron a 5 internos y para el 2016 paso hacer 7 reclusos, lo que nos indica que el índice sigue creciendo y no solo en la región Lambayeque, sino en las demás regiones la tendencia es de menos a mayor.

Consideraciones finales:

Con respecto al diagnóstico de la situación actual del feminicidio en el Perú, las cifras son alarmantes y contundentes, el crecimiento de la violencia doméstica o familiar incrementa y esto está asociado al delito de feminicidio al tener mayor cantidad de sentenciados por año. A ello se

suma las ineficientes estrategias, normas y leyes penales del Poder Judicial que no han logrado prevenir de forma eficaz el delito de feminicidio.

3.2.2. Segundo Objetivo: Identificar los factores influyentes que conllevan al crecimiento del feminicidio en el Perú

De acuerdo a los resultados de la Tabla 9: Está de acuerdo que los criminales de feminicidio han perdido el sentido de humanidad: Del 100% de encuestados, el 37.5% indica De acuerdo, y el 34.2% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho están de acuerdo que los criminales de feminicidio han perdido el sentido de humanidad.

Otra causa es la pérdida de valores según la tabla 8: Considera que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio: Del 100% de encuestados, el 25.8% indica De acuerdo, y el 26.7% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho Consideran que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio.

Consideraciones finales:

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas a los operadores del derecho, se puede decir que los factores influyentes que conllevan al crecimiento del feminicidio en el Perú son básicamente dos: la pérdida o el sentido por la humanidad y los valores por parte de los victimarios, es por ello que se debe tener en cuenta estos indicadores al momento de plantear las estrategias de jurídico sociales para prevenir los delitos de feminicidio.

Tercero Objetivo: Elaborar estrategias jurídicas sociales mediante proyectos de Ley para combatir el crecimiento del feminicidio en el Perú.

Basado en los resultados de los objetivos 1 y 2 y el resultado de la tabla 5: Considera que se deben tener en cuenta estrategias sociales para ayudar a disminuir el crecimiento del feminicidio: Del 100% de encuestados, el 28.3% indica De acuerdo, y el 28.3% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría considera que se debe tener en cuenta las estrategias sociales para ayudar a disminuir el feminicidio.

A ello se suman los resultados de la Tabla 8: Considera que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio: Análisis: Del 100% de encuestados, el 25.8% indica De acuerdo, y el 26.7% Totalmente de acuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho Consideran que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio.

Continuando con el desarrollo del tercer objetivo se continúa en el siguiente capítulo.

3.3 Contrastación de la hipótesis

Hipótesis: Las Estrategias Jurídico sociales son eficientes y si permiten disminuir el índice de crecimiento de los delitos de Femicidio en el Perú.

Coef. Pearson: Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. En esta oportunidad las variables son Estrategias Jurídicas sociales y Femicidio.

Cuadro 1. Variable Independiente: Estrategias Jurídicas						
Preguntas	p1	p2	p3	p4	p5	p6
Coef. Pearson	1	1	1	1	1	1
condición Ítems	Válido	Válido	Válido	Válido	Válido	Válido

Cuadro 2. Variable Dependiente: Femicidio						
Preguntas	p7	p8	p9	p10	p11	
Coef. Pearson	1	1	1	1	1	
condición Ítems	Válido	Válido	Válido	Válido	Válido	

Análisis: Se puede observar en los resultados del Coeficiente de Pearson que la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. En ese sentido se contrasta positivamente la hipótesis y se acepta el enunciado propuesto.

3.4. Discusión de los resultados

Según el Artículo 1 de la Ley 30364 indica que: “La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.” Eso se contrasta con los resultados a la pregunta ¿Actualmente las normas jurídicas están frenando el delito de feminicidio? Del 100% de encuestados, el 35.8% indica En desacuerdo, y el 54.2% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho indica que actualmente las normas jurídicas no están frenando el delito de feminicidio. En resumen se aprecia entonces que la mencionada Ley no está siendo efectiva con respecto a su finalidad. (Tabla 6)

Asimismo la Ley 29819, Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio, así como el decreto legislativo N°1323 , que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Corren el mismo camino que la ley mencionada en el primer párrafo, es decir no contribuye significativamente en la prevención disuasión y disminución del delito de feminicidio. Esto se contrasta al encuestar a los operadores del derecho en base a la pregunta ¿Está de acuerdo que las leyes penales recientemente dictadas contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país? Del 100% de encuestados, el 31.7% indica En desacuerdo, y el 47.5% Totalmente en desacuerdo, en resumen la mayoría de los operadores del derecho indica que las leyes penales recientemente dictadas no contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país. (Tabla 7)

Se observa entonces como la comunidad jurídica indica fehacientemente que las leyes actualmente no están contribuyendo eficientemente a radicar los delitos de feminicidio, al contrario cada vez son o se realizan con mayor ferocidad, mujeres inocentes cuyas vidas el Derecho Penal, el Estado y las instituciones responsables a velar por los derechos de estas mujeres poco o nada hacen.

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1 Título

Estrategias Jurídicas sociales preventivas para los delitos de Femicidio, llamada de aquí en adelante EPDF.

4.2 Introducción

La presente investigación se centra en la propuesta de estrategias Jurídicas sociales preventivas para los delitos de Femicidio, para efectos de esta investigación se ha considerado tener como fundamento las estrategias jurídicas sociales promovidas por Ciuro (2011) el cual manifiesta que las Estrategias Jurídico sociales están constituidas por tres dimensiones las cuales son: Dimensión sociológica, Dimensión Normológica y Dimensión dielógica, la primera ayuda a desenmascarar la realidad existente debajo de las leyes, reglamentos o normas, cuyos grupos de interés solo desarrollan normatividades para sus intereses²¹, La dimensión sociológica del mundo jurídico está compuesta de adjudicaciones de potencia e impotencia y estas beneficia o lesiona al ser y de modo especial a la vida, en resumen las estrategias jurídico sociales desde el punto de vista de la Dimensión sociológica presentan normas para intereses ocultos que perjudican o benefician al ser y su vida. Con respecto a la dimensión Normológica, la norma debe ser de captación lógica de un reparto proyectado hecho desde el punto de vista de un tercero, en otras palabras de un neutral, esta dimensión implica la integración, mediante la cual la norma determina los alcances de la realidad y le incorpora sentidos que ésta en sí no tiene, es satisfactoria para la comunidad, región y país. Ahora veamos la dimensión dielógica, la cual trabaja con la realidad social y las normas a las valoraciones de un complejo de valores que culmina en la justicia, en donde tiene en cuenta la utilidad, el amor, la verdad, la belleza y la santidad. En resumen esta dimensión desarrolla normas basado en la realidad de la sociedad o la comunidad y los valores.

²¹ Ciuro, C. M. (15 de noviembre de 2011). *Estrategia Jurídica*. Obtenido de <http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/mundojuridico/article/viewFile/1372/1575>

Con respecto al feminicidio Sin lugar a duda las leyes y normas peruanas no han tenido efecto en la lucha contra la prevención o disminución contra el Feminicidio, la Ley que modifica el Artículo 107 del Código Penal, incorporando el Feminicidio, no ha tenido efecto preventivo a pesar del elemento castigador que se ha incrementado, y saltan preguntas como por ejemplo ¿Por qué no tienen efectos las nuevas penalidades? ¿Cuál serían las nuevas estrategias a utilizar para prevenir y disminuir los delitos o crímenes contra las mujeres?

Claro está entonces que se deben recurrir a nuevas estrategias que permitan darles una esperanza de justicia y sobre todo de vida a las mujeres peruanas, este problema social, porque ya no es un problema netamente penal, no conoce de estructuras sociales, condiciones económicas, culturales entre otras. Definitivamente lo operadores del derecho, los magistrados del Poder Judicial, congresistas y Gobierno Central, deben salir de la burbuja jurídico legal y salir más allá de este contexto y analizar la situación desde un punto holístico o integrador, conocer las raíces del problema, identificar los aspecto externos e internos desde el punto de vista social, cultural, económico, pobreza, salud, entre otros.

Las presentes estrategias se fundamentan en las experiencias basadas en casos reales de dos ciudades consideradas hoy en día como las más seguras del mundo, nos estamos refiriendo a la ciudad de Dar es Salaam y Filipinas, cuyas estrategias jurídicas denominadas EPM (Programa de Ciudades sostenibles) y COPS (Táctica policial nacional para prevenir el delito).

Las estrategias a desarrollar son tres: Estrategias jurídicas sociales integradoras; Servicio de Vigilancia integrada y Participación ciudadana. Estas estrategias tienen como principios fundamentales: Trabajo en equipo; Responsabilidad compartida e Indispensabilidad de la participación del pueblo.

4.3 Objetivos

1. Definir estrategias jurídicas sociales integradoras dentro en un contexto interno y externo que permitan prevenir el delito de feminicidio.
2. Establecer un servicio de vigilancia integral para prevenir el delito de feminicidio.
3. Establecer un modelo integral con una visión compartida para alcanzar a disuadir, prevenir y disminuir los delitos de feminicidio.

4.4. Principios fundamentales

1. Trabajo en equipo: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, instituciones públicas y privadas y comunidad trabajando juntos para la prevención de delitos.
2. Responsabilidad compartida: Así como todos trabajan en equipo, todos tienen las responsabilidades en la prevención de los delitos de feminicidio.
3. Indispensabilidad de la participación del pueblo: La participación de la comunidad es clave en el desarrollo.

4.4 Desarrollo de estrategias

4.1. Estrategias jurídicas sociales integradoras

Fase 1: Talleres de sensibilización a nivel institucional: En estos talleres se hace necesariamente la presencia del Ministerio Público con la participación de los líderes de las instituciones de Educación superior para visitar barrio por barrio y conocer su verdadera realidad y desarrollar Seminarios de sensibilización y concienciación a nivel comunal sobre la prevención del delito.

Fase 2: Participación de reuniones informativas y debates profundos por separado, pidiendo a las participantes los problemas o las causas que más las preocupan, como por ejemplo el tipo de violencia familiar o doméstica que sufren las mujeres que posteriormente pueden terminar en delito de feminicidio, formándose en esta instancia la policía auxiliar que estará en

constante comunicación con la Policía Nacional del Perú (Comisaría de la comunidad), y el Ministerio Público.

Fase 3: Establecer programas de prevención y protección a mujeres vulnerables mediante la Estrategia “Mujeres Unidas” patrocinadas por la Municipalidad, gobierno Regional, Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para efectos de este programa se describe de la siguiente manera:

Fase 4: Estrategia Mujeres Unidas, mediante el patrocinio del Ministerio Público, encabezado por un Fiscal especializado prevención del delito, Policía auxiliar, Policía Nacional y Municipalidad se organizará por barrio comités populares denominados Mujeres Unidas quienes tendrán como misión prevenir los abusos de violencia familiar y por consiguiente los delitos de feminicidio.

A continuación se describe cómo funciona la siguiente estrategia.

- 1. Actores:** Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Ministerio de Justicia, Víctima potencial, Policía, Municipalidad.
- 2. Objetivo:** Prevenir la violencia familiar y los delitos de feminicidio.
- 3. Contexto:** Se desarrolla en la misma localidad o comunidad de las poblaciones vulnerables.

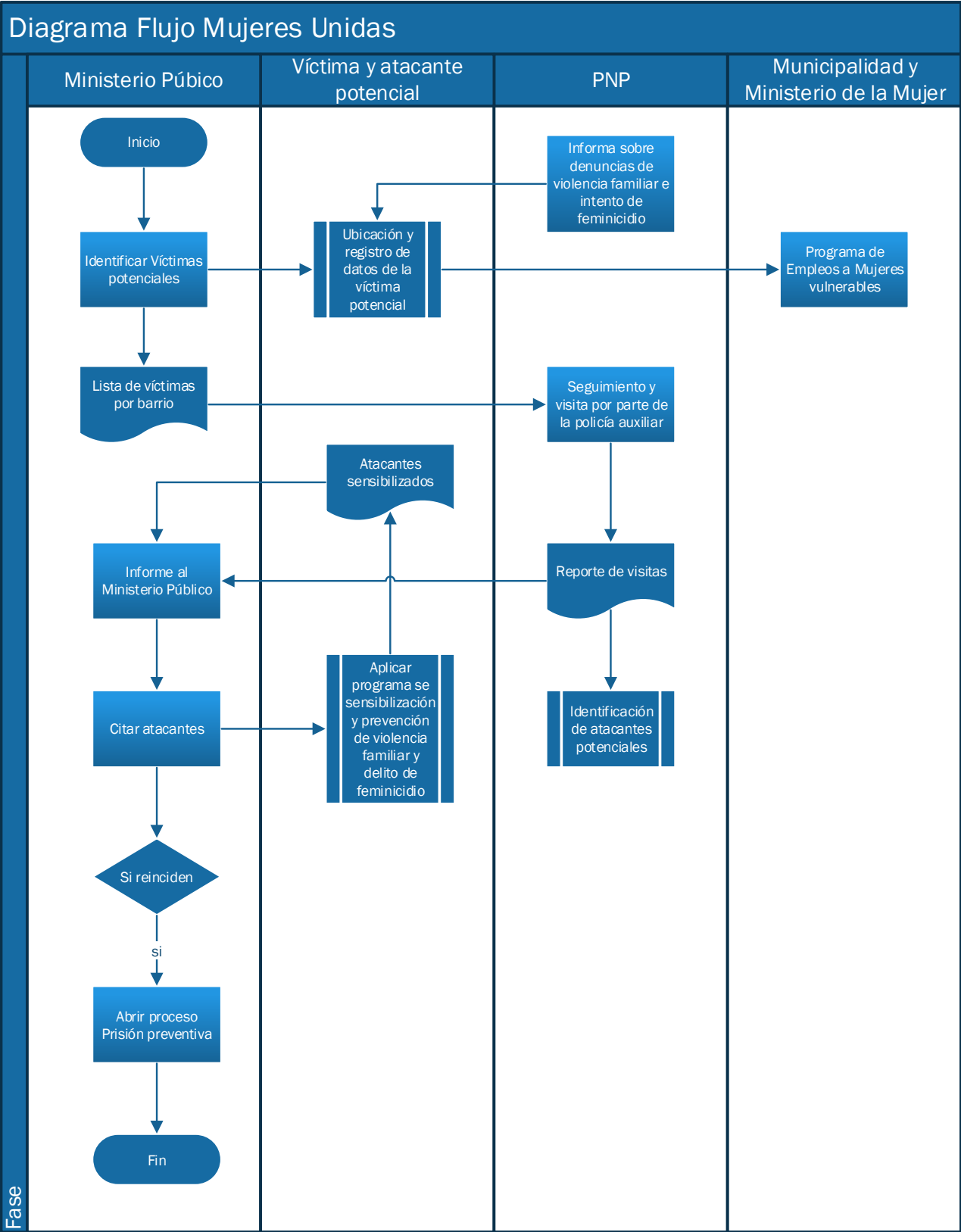


Figura 34. Diagrama de Flujo Mujeres Unidas

Programa de Sensibilización

Tabla 16. Actividades del Programa de sensibilización

Actividades	Detalle	Temas a Desarrollar	Responsable
Sensibilizar a los potenciales atacantes de violencia familiar y delito de feminicidio	Prevenir el delito de Feminicidio	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Familia 2. Violencia de Género 3. Delito de violencia familiar o doméstica 4. Delito de Feminicidio 	Ministerio Público Y Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables Ministerio de Justicia
Temas a Desarrollar	Fecha y hora	Duración	Capacitador
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO <ol style="list-style-type: none"> 1. La familia 2. El juego 3. La escuela 4. La comunidad cultural y la comunidad religiosa 5. La publicidad y los medios de comunicación LA DESIGUALDAD COMO CAUSA DE VIOLENCIA DE GÉNERO <ol style="list-style-type: none"> 1. Ámbitos de poder 2. Empleo 3. Salud 4. Corresponsabilidad familiar 5. Cultura y ciencia EL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Física 1.2. Psicológica 1.3. Sexual 1.4. Económica 	Viernes y Sábado 7:00 pm – 9:00 pm	4 horas	Psicólogo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Delitos de violencia familiar y sus implicancias jurídicas, sociales y legales 2. Delitos de Feminicidio y sus implicancias jurídicas, sociales y legales. 	Viernes y Sábado 7:00 pm – 9:00 pm	4 horas	Abogado

4.2 Servicio de Vigilancia integrada

El servicio de vigilancia integrada está a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte de su función de la prevención del delito de feminicidio para ello se organiza de la siguiente manera:

1. Policías auxiliares voluntarias: Formación de una nueva unidad de

apoyo para la policía nacional, conjunto de mujeres de la misma localidad, pueblo joven urbanización o barrio seleccionados y elegidos por el Ministerio Público. Sin registro de antecedentes penales o policiales, mayores de 18 años y menores de 60 años.

2. Creación de puestos de Prevención:

Los puestos de prevención estarán distribuidos en cada comunidad y tienen la particularidad de ser puestos móviles cuyo personal está conformado de la siguiente manera:

1. Policía PNP.
2. Policías auxiliares.
3. Un escritorio, una laptop e impresora para recibir y registrar las denuncias.
4. Una carceleta para los detenidos y Radio de comunicación



Figura 35. Policía Auxiliar del Ministerio Público

5. Identificar las víctimas y victimarios potenciales, hacerles visitas personalizadas en sus hogares constantemente y asegurarse mediante la inspección ocular y entrevista la situación de la familia y el comportamiento del victimario.
6. Informar sobre la evolución a la comisaria y Ministerio Público de las acciones realizadas y el seguimiento de las familias vulnerables.
7. En caso de detectar una flagrante violencia familiar, la Policía PNP y la

Policía auxiliar tienen la obligación, la responsabilidad y el deber de asistir, proteger y salvaguardar a la familia, mujer(es) en situación de peligro, usando la suficiente fuerza, esto significa arma de reglamento para disminuir al victimario.

4.3 Participación ciudadana

Otro elemento clave en las estrategias preventivas contra el delito de feminicidio es la participación de la colectividad, en ese sentido el comisario en coordinación con el Ministerio Público organizará barrio por barrio Comités de Prevención contra la violencia familiar y delitos de feminicidio, para ello se organiza de la siguiente manera:

- 1 Presidente.
- 2 Consejeros.
- 1 Secretario.
- Personal de apoyo debidamente identificado y registrado

Este Comité se organizará teniendo como base la Organización y Funciones de las Rondas Campesinas reconocidas por la Ley N° 27908. Este Comité trabaja sincronizadamente con los Policías auxiliares y unidades móviles PNP.

4.7 Proyecto de Ley

Proyecto de Ley



Proyecto de Ley que implementa el artículo 48 denominado estrategias jurídicas sociales prevenir, disuadir y disminuir el delito de feminicidio en el Perú. En la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La ciudadana y abogada Lora De La Cruz De Rubio Violeta, ejerciendo el

derecho a iniciativa legislativa, que le confiere el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 76º del Reglamento del Congreso presenta la siguiente propuesta legislativa.

Artículo 48: Estrategias jurídicas sociales prevenir, disuadir y disminuir el delito de feminicidio:

1. Estrategias jurídicas sociales integradoras

Fase 1: Talleres de sensibilización a nivel institucional: En estos talleres se hace necesariamente la presencia del Ministerio Público con la participación de los líderes de las instituciones de Educación superior para visitar barrio por barrio y conocer su verdadera realidad y desarrollar Seminarios de sensibilización y concienciación a nivel comunal sobre la prevención del delito.

Fase 2: Participación de reuniones informativas y debates profundos por separado, pidiendo a las participantes los problemas o las causas que más las preocupan, como por ejemplo el tipo de violencia familiar o doméstica que sufren las mujeres que posteriormente pueden terminar en delito de feminicidio, formándose en esta instancia la policía auxiliar que estará en constante comunicación con la Policía Nacional del Perú (Comisaría de la comunidad), y el Ministerio Público.

Fase 3: Establecer programas de prevención y protección a mujeres vulnerables mediante la Estrategia “Mujeres Unidas” patrocinadas por la Municipalidad, gobierno Regional, Policía Nacional y Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para efectos de este programa se describe de la siguiente manera:

Creación de las Estrategia Mujeres Unidas, mediante el patrocinio del Ministerio público, encabezado por un Fiscal especializado prevención del delito, Policía auxiliar, Policía Nacional y Municipalidad se organizará por barrio comités populares

denominados Mujeres Unidas quienes tendrán como misión prevenir los abusos de violencia familiar y por consiguiente los delitos de feminicidio. A continuación se describe cómo funciona la siguiente estrategia.

1 Actores: Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Ministerio de Justicia, Víctima potencial, Policía, Municipalidad.

2 Objetivo: Prevenir la violencia familiar y los delitos de feminicidio.

3 Contexto: Se desarrolla en la misma localidad o comunidad de las poblaciones vulnerables.

2. Servicio de Vigilancia integrada

El servicio de vigilancia integrada está a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte de su función de la prevención del delito de feminicidio para ello se organiza de la siguiente manera:

1. Policías auxiliares voluntarias: Formación de una nueva unidad de apoyo para la policía nacional, conjunto de mujeres de la misma localidad, pueblo joven urbanización o barrio seleccionados y elegidos por el Ministerio Público. Sin registro de antecedentes penales o policiales, mayores de 18 años y menores de 60 años.

2. Creación de puestos de Prevención:

Los puestos de prevención estarán distribuidos en cada comunidad y tienen la particularidad de ser puestos móviles cuyo personal está conformado de la siguiente manera:

1 Policía PNP

2 Policías auxiliares

3. Un escritorio, una laptop e impresora para recibir y registrar las denuncias

4. Una carceletera para los detenidos y Radio de

comunicación.

5. Identificar las víctimas y victimarios potenciales, hacerles visitas personalizadas en sus hogares constantemente y asegurarse mediante la inspección ocular y entrevista la situación de la familia y el comportamiento del victimario.

6. Informar sobre la evolución a la comisaria y Ministerio Público de las acciones realizadas y el seguimiento de las familias vulnerables.

7. En caso de detectar una flagrante violencia familiar, la Policía PNP y la Policía auxiliar tienen la obligación, la responsabilidad y el deber de asistir, proteger y salvaguardar a la familia, mujer(es) en situación de peligro, usando la suficiente fuerza, esto significa arma de reglamento para disminuir al victimario.

3. Participación ciudadana

Otro elemento clave en las estrategias preventivas contra el delito de feminicidio es la participación de la colectividad, en ese sentido el comisario en coordinación con el Ministerio Público organizará barrio por barrio Comités de Prevención contra la violencia familiar y delitos de feminicidio, para ello se organiza de la siguiente manera:

- 1 Presidente
- 2 Consejeros
- 1 Secretario
- Personal de apoyo debidamente identificado y registrado

Este Comité se organizará teniendo como base la Organización y Funciones de las Rondas Campesinas reconocidas por la Ley N° 27908.

Este Comité trabaja sincronizadamente con los Policías auxiliares y unidades móviles PNP.

Lora De La Cruz De Rubio Violeta

DNI 17640530

Abogada

Exposición de motivos

Con respecto a la Exposición de motivos se exponen casos verídicos suscitados a nivel nacional, donde se expone en su máxima expresión el problema jurídico social que se está presentando con respecto a los feminicidios en nuestro país.

Lima: El Agustino: Janeth Cahuina Ramos (27) falleció camino al hospital Hipólito Unanue, mientras que el agresor presenta un corte en el brazo, los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Al llegar, los agentes hallaron a Janeth Rosario Cahuina Ramos (27) con dos profundos cortes en el pecho. A su lado se encontraba Gustavo Daniel Castillo Figueroa con un corte en uno de sus brazos. Se presume que la mujer intentó defenderse del ataque hiriendo a su agresor.

Cahuina Ramos falleció camino al hospital Hipólito Unanue, mientras que Castillo Figueroa se encuentra fuera de peligro custodiado por la policía. Familiares de la víctima denunciaron que el sujeto, quien habría purgado una condena en el penal de Lurigancho, era violento con su pareja. Las investigaciones se realizan en la comisaría de El Agustino (El Comercio, 2017).

Cusco: Por celos. Sujeto dio muerte a enamorada que era 10 años menor, tras acusarla de serle infiel. La atacó con un cuchillo de cocina y luego quiso suicidarse en un hostel. Según la investigación preliminar de la Policía, Wilfredo Ccahuana, quien laboraba en una panadería, habría planificado matar a su ex pareja tras descubrir que mantenía una relación con otro hombre. El 14 de agosto, Ccahuana le quitó el celular a Yenni y tras ver los mensajes que mantenía con otro sujeto, se hizo pasar por su pareja y mantuvo comunicación con aquel. El día del crimen citó con

engaños a la jovencita y tras increparle por el hecho le asestó dos puñaladas en el cuello para luego esconderse en el hostel. El hecho ha conmocionado a los vecinos de la zona donde fue hallada Yenni. Algunos afirmaron haber oído que la fallecida discutía con un varón, al parecer su pareja sentimental, quien la atacó con un cuchillo de cocina de 35 cm, que fue hallado cerca del cuerpo de la víctima (La república, 2016).

Piura: Solo un caso de feminicidio resolvió el Poder Judicial en cinco años. La coordinadora del Colectivo por la Igualdad, Maritza Bobadilla, reveló que en los últimos cinco años en Piura se han registrado 16 feminicidios y sólo uno de ellos ha logrado ser resuelto por el Poder Judicial (PJ). Resaltó que la ley de prevención considera como violencia de género a las agresiones que reciben las mujeres no sólo por parte de su pareja, sino también por una persona particular que puede ser su jefe e incluso su profesor. Sin embargo, dijo que preocupa que el sistema judicial aun no conozca a cabalidad la normativa y tampoco cuente con los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, señaló que las valoraciones psicológicas no son tomadas en cuenta porque el Poder Judicial no cuenta con estos especialistas (La República, 2016).

Lambayeque: Luego de varias horas de agonía, falleció una mujer que fue brutalmente golpeada por su conviviente, convirtiendo en el primer caso de feminicidio (asesinato de mujeres por razones de género). Marcelina Salazar Lozada (56) fue internada de emergencia en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo tras sufrir una mortal golpiza de su conviviente Desiderio Ruiz Chuquilín (63) (Andina, 2014).

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El proyecto de Ley origina un costo mínimo al erario nacional, siendo las estrategias jurídico sociales, holísticas, integradoras, donde intervienen instituciones privadas y públicas, todas se comprometen y ponen el brazo para colaborar con las víctimas que sufren de agresión familiar y propensas a ser asesinadas, las capacitaciones pueden ser dadas por las universidades vía convenio gratuito, por considerarse acciones sociales,

para cubrir o proteger los derechos de las poblaciones vulnerables. Siendo así, contribuirá a la defensa y derechos de las mujeres, aportando lo ya establecido en la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

EFFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Contribuir a Prevenir, Disuadir y Disminuir los delitos de feminicidio en nuestro país, conservando, cuidando y salvaguardando los derechos, la integridad física, la salud y la vida de las mujeres.

4.6 Consideraciones finales

El objetivo del derecho penal es el castigo de los delitos, mediante la aplicación de penas, para proteger a la sociedad, sin embargo no podemos quedarnos de brazos cruzados para se cumpla el delito de feminicidio y recién mediante una pena castigar al culpable, pensando de esa manera donde quedan los derechos de las mujeres que han sido cruelmente asesinadas.

Es por ello que ahora las funciones elementales de las instituciones del estado, deben apuntar a políticas no solo castigadoras o sancionadoras, ahora se debe establecer un trabajo integrado en equipo para prevenir y disuadir y disminuir los delitos, como es el delito de feminicidio. En ese sentido el motor de todo este sistema de prevención es el Ministerio Público encabezado por el Fiscal de Prevención cuyo trabajo articulado e integrador tiene que estar de la mano con la policía auxiliar y los comités de prevención y disuasión del delito de violencia familia y delito de feminicidio.

Se ha podido demostrar que las estrategias jurídicas sociales han permitido disminuir los delitos como es el caso de la ciudad Dar Es Salaam y Filipinas, consideradas una de las más seguras del mundo, en ese sentido bajo este antecedente exitoso se ha creado mediante un Proyecto de Ley tres estrategias jurídico sociales como son: Talleres de

sensibilización a nivel institucional, Servicio de Vigilancia integrada y Participación ciudadana. Estas tres herramientas trabajan de forma integral y coordinadamente entre el Ministerio Público y la comunidad o colectividad, logando de forma más eficiente y eficaz la Prevención, disuasión y disminución de los delitos de feminicidio.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

1. Con respecto al diagnóstico de la situación actual del feminicidio en el Perú, las cifras son alarmantes y contundentes, el crecimiento de la violencia doméstica o familiar incrementa y esto está asociado al delito de feminicidio al tener mayor cantidad de sentenciados por año. A ello se suma las ineficientes estrategias, normas y leyes penales del Poder Judicial que no han logrado prevenir de forma eficaz el delito de feminicidio.
2. De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas a los operadores del derecho, se puede decir que los factores influyentes que conllevan al crecimiento del feminicidio en el Perú son básicamente dos: la pérdida o el sentido por la humanidad y los valores por parte de los victimarios, es por ello que se debe tener en cuenta estos indicadores al momento de plantear las estrategias de jurídico sociales para prevenir los delitos de feminicidio.
3. El feminicidio y todo tipo de violencia contra la mujer se debe enfrentar seriamente, no solo con marchas en las calles y cárcel para los agresores como medio de represión, sino se necesitan medidas de prevención, esto es, llegar hasta la familia, la cual hay que curar y educar. Las cárceles no solucionan la fábrica de delincuentes y no solucionan el delito, sino el serio enfrentamiento desde los hogares y escuela.

5.2 Recomendaciones

1. Los programas de sensibilización con respecto a violencia familiar y delito de feminicidio son eficientes en la medida que se ubique a la víctima y victimario potencial, para luego hacer un trabajo integrador que permita hacer uso de las herramientas legales para la prevención y disuasión del delito de feminicidio.
2. Es importante recalcar en los estudiantes de educación básica el sentido de la humanidad y los valores, este trabajo se inicia en dos grandes instituciones como son la Escuela y la Familia, en ese sentido el Estado debe desarrollar mecanismos de recuperación de esos valores humanos e inculcarlos en programas de sensibilización para los victimarios potenciales cuya ubicación es un trabajo mancomunado entre la PNP y el Ministerio Público.
3. Implementar el Proyecto de Ley, puesto que describe tres estrategias jurídicas sociales desarrolladas por las autoridades de las ciudades Dar Es Salaam y Filipinas consideradas hoy en día como unas de las más seguras del mundo, para ello debe implementarse mediante Pruebas Piloto en lugares con altos índices de denuncias por violencia familiar.

REFERENCIAS

- #NiUnaMenos. (11 de Agosto de 2016). *las alarmantes cifras del feminicidio en el Perú*. Obtenido de <http://www.america.com.pe/noticias/actualidad/niunamenos-alarmantes-cifras-feminicidio-peru-n242469?ref=anr>
- Alamilla, J. S. (28 de agosto de 2014). *Fundamentos de Investigacion*. Obtenido de <https://shounyalamilla.blogspot.pe/>
- ANDES, A. (6 de junio de 2017). *Ministerio de Justicia de Ecuador alista estrategia nacional para reducir índice de femicidios*. Obtenido de <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ministerio-justicia-ecuador-alista-estrategia-nacional-reducir-indice-femicidios.html>
- Andina. (1 de Enero de 2014). *Se registra en Lambayeque el primer caso de feminicidio en el 2014*. Obtenido de <http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-se-registra-lambayeque-primer-caso-feminicidio-el-2014-490101.aspx>
- BBC Mundo, B. (21 de noviembre de 2016). *País por país: el mapa que muestra las trágicas cifras de los feminicidios en América Latina*. Obtenido de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37828573>
- Caldani, M. (5 de diciembre de 1976). *Derecho y política*. Obtenido de http://www.centrodefilosofia.org/lyD/lyD46_6.pdf
- Calderón, M. J. (14 de enero de 2009). *Feminicidio*. Obtenido de http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2258_18_feminicidio_joshua_calderon_marmolejo.pdf
- Casas, A. J. (15 de octubre de 2003). *encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos*. Obtenido de [https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presemtaciones/Cuestionario_\(trab\).pdf](https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presemtaciones/Cuestionario_(trab).pdf)
- Ciuro, C. M. (15 de noviembre de 2011). *Estrategia Jurídica*. Obtenido de <http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/mundojuridico/article/viewFile/1372/1575>
- Cladem. (5 de Mayo de 2008). *Feminicidio. Monitoreo sobre*

- femicidio/feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana*. Obtenido de http://www.infosal.uadec.mx/derechos_humanos/archivos/15.pdf
- Comercio.pe. (11 de noviembre de 2017). *Nuevo caso de feminicidio: mujer murió tras ser atacada con un pico*. Obtenido de <https://elcomercio.pe/peru/arequipa/nuevo-caso-feminicidio-mujer-murio-atacada-pico-noticia-473100>
- El Comercio. (5 de Febrero de 2017). *El Agustino: sujeto asesinó a su pareja dentro de vivienda*. Obtenido de http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-sujeto-asesino-su-pareja-dentro-vivienda-noticia-1966027?ref=flujo_tags_218644&ft=nota_1&e=titulo
- García, F. (12 de junio de 2015). *¿Qué es una encuesta?* Obtenido de <http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf>
- IIDH & CCPDH. (5 de Mayo de 2006). *I Informe Regional: Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana, San José*. Obtenido de http://www.infosal.uadec.mx/derechos_humanos/archivos/15.pdf
- INEI, I. (15 de enero de 2016). *Estadísticas de Femicidio - Registros Administrativos*. Obtenido de www.inei.gob.pe
- La república. (23 de Agosto de 2016). *Nuevo caso de feminicidio conmociona al Cusco*. Obtenido de <http://larepublica.pe/impresasociedad/796451-nuevo-caso-de-feminicidio-conmociona-al-cusco>
- La República. (23 de Noviembre de 2016). *Piura: Solo un caso de feminicidio resolvió el Poder Judicial en cinco años*. Obtenido de <http://larepublica.pe/impresasociedad/824195-piura-solo-un-caso-de-feminicidio-resolvio-el-poder-judicial-en-cinco-anos>
- Martínez, A. L. (15 de Enero de 2015). *Feminicidio, un fenómeno mundial*. Obtenido de <http://www.actitudfem.com/entorno/genero/mujeres/el-feminicidio-en-el-mundo>
- Ana I. Garita Vélchez (2013). *La Regulación del delito de FEMICIDIO/FEMINICIDIO en América Latina y el Caribe*. Obtenido de: http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicidio.pdf.
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Definición de Feminicidio. obtenido de: <https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas->

- recursos-violencia/principal-dgcvg-recursos/violencia-feminicidio.php
- Hugo, S. (2013). El nuevo delito de feminicidio y sus implicancias político criminales. En Gaceta Penal Pag. 116.
- Mascassi Leon, I. (2005). *Feminicidio en el Perú*. Lima: Florida tristan .
- MIMP, M. (25 de Diciembre de 2016). *Los casos de feminicidio en Perú aumentaron en 2016*. Obtenido de <http://rpp.pe/peru/actualidad/los-casos-de-feminicidio-en-peru-aumentaron-en-2016-noticia-1019057>
- MIMP, M. (15 de junio de 2017). *Programa Nacional contra la violencia y salud*. Obtenido de <https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39>
- Minmujeryeg, M. (11 de noviembre de 2017). *Femicidios*. Obtenido de <http://www.minmujeryeg.cl/sernameg/programas/violencia-contra-las-mujeres/femicidios/>
- Monárrez, J. (1993-1999). *La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez*. Juárez: Frontera Norte Núm 23 vol 12.
- Pacheco Arevalo, B. E. (2013). *El fenicidio y la violencia de genero en la provincia de Ocaña, norte de santander, entre los años 2004 - 2011; analisis social de la comunidad y la normatividad imperante en Colombia* . Colombia : Universidad industrial de santander.
- Poder Judicial. (16 de agosto de 2016). *Feminicidio en Perú: dictaron 100 condenas los años 2015 y 2016*. Obtenido de <https://elcomercio.pe/peru/feminicidio-peru-dictaron-100-condenas-anos-2015-2016-245059>
- Puebla, C. (24 de Agosto de 2016). *Método hipotético deductivo*. Obtenido de <https://mbeuv.files.wordpress.com/2010/09/4-metodo-hipotetico-deductivo.pdf>
- Ramos de Mello, A. (2015). *Feminicidio: un análisis criminológico – jurídico de la violencia contra las mujeres*. Barcelona: Universidad autonoma de Barcelona.
- Russell & Radford. (10 de Febrero de 2017). *Feminicidio*. Obtenido de http://www.infosal.uadec.mx/derechos_humanos/archivos/15.pdf
- Sanchez Barrenechea, J. (2011). *"Si me dejas te mato" El feminicidios uxoricida en Lima*. Lima: ´Pontificia Universidad catolica del Perú.
- Shaw, M., & Travers, K. (25 de abril de 2005). *Estrategias y mejores prácticas*

- en prevención del delito con relación a áreas urbanas y juventud en riesgo*. Obtenido de http://www.academia.edu/22668476/Bangkok_Tailandia_18-25_de_abril_de_2005
- Silvia, A. (5 de diciembre de 1999). *Condiciones de vida y estrategias económicas de los hogares*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/112/11204606.pdf>
- Toledo Vásquez, P. (30 de julio de 2009). *Feminicidio - Naciones Unidas*. Obtenido de <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf>
- Vilchez Florez, K. (2015). *Estrategias de afrontamiento al estrés en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que asisten a un hospital de Ferreñafe*. Chiclayo: Universidad Santo Toribio de Mogrovejo .
- Weisstein, E. (15 de agosto de 2017). *Coeficiente de correlación de Pearson*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson

Anexos

Anexo Nº 01: Guía de Encuesta

Dirigida a los operadores del derecho para conocer la situación de los delitos de Femicidio

Instrucciones: Marque con un aspa (x) el casillero que considere conveniente, según la categoría descrita:

Categorías

5. De acuerdo
6. Totalmente de acuerdo
7. En Desacuerdo
8. Totalmente en desacuerdo

ITEM	CATEGORIA			
	1	2	3	4
1. ¿Considera que las estrategias jurídicas del Poder Judicial dan resultados en la lucha contra el delito de feminicidio?				
2. ¿Considera que se deben tener en cuenta estrategias sociales para ayudar a disminuir el crecimiento del feminicidio?				
3. ¿Actualmente las normas jurídicas están frenando el delito de feminicidio?				
4. ¿Está de acuerdo que las leyes penales recientemente dictadas contribuirán a disminuir el delito de feminicidio en el país?				
5. ¿Considera que se debe establecer estrategias basadas en valores para evitar el crecimiento del feminicidio?				
6. ¿Está de acuerdo que los criminales de feminicidio han perdido el sentido de humanidad?				
7. ¿Percibe Ud. Que el feminicidio íntimo sigue aumentando en el país?				
8. ¿Percibe Ud. Que el feminicidio íntimo familiar sigue aumentando en el país?				
9. ¿Percibe Ud. Que el feminicidio infantil sigue aumentando en el país?				
10. ¿Percibe Ud. Que el Femicidio sexual sistémico sigue aumentando en el país?				
11. ¿Percibe Ud. Que el Femicidio por ocupaciones estigmatizadas sigue aumentando en el país?				

Anexo Nº 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Estrategias jurídicas sociales para disminuir el crecimiento del delito **Feminicidio** en el Perú - 2017

PROBLEMA	OBJETIVOS	CAMPO DE ACCIÓN	OBJETO DE ESTUDIO	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	TÉCNICA	INSTRUMENTO
¿Qué estrategias permitirán disminuir el crecimiento de feminicidio en el Perú?	<p>General Proponer Estrategias jurídico sociales para disminuir el crecimiento del feminicidio en el Perú.</p> <p>Específicos Diagnosticar la situación actual del feminicidio en el Perú. Identificar los factores influyentes que conllevan al crecimiento del feminicidio en el Perú. Elaborar estrategias jurídicas sociales mediante proyectos de Ley para combatir el crecimiento del feminicidio en el Perú.</p>	Estrategias jurídicas sociales	crecimiento del delito Feminicidio	Si se proponen Estrategias jurídico sociales, entonces disminuirá el crecimiento del feminicidio en el Perú.	Independiente Estrategias jurídicas sociales	<ul style="list-style-type: none"> Sociológica Normológica Dikelógica 	Entrevista Análisis Documental	Cuestionario
					Dependiente Delito Feminicidio	<ul style="list-style-type: none"> Feminicidio Íntimo Feminicidio Infantil Feminicidio sexual sistémico: Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas Feminicidio Familiar Íntimo 		

Anexo N°03: caso de feminicidio Perú

cia/noticia-se-registra-lambayeque-primer-caso-feminicidio-el-2014-490101.aspx

English version

INICIO POLÍTICA ECONOMÍA LOCALES REGIONALES INTERNACIONAL

TITULARES FOTOS VIDEOS CANAL ONLINE

Se registra en Lambayeque el primer caso de feminicidio en el 2014



T F G+ In WhatsApp Print

15:23. Chiclayo, ene. 13 (ANDINA).

Luego de varias horas de agonía, falleció una mujer que fue brutalmente golpeada por su conviviente, convirtiendo en el primer caso de feminicidio (asesinato de mujeres por razones de género) en lo que va de este año en la región Lambayeque, informaron fuentes policiales.

En la víspera, Marcelina Salazar Lozada (56) fue internada de emergencia en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo tras sufrir una mortal golpiza de su conviviente Desiderio Ruiz Chuquilín (63).

Hoy, pese a los denodados esfuerzos que realizaron los galenos para salvarle la vida, dejó de existir tras presentar una muerte cerebral.

Los agentes policiales detuvieron al conviviente que será pasado al Ministerio Público para las investigaciones de ley de este caso de feminicidio, que se registró en el populoso distrito de Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque.

En aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, Ruiz Chuquilín podría ser condenado a 35 años de cárcel por la muerte de su pareja.

(FIN) SDC/MAO

Publicado: 13/1/2014

San Mateo
AGUA DE MANANTIAL

Anexo N°04: Femicidio en Chiclayo



ACTUALIDAD POLÍTICA NACIONAL ECONOMÍA INTERNACIONAL POLICIALES

Chiclayo: Mata a cuchilladas a su esposa e hijos y esconde los cuerpos en un pozo de agua [VIDEO y FOTOS]

Jhonny Chozo Neyra acuchilló a su esposa e hijos hasta matarlos. Tras el macabro crimen, el asesino intentó suicidarse tomando pastillas.



Foto 1 de 3



Chiclayo: Mata a cuchilladas a su esposa e hijos y esconde los cuerpos en un pozo de agua.

REDACCIÓN TROME

 02/06/2017 - 16:52h

Más sobre: Chiclayo, Femicidio

Conmoción en **Chiclayo**. Un nuevo caso de feminicidio se registró este viernes. Jhonny Chozo Neyramató a cuchilladas a su esposa e hijos y luego escondió los cuerpos sin vida de su familia en un pozo de agua. Según los primeros reportes, el desalmado sujeto habría actuado por celos.

La mujer fue identificada como Janet Calderon Chavez (30), quien trabajaba como anfitriona de un casino. El sujeto también **acabó con la vida de sus dos hijos**: un niño de 5 años y una niña de dos años.

LO MÁS VISTO



Facebook: mujer habría